

7

24



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS



LA PROTESTA EN LA TRANSICION CHILENA

TESIS

QUE PARA OPTAR EL GRADO DE LICENCIADA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

PRESENTA:

TANIA MODESTA MARTINEZ CARDENAS

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

ASESOR: DR. GUILLERMO GUAJARDO



MEXICO, D. F.

263787 1998

COORDINACION DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

TESIS CON FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A Jerónimo

**Para Modesta, Macrina, Adoración, Estefana, Deni, Pancho, Espartaco, Rogelio,
Heriberto, Zamná, y Mariana**

Para Lourdes, Francesca, Karime, Guillermo, y Sandra

ÍNDICE

	Páginas
Introducción	5
Capítulo I. La búsqueda de la democracia y la violencia política en Chile	
Democracia, gobernabilidad y violencia	12
La violencia política popular	15
Violencia en las protestas populares, 1983-1987	18
El “éxito” del modelo económico y de la consolidación democrática, ¿mito o realidad?	19
Capítulo II. Violencia política y democracia: un difícil equilibrio histórico	22
La larga estabilidad: ausencia de rebeliones campesinas y alta movilización urbana	23
Historicidad y conflicto las rebeliones urbanas	29
De la represión a la acción colectiva 1973-1983	
<i>1. La atomización social y la represión estatal, 1973-1974</i>	42
<i>2. La represión, 1974-agosto de 1977</i>	45
<i>3. La represión, agosto de 1977-1990</i>	47
La acción colectiva antes de las protestas	48
Capítulo III. Las protestas populares: “la explosión de las mayorías”, 1983-1987	
La violencia política durante las protestas, 1983-1987	54

La institucionalización del régimen militar en 1980	58
La crisis económica de 1982	63
Trayectoria, evolución y modos de violencia durante las protestas	
1. Fase de ebullición	66
<i>a) La irrupción</i>	
<i>b) Aparición de los partidos políticos y fragmentación del movimiento de protesta</i>	69
<i>c) Negociación con el régimen militar y luchas sectoriales: fin de la unidad de oposición</i>	73
2. Fase de rutinización de las protestas	78
Actores y movimientos de las protestas populares	80
Capítulo IV. Las sombras de mañana: los resultados de la transición.	
La negociación política para la “transición a la democracia”, 1988-1990	85
Poder civil limitado, autonomía militar e inequidad social	95
La participación política, la social, y la desafección ciudadana	99
La otra cara del <i>jaguar</i> . desigualdad social y crecimiento económico	102
Conclusiones	104
Anexos	111
Bibliografía	115

INTRODUCCIÓN

La lectura más común ofrecida por la historiografía conservadora chilena sobre los movimientos sociales, en especial sobre el movimiento popular, es que se han constituido históricamente como fuerzas desestabilizadoras del sistema político, visión que predominó antes y después de la gran coyuntura histórica de 1989, cuando se efectuó la “transición política a la democracia”¹. En efecto, los movimientos populares se han comportado de forma amenazante para el sistema político en ciertas coyunturas de la historia chilena, pero lo que a menudo se ignora acerca de éstos son las posibilidades de desarrollo que tienen como procesos y/o proyectos sociales de democratización en el largo plazo.² Cabe aclarar que si bien un elemento de identidad de la acción social del movimiento popular chileno ha sido la violencia en un contexto de injusticia, también es importante decir, que esto no es ni ha sido su sustancia central en su historicidad. No obstante, este aspecto es importante a fin de que la comprensión de la lógica por la cual surge la violencia contribuya a reducirla cada vez más y a incrementar los grados de racionalidad en la lucha política y no se transforme en un estímulo a la perpetuación de los antagonismos.

¹ Manuel Antonio Garretón distingue entre el proceso democrático (que tiene un largo alcance histórico) y la ‘transición democrática’ (que involucra, más bien, un problema de ajuste coyuntural)”, Hernán Villablanca Z, ‘Democracia liberal en Chile. una perspectiva histórica’, *Proposiciones*, núm. 24, Sur, agosto, 1994, p. 89. Si bien en este trabajo vamos a referirnos al proceso de transición del régimen militar a uno civil, lo analizaremos a partir de sus antecedentes históricos, en que la transición es, en cierta forma, el resultado

² Gabriel Salazar, *Violencia política popular en las “grandes alamedas”, 1947-1987*, Santiago de Chile, Sur, 1990, pp. 71-73

Así, este trabajo presenta un análisis histórico de la violencia política proveniente de los sectores populares en Chile durante el periodo de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), cuyo lapso de *violencia política popular (vpp)* más intenso ocurrió entre 1983 y 1987. Este periodo estuvo caracterizado por movilizaciones masivas que llamaremos *protestas populares*. Éstas, si bien en sí mismas constituyeron actos pacíficos, tuvieron la característica de estallar en hechos de violencia ejercida por distintos protagonistas del espectro social como una forma de manifestar la lucha contra la dictadura militar.

Para la comprensión de la *vpp* de este periodo se revisan sus antecedentes históricos desde el siglo XIX; se analiza su contexto que la favoreció dentro del régimen militar y, finalmente, se examinan sus efectos en el proceso de transición política de 1989 que condujo de un régimen militar a otro civil.

El interés en este trabajo por el análisis de acontecimientos como las revueltas, las guerrillas y la represión estatal responde a una inquietud teórica de cómo acercarse al problema de la coacción y del uso de la violencia el cual se presenta como un elemento constitutivo de lo político.

Para abordar el tema de la *vpp* en este trabajo es necesario entenderla como las acciones de fuerza antirégimen ejercida por los sectores populares que buscan cambiar las relaciones de poder y que desembocan ya sea en revueltas, guerras civiles, insurrecciones y/o alzamientos.³ En el caso particular de Chile la violencia política ha sido ejercida por diversos actores del espectro económico-social y ha tomado la forma de guerras civiles en el siglo

³ David Kowalewski, "Periphery revolutions in world-system perspective, 1821-1985", *Comparative political studies*, vol 24, no 1, abril, 1991, p. 92

pasado y revueltas o acciones de resistencia en esta centuria. En el periodo de 1973-1989 la violencia política de los sectores populares, contenida en las acciones de resistencia frente a la represión y en las protestas de 1983 a 1987, se dio en torno al problema concreto de lucha contra la dictadura militar de Augusto Pinochet y por el regreso a la democracia.

También en este trabajo se busca destacar los movimientos de violencia política ‘popular’. Es decir, en Chile ha persistido un patrón de movilización popular con contenidos de violencia manifestada en diferentes modos y grados y en el que se han desenvuelto identidades múltiples.

Por otra parte, el papel de las guerrillas será tratado conforme la magnitud y el impacto que ha cobrado en la historia chilena, en la que no han tenido una receptividad social masiva, a pesar de la afirmación de Jorge Castañeda expuesta en su obra *La utopía desarmada*⁴, donde su autor identifica a la izquierda de los años setenta y ochenta como el equivalente a la izquierda militar

La *vpp* ha sido una constante con plena vigencia en la vida política chilena, y tiene un gran potencial para explicar el futuro político de este país, y también como tema para los estudios latinoamericanos por cinco razones:

1) En la actualidad existe una visión ‘triumfalista’ adoptada por las élites políticas dominantes respecto al proceso de transición democrática en Chile. Esta perspectiva no considera los límites de la democracia actual, entre los cuales destacan las prerrogativas de los militares asentadas en la Constitución de 1980.⁵ Tampoco contempla, de acuerdo con Norbert Lechner, los signos de desafección ciudadana producida por la ausencia de alternativas reales

⁴ Jorge G. Castañeda, *La utopía desarmada*, México, Joaquín Mortiz, 1993, pp. 195-200, 281-284, 389-391.

⁵ Guillermo O’Donnell, ‘Ilusiones sobre la consolidación’, *Nueva Sociedad*, núm. 144, junio-agosto, 1996, pp. 70-89.

dentro del sistema político ⁶

2) Respecto al periodo dictatorial, es importante decir que muchos de los trabajos conocidos en México fueron producidos por el exilio chileno ligado a la Unidad Popular (UP) e inmerso en el proceso político de la lucha contra la dictadura. De ahí que dicha literatura tuviera un marcado compromiso social, "militante", con los movimientos populares de izquierda. Sin embargo, las lecturas utilizadas para este trabajo toman distancia de las surgidas en medio de aquellos trabajos que se pronunciaban por un cierto compromiso político con los sectores populares.

3) Además, la revisión de una base de datos de tesis sobre Chile presentadas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), muestra cómo, hasta 1993, la perspectiva histórica y el tema de las protestas en escenarios de transición a un régimen civil no ha sido objetivo de investigación entre los estudiantes.⁷

4) Ha existido un predominio de trabajos que ponen énfasis en los análisis de las élites y sus perspectivas: estudios sobre las estructuras del Estado, los partidos políticos y los grupos de poder. Pero existe una menor preocupación por las vidas e intereses de los grupos populares, que sólo llaman la atención en tiempos de recambio electoral o cuando se convierten en una amenaza para las clases hegemónicas o sus intereses.⁸ No obstante, podemos señalar un

⁶ Norbert Lechner, "Las sombras del mañana", *Colección de Estudios CIEPLAN*, núm. 37, junio, 1993, pp. 69-75.

⁷ De acuerdo con esta base de datos, elaborada entre el Colegio de Estudios Latinoamericanos y el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la División de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dentro del proyecto Sistema de Información sobre América Latina (SILA), y que comprende de 1949 a 1993, se señala que si bien el periodo de la dictadura ha sido uno de los más estudiados en la UNAM (64.2% de un total de 42 tesis), no existe una sola con un análisis histórico. Además, resultan prácticamente inexistentes, por lo menos hasta 1993, las tesis que abarcan el tema de las revueltas, rebeliones, las protestas, etcétera. Véase la "Presentación" de la base de datos Teslat (Tesis sobre Latinoamérica) por Javier Palomares Palomares. Esta base puede ser consultada en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, México.

⁸ Susan Eckstein, "Power and Popular Protest in Latin America", en Susan Eckstein, *Power and Popular Protest in Latin American Social Movements*, Berkeley, University of California Press, 1989, p. 2.

conjunto de trabajos producidos en los últimos diez años entre los que destacan los libros *Violencia Política Popular* de Gabriel Salazar; *Power and Popular Protest* de Susan Eckstein; *Shantytown protest in Pinochets's Chile* de Cathy Lisa Schneider; y el reciente libro de Tomás Moulián, *Chile actual: anatomía de un mito*,⁹ y que muestran la vigencia del debate sobre la dicotomía estabilidad/violencia desde la perspectiva histórico-social.

5) Porque existe una amplia difusión de libros sobre América Latina representativos de una tendencia de investigaciones —*La utopía desarmada* de Jorge Castañeda es un ejemplo de ello—, que descuidan los estudios sistemáticos sobre el amplio mosaico de organizaciones y movimientos populares, las formas de organización democrática que éstas desarrollaron, así como el significado de la represión en los países de América Latina, factores que constituyeron una fuerza formativa en la organización y la radicalización ideológica de la izquierda. Acontecimientos con contenidos de violencia política como en el caso de las huelgas, insurrecciones, tomas de tierras, motines y ocupaciones de fábricas son momentos que han marcado la historia de América Latina y que han sido poco analizados en la historia política.¹⁰

Así, la estructura de este trabajo se compone de cuatro capítulos: en el primero se plantean conceptos mínimos de análisis para interpretar la violencia política ejercida por los llamados *sectores populares*. Aunque no se plantea un sistema teórico interpretativo de la *vvp*, ni se abarca puntual y/o sistemáticamente una teoría, los conceptos presentados en este trabajo contribuyen a explicar algunos de los objetivos planteados en este trabajo. En el

⁹ Tomás Moulián, *Chile actual anatomía de un mito*, Santiago de Chile, Universidad Arcis-Lom Ediciones, 1997.

¹⁰ James Petras y Steve Vieux, 'El pragmatismo desarmado', *Problemas del Desarrollo*, vol 26, núm 103, octubre-diciembre, 1995, pp 173, 175 y 179

segundo capítulo, se presenta una reflexión general que ofrece una dimensión histórica de la violencia política de estos sectores en Chile. Se explica por qué el campo no ha sido tradicionalmente un terreno de cuestionamiento al orden social y, en cambio, la característica principal de la *vpp* en la historia de Chile es la que se ha suscitado en el espacio urbano.

Sobre la violencia política desde el Estado —explicada en el segundo capítulo—, se expone el significado de la represión sobre el movimiento popular y de qué forma ésta ha inhibido o desatado, a manera de resistencia la *vpp*. Una de las dimensiones fundamentales que cobró la *vpp* durante este periodo fue la que resultó como respuesta frente a la represión de la dictadura militar y no necesariamente como una forma de cambio social. La dictadura, como se explica en el segundo capítulo, dispuso los mecanismos de atomización social por medio de la represión que, entre otras características, hace que la acción política colectiva —aún si ésta no es violenta— sea considerada hasta la actualidad como un atentado contra la estabilidad social.

En el tercer capítulo, se describe e interpreta la violencia política en el periodo de las *protestas populares* (1983-1987) durante el cual se desarrollaron veintidós de ellas¹¹ contra el régimen militar de Pinochet, y cuya característica común fue el uso de la violencia en diversos modos y grados. Más allá de las interpretaciones que caracterizaron a la rebelión popular de esos años como una cuestión de *anomia social*,¹² es importante explorar las opciones políticas y organizacionales a los que estaban asociados estos hechos de violencia. Se muestran las distintas etapas en que se desarrollaron los hechos de *vpp* y su significado.

¹¹ Gabriel Salazar, *Violencia política*, op. cit., p. 374.

¹² Al respecto veáanse Eugenio Tironi "Pobladores e integración social" en *Proposiciones* núm. 14, *Marginalidad, movimientos sociales y democracia*, Eugenio Tironi, José Bengoa y Javier Martínez (eds.), Santiago de Chile, Sur, 1987, y Eduardo Valenzuela. *La rebelión de los jóvenes*, Santiago de Chile, Sur, col. Estudios Sociales, 1984, pp 7-8.

político cuando en una primera fase, se obligó al régimen pinochetista a una negociación política; y en un segundo ciclo, se expone cómo la actitud violenta y rupturista sin propuesta alternativa, constituyó un factor decisivo para negociar la transición política de un régimen militar a uno civil en los términos impuestos por los militares.

Finalmente, en el cuarto capítulo se hace una reflexión de cuáles han sido los alcances del proceso político de 1989-1990 para la minimización de la violencia política de carácter popular. Se realiza una revisión de la *vpp* en el contexto de la lucha por la democratización experimentada en Chile con el cambio a un gobierno civil en 1990, y las perspectivas futuras de los movimientos de *vpp*.

Actualmente, en Chile existen fuentes latentes de inestabilidad que son ampliamente visibles en la violencia social de tipo criminal¹³, la cual en pocas ocasiones de la historia reciente se ha logrado traducir en *vpp*. Sin embargo, en el último capítulo también se muestra cómo la “democracia protegida”¹⁴ ha dejado sin respuesta y solución algunas demandas democráticas importantes para la estabilidad política y social del que ahora se exhibe desde los círculos oficiales como el país más exitoso de la región en términos económicos y políticos.¹⁵

¹³ Véase el capítulo “La violencia de la ciudad”, en Tomás Moulián, *Chile actual*, *op. cit.*, pp. 125-143.

¹⁴ El término “protegida” fue acuñado por el régimen militar de Pinochet para hacer una crítica contra la presunta neutralidad de los fines y valores de la democracia liberal representativa; véase Tomás Moulián, “Chile, las condiciones de la democracia”, *Nueva Sociedad*, núm. 140, noviembre-diciembre, 1995, p. 5

¹⁵ Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, *Chile: ¿una experiencia exitosa en América Latina?*, Madrid, Irela, dossier núm. 60, junio, 1997, pp. 1 y 3.

CAPÍTULO I

La búsqueda de la democracia y la violencia política en Chile

Democracia, gobernabilidad y violencia

El análisis de la violencia política de los sectores populares durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) resulta polémico, entre otras razones, porque hoy se presenta bajo la forma de estallidos sociales o golpes armados, en la llamada *transición a la democracia*. La dictadura militar de Pinochet fue un régimen que potenció los conflictos sociales violentos, siendo la coacción, de la que resultaron graves violaciones a los derechos humanos, la tendencia dominante para acallar cualquier indicio de rebeldía, especialmente entre los sectores identificados con los partidos y organizaciones de izquierda e incluso personas sin adscripción política.¹⁶ El regreso a la democracia supuso que la violencia como forma de expresar o dirimir conflictos se volvería obsoleta y por lo tanto no habría necesidad

¹⁶ El informe de la Comisión Rettig, la cual analizó todos los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, del 11 de septiembre de 1973 a marzo de 1990. ofrece un resumen en el que señala la existencia de 2279 víctimas como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos y la violencia política. 52% estaban asociadas a las organizaciones y partidos de izquierda (PS, MIR, PCCH, MAPU y FPMR), 46% no tenían afiliación política, y el resto (2%), pertenecía a los partidos del centro político. *Síntesis del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación*, Santiago de Chile, Comisión Chilena de Derechos Humanos-Centro Ideas, 1991, pp. 92-93

de recurrir a ella, o por lo menos que disminuiría según se fueran consolidando las instituciones democráticas. Sin embargo, a pesar de que a Chile se le ha caracterizado por haber logrado una exitosa “transición a la democracia” tanto en términos económicos como políticos¹⁷, todavía ocurren acciones de violencia política como las llevadas a cabo entre diciembre de 1996 y enero de 1998¹⁸ por el grupo armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), estallan violentas protestas como las protagonizadas por los mineros del carbón entre mayo y junio de 1996, además de los ataques armados a empresas madereras por parte de indígenas mapuches en diciembre de 1997.¹⁹

Esto nos lleva a la siguiente interrogante: ¿A partir del proceso de transición política de 1989, el afianzamiento y ampliación de la democracia han conducido en la actualidad a la minimización de la violencia como expresión política y, aún más importante, a la eliminación de ésta en la historicidad de los movimientos populares en Chile? ¿Cuáles han sido los alcances que ha tenido la “transición democrática” en la resolución de conflictos políticos violentos surgidos dentro de la sociedad?

El problema de la gobernabilidad democrática se ha vuelto una de las aspiraciones centrales tanto en la teoría como en la práctica política de América Latina; así lo señalaba un documento publicado en 1993 por la Comisión Sudamericana de Paz en Chile, en el que se destacaba el problema del conflicto social inherente a sociedades injustas y desiguales²⁰. A partir de eso se concluía que era necesario consolidar y profundizar los ‘procesos de

¹⁷ J. Samuel Valenzuela, “*The origins and transformations of the Chilean Party System*”, Kellogg Institute-Department of Sociology, University of Notre Dame, s/f, p. 1 (mimeo.)

¹⁸ Véanse los periódicos *La jornada*, 5 de enero, 1997, pp. 1 y 26; *Reforma*, 10 de enero, 1997, p. 19A; la revista *Proceso*, núm. 1054, 1o. de enero, 1997, pp. 49-51, el periódico *La época*, “Muertos dos policías y un frentista en tiroteo”, viernes 9 de enero de 1998

¹⁹ Véanse *La jornada*, 6 de junio, 1996, p. 50, y *La época*, “Realizan operativos en comunidades mapuches”, lunes 8 de diciembre 1997

²⁰ Comisión Sudamericana de Paz, *El sentido de una tarea*, Santiago de Chile, 1993, p. 1.

construcción democrática nacional” los cuales debían estar caracterizados por ‘la estabilidad y modernización de ordenamientos institucionales participativos y pluralistas’,²¹ por lo que era prioritario crear *consensos* frente a los problemas de la pobreza, la seguridad pública, la estabilidad de la inversión y del empleo, el papel de las fuerzas armadas, el desarrollo y la participación del poder local, la identificación de las formas de inserción en las nuevas realidades regionales y mundiales; se subrayaba además la importancia de los partidos políticos y la necesidad de crear una cultura de la paz. Pero la búsqueda de esta última requiere de un análisis que no sólo considere los aspectos jurídico-formales, ya que una perspectiva de esta índole no observa a la violencia armada²² como un problema producto del sistema político y económico, sino provocado por agentes externos y “grupos extremistas” que buscan desestabilizar al país.²³

El documento de la Comisión Sudamericana de Paz es el resultado de un análisis que hacen, gente de la sociedad civil, ex presidentes y ex altos funcionarios gubernamentales —algunos de ellos vinculados a diversos procesos de transición en América Latina²⁴—, quienes no abordan los aspectos generadores de la violencia. omiten el análisis sobre el modelo económico neoliberal que hoy predomina en la región y las consecuencias que éste ha traído al ser contrario a un modelo de desarrollo social²⁵, además de que tampoco señalan sobre la necesidad de una democracia en la que exista no sólo la alternancia en la

²¹ *Ibid.*, p. 3

²² *Ibid.*, p. 9.

²³ *Ibid.*, p. 10

²⁴ Entre los que se encuentran Raúl Alfonsín, de Argentina, Fernando Henrique Cardoso Brasil, Domingo Laino de Paraguay, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, entre otros. Incluso, por Chile se encuentra el cardenal Raúl Silva Henríquez cuyo nombre lleva una población y quien desde 1973 como cardenal y arzobispo de Santiago constantemente denunció la acción violenta del régimen militar contra la sociedad chilena. *Ibid.*, p. 14.

²⁵ Véase al respecto Carlos M Vilas, ‘De ambulancias, bomberos y policías: la política social del neoliberalismo’, *Desarrollo Económico*, vol. 36, núm. 144, enero-marzo, 1997, pp. 931-951.

administración del poder, sino también la posibilidad real de desarrollar distintos proyectos políticos y económicos. En este sentido es aplicable a Chile la afirmación del sociólogo Hugo Zemelman sobre la forma de la democracia en América Latina en la década de 1990, de que dicha democracia tiene como característica principal construir “una institucionalidad que preserve un orden político” basado en el discurso del consenso, “que plantea el compromiso multclasista en torno de fórmulas políticas y económicas que se presentan como las únicas viables”²⁶, en este caso la fórmula de la democracia neoliberal que en Chile está identificada con las élites políticas civiles y militares.

Violencia política popular

Para el análisis de la violencia política se han retomado las propuestas que el historiador chileno Gabriel Salazar plantea en su obra *Violencia Política Popular en las grandes “alamedas”*. El trabajo de Salazar resulta relevante porque constituye uno de los pocos pero más importantes esfuerzos por entender la historia política chilena, no sólo a partir de las instituciones, sino que privilegia el análisis de las actitudes y las acciones internas del movimiento popular considerando no sólo el conflicto, sino también el análisis de la violencia ejercida por éste desde un enfoque histórico.

De acuerdo con Salazar, la *vpp* designa a las acciones de fuerza las cuales atentan en diversas formas y grados la normatividad constitucional y que son ejercidas no sólo en términos de cambio social, es decir, para tomar, cambiar y/o destruir el poder político

²⁶ Hugo Zemelman, “La democracia limitada y los excesos teóricos”, en Pablo González Casanova y Marcos Roitman (coords), *La democracia en América Latina. Actualidad y perspectivas*, Madrid, Universidad Complutense-CIH/UNAM, 1992, p. 95.

hegemónico, sino también para manifestar una forma de resistencia frente a la coacción de Estado²⁷ Una de las principales tesis de Salazar sobre el surgimiento de la *vpp* es que el sistema político chileno ha procurado mantener la estabilidad política por medio de leyes que no tienen una correspondiente estabilización sustentada en las causas que generan la violencia. La incongruencia entre las necesidades económicas y políticas y las leyes ha provocado que en muchas ocasiones los sectores populares se encuentren sobre el filo de la ley y, en este sentido, la estabilidad constitucional se ha visto amenazada por las revueltas populares debido al “bajo índice de legitimidad social y económico” del sistema político ya que esta “estabilidad constitucional” sólo ha sido y es funcional a una parte de la nación.²⁸

Así, la *vpp* en la historia chilena ha aparecido en distintas situaciones políticas en las tomas de tierra, en las manifestaciones, en los paros, en las jornadas de protesta y, por supuesto, en hechos explícitamente violentos como los sabotajes y las formas de organización armada. Para este autor la gran mayoría de las formas de *vpp* han sido concebidas en su origen como formas pacíficas, en una actitud de “respeto (o temor) al orden establecido ..” si bien “en términos de intencionalidad, ha prevalecido más la actitud psíquica de ruptura con el sistema, que la instrumentación física de la ruptura”. Por ello concluye, a partir de su análisis histórico de la violencia, que hay un bajo índice de uso de armas hasta antes de 1973 y la utilización de instrumentos ha sido resuelto improvisadamente, en el último momento. Esto explica por qué el cuerpo, las piedras y palos (elementos de entorno) han sido los instrumentos utilizados para la violencia²⁹

²⁷ Gabriel Salazar, *Violencia política.. ,op. cit* , p. 67.

²⁸ *Ibid* , p 87.

²⁹ *Ibid*., pp 171-176

En el caso chileno la *vpp* ha cobrado distintos significados y ha tenido básicamente tres orientaciones: *a*) orientadas fundamentalmente contra la propiedad privada y pública en general o contra sus materializaciones particulares (patrones y empresas), *b*) dirigidas contra el sistema político nacional y sus distintas instancias orgánicas (gobiernos, autoridades, adversarios, etcétera) como resultado de una percepción politizada de la situación global, y *c*) orientadas a realizar en el terreno el modelo de sociedad contenido en el proyecto histórico popular. La de clase *a* es generalmente percibida como fenómeno delictual o bien legal. Ésta no tiene un gran impacto en el sistema dominante, mientras que las de tipo *b* sí lo hace. Aunque “en el caso chileno, la *vpp* dirigida contra el aparato económico ha producido y produce menos nerviosidad que la dirigida contra el aparataje político. Como ya se ha visto, ha sido el Estado y no el capitalismo, el que ha coronado el circuito neurálgico de la sociedad nacional. En cambio, las de tipo *c* son escasas “La lucha contra la negación ha sido más determinante en la política popular, que la lucha por la autoafirmación”, quizá sólo el movimiento mutualista de principios de siglo se instale en este último tipo de proyección política debido a que pudo construir un orden paralelo”³⁰

Por lo que se refiere al concepto de *popular*, Salazar lo concibe en un sentido amplio, conforme los actores sociales aparecen en los procesos históricos; y que está integrado por sujetos de distinta adscripción en la estructura económico-social, hombres, mujeres y niños afectados por situaciones de explotación, represión y exclusión, quienes construyen redes de identidad a partir de dichas circunstancias y que tienden a converger masiva y homogéneamente mediante la planeación de acciones específicas. En la obra de Salazar, lo popular se define por el sentido y significado general de las conductas articuladas en esos

³⁰ *Ibid.*, pp. 127 y 128.

hechos, más que por una estricta definición de “clase” social³¹

Violencia política en las *protestas populares*, 1983-1987

La *vpp* es un fenómeno social que aparece repetidamente en la historia chilena y no proviene —como se ha supuesto— de una identidad violenta, inmutable e inherente a los sectores populares, sino de una matriz socioeconómica, política y de acumulación histórica en la vida del país. Estos hechos forman en conjunto entrabados de cadenas mayores que perfilan tendencias de largo plazo y definen el movimiento histórico de *vpp*. El periodo del régimen militar registró uno de los más altos índices de *vpp* en los últimos cuarenta años de la historia de Chile, superado únicamente por el periodo de Salvador Allende (1971-1973)³² Particularmente, el periodo entre 1983 y 1987 constituyó el auge de *vpp* durante el régimen militar. Este lapso fue designado por los historiadores, Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, como el de las *protestas nacionales*, porque éstas articularon a diversos actores sociales y políticos en la acción concreta contra el régimen militar³³, y porque estas movilizaciones ocurrieron en gran parte del país, desde Arica (al norte) hasta Punta Arenas (extremo austral).³⁴ Si bien se reconoce el carácter *nacional* de las protestas en un sentido territorial, ya que hubo momentos en que la rebelión se extendió a lo largo del país, el término *nacionales* contiene imprecisiones porque ofrece un sentido homogeneizante que involucra

³¹ Véanse de Gabriel Salazar, *Violencia política ... op. cit.*, y “Construcción del Estado en Chile: la historia reversa de la legitimidad”, *Proposiciones*, núm 24, agosto, 1994, p. 101

³² Véase en el anexo de este trabajo el cuadro realizado por Gabriel Salazar, en el que se describen frecuencias y promedios anuales de hechos de violencia política popular por ciclo presidencial.

³³ Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, *La explosión de las mayorías Protesta Nacional 1983-1984*, Santiago de Chile. Eco, 1985, pp 17-22.

³⁴ *Ibid.*, p. 84

permanentemente a todos los sectores sociales durante el lapso de las protestas, pero en la práctica esto no sucedió debido a que algunos actores tuvieron un protagonismo intermitente sobre todo en las etapas más violentas, con la excepción de los *pobladores*,³⁵ quienes mostraron una presencia constante en las movilizaciones. Por esta razón algunos analistas denominaron a las protestas como “la revuelta de los pobladores” o “la rebelión de los jóvenes”.³⁶ Aún más, resulta impreciso llamarlas de este modo porque las protestas no fueron eminentemente juveniles ni poblacionales: al interior de los pobladores y los jóvenes existían otras identidades (mujeres, cristianos, sindicalistas y estudiantes). Además las protestas con hechos de violencia tendieron a localizarse en la capital de Chile y no en todo el país, particularmente en las poblaciones localizadas al sur de Santiago. De ahí que el término más adecuado sea el de *protestas populares*, como las ha definido Salazar, porque aglutinaron a diversos actores de distintas clases y grupos sociales, quienes a partir de su circunstancia como subalternos construyeron redes de identidad al confluir en torno al problema concreto de la lucha contra la dictadura.³⁷

El “éxito” del modelo económico y de la consolidación democrática. ¿mito o realidad?

En la perspectiva de que existe una violencia política popular latente, se puede criticar la idea globalizante de concebir a la nación como un todo, presentando una concepción ahistórica de la sociedad, es decir, sin conflictos ni fuerzas diversas y mucho menos, sin hechos de

³⁵ “Pobladores” es un localismo chileno usado para nombrar a los marginales de las zonas periféricas urbanas.

Los pobladores serían el equivalente de los “colonos” en México

³⁶ Gabriel Salazar, *Violencia política*, op. cit., p. 374, y Eduardo Valenzuela, op. cit.

³⁷ Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, op. cit., pp. 86-96, y Gabriel Salazar, *Violencia política...*, op. cit., pp. 179-208

violencia. Esta concepción, producto de una historiografía conservadora, ha sido uno de los argumentos más fuertes para presentar a Chile como el modelo democrático más edificante en la historia latinoamericana reciente.³⁸

Pero un sistema político que desconoce a las distintas fuerzas y no valora sus demandas, no elimina el conflicto en su forma extrema que es la violencia, sino por el contrario, se convierte en el principal obstáculo para crear una mayor estabilidad, causa constituyente de la generación de violencia. En la actualidad, uno de los mayores retos que enfrenta la democracia chilena es, precisamente, el permitir un desarrollo político en el que los sectores populares tengan centralidad en los procesos de construcción del Estado.³⁹

Este tipo de análisis histórico que pone como valores supremos a la preservación de la “unidad nacional”, la “reconciliación nacional” y el “consenso”,⁴⁰ aparece tanto en la retórica de los políticos como en algunos analistas, chilenos y/o extranjeros.⁴¹ Esta perspectiva supone verificar *a priori* la existencia de una sociedad homogénea, una unidad cultural que vive en la estabilidad sin conflictos ni violencia, sin divisiones paralizantes como lo es la clase social, que segmentó a la sociedad chilena hasta antes de 1973.⁴² Así, la actual prensa de negocios, por ejemplo, con frecuencia enfatiza la admiración mundial por la progresiva

³⁸ Gabriel Salazar, *Violencia política ... op. cit.*, p. 21

³⁹ Gabriel Salazar, “Construcción del Estado ..” *op. cit.*, pp. 92-110

⁴⁰ El informe oficial sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile fue hecho con el fin de lograr la “reconciliación entre todos los chilenos”. Véase Comisión Chilena de Derechos Humanos, *Síntesis del informe.. op. cit.*, p. 11. Tomás Moulián señala que la idea del “consenso” cobra el significado de armonía y manifiesta la etapa superior del olvido frente a lo que fue la dictadura, es la “desaparición del nosotros en el ellos”, *Chile actual ... op. cit.*, pp. 37-38

⁴¹ Gabriel Salazar, *Violencia política ... op. cit.*, pp. 71-74

⁴² *Ibid.*, p. 21. Véase también Francisco Zapata, “Crisis y movilización en Chile”. *Foro Internacional*, vol. XXVI, núm. 2, octubre-diciembre, pp. 222-224. Zapata se refiere al proyecto ideológico del consenso, que condujo eventualmente al golpe de estado y que tenía como fin “descalificar cualquier concepción de la sociedad chilena en donde las clases desempeñen el papel explicativo fundamental de la trayectoria política de Chile”

evolución del modelo económico chileno⁴³ y la consolidación de su democracia⁴⁴

Mediante esta interpretación de la sociedad chilena se ha subvalorado el fenómeno de la rebelión en la historia y se ha procurado disuadir cualquier otra perspectiva o concepción de análisis, sugiriendo que sólo la violencia ejercida por los sectores populares es condenable desde el punto de vista legal y/o ético, por lo que hay que eliminarla sin tan sólo analizar las causas.⁴⁵

Por el contrario, un examen de la historia social del país indica que la violencia política popular ha sido un fenómeno que ha configurado ciclos de gestación, desarrollo y neutralización de violencia política contra el Estado. Su recurrencia e intensidad está relacionada, fundamentalmente, con el sistema político conservador predominante. Las variaciones se presentan de acuerdo a la forma en que el sistema político es reciclado⁴⁶

⁴³ Jonathan Fricdian, redactor de *The Wall Street Journal* para *Reforma* "El éxito chileno levanta ampollas en otros países de América Latina", México, 3 de octubre, 1996, p 36A.

⁴⁴ Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, *op. cit.*, p. 3.

⁴⁵ Gabriel Salazar, *Violencia política... op. cit.*, pp. 88-91

⁴⁶ *Ibid.*, pp 106-108.

Capítulo II

Violencia política y democracia: un difícil equilibrio histórico

En este capítulo se ubica el problema de la violencia política popular en el periodo de las protestas dentro de ciertas tendencias y transformaciones históricas ocurridas en Chile.

Se discutirán dos aspectos recurrentes en torno a la violencia política dentro de la historia chilena: 1) que constituye un fenómeno marginal y, 2) que la estabilidad política es un aspecto consustancial al sistema político chileno. Según afirma Barrington Moore, la violencia no siempre apunta a cambios “revolucionarios”⁴⁷, así como no siempre constituye “una acción creativa que tiene por sí misma la capacidad de renovar la sociedad”⁴⁸. Incluso, aunque un movimiento de rebelión contenga un fondo social “renovador” o “revolucionario”, la violencia popular no siempre resulta un medio eficaz para la búsqueda de objetivos políticos y sí demasiado costoso en pérdidas de vidas humanas.

Con respecto a esto y por otra parte, James Petras y Steve Vieux tratan de rescatar las “experiencias positivas de cambio revolucionario”⁴⁹, detrás de todos estos movimientos

⁴⁷ Barrington Moore, *Bases sociales de la obediencia y la rebelión*, UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales, México, 1989.

⁴⁸ Véase la definición de “Violencia” hecha por Mario Stoppino en Norberto Bobbio, *Diccionario de política*, vol. 2, México, Siglo XXI, 1986, p. 1631

⁴⁹ James Petras y Steve Vieux, “El pragmatismo ...”, *op. cit.*, p. 173

sociales que han ejercido la violencia en de la historia chilena: tras las tomas de tierra se fundaron barrios con organización política sofisticada que dio lugar a la creación de consejos democráticos para el mejor funcionamiento de la comunidad; o las protestas populares contra el régimen de Pinochet entre 1983-1987 que llevaron a plantear la salida del poder del régimen militar. En el caso particular de las tomas de tierra el texto de Schneider señala que la experiencia de la invasión de tierras trajo consigo una experiencia de socialización y ofreció a sus participantes el sentido y conciencia del poder colectivo llevándolos incluso a confrontaciones violentas con la policía, la prensa, los legisladores y el gobierno ⁵⁰

La larga estabilidad: ausencia de rebeliones campesinas y alta movilización urbana

Algunos politólogos como Arturo y Samuel Valenzuela consideran a Chile como modelo democrático de larga data.⁵¹ Al analizar los orígenes de la democracia, argumentan que las crisis desatadas a lo largo de la historia chilena “no alteran el que se puede ver, a la larga, como un desarrollo esencialmente lineal hacia un mayor nivel de competitividad y de participación”⁵² Desde una perspectiva histórica, la lucha por la democratización en Chile presenta también discontinuidades y conflictos que no pueden ser minimizados como “accidentes históricos”.⁵³ Tal como Martínez y Tironi señalan:

⁵⁰ Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, pp. 61-62.

⁵¹ Cf. Arturo y Samuel Valenzuela, “Los orígenes de la democracia. Reflexiones teóricas sobre el caso chileno”, *Estudios Públicos*, núm. 12, primavera, 1983, pp. 5-39. Al respecto véanse también las críticas que hacen a esta perspectiva de análisis Tomás Moulián en “Chile, las condiciones...”, *op. cit.*; y Gabriel Salazar, *Violencia política...*, *op. cit.*

⁵² Arturo y Samuel Valenzuela, “Los orígenes...”, *op. cit.*, p. 11.

⁵³ *Ibid.*, p. 8.

Si bien Chile constituyó por largo tiempo una de las pocas excepciones democráticas de América Latina, la característica verdaderamente peculiar de su régimen democrático parece haber sido mucho más su *estabilidad* que su temprana o rápida *ampliación* de la ciudadanía, tanto como la legitimación de canales de participación social autónoma de los sectores populares, fueron procesos relativamente tardíos.⁵⁴

Así, paralela a la estabilidad institucional se encuentra una historia de rebeliones populares predominantemente urbanas “La percepción historiográfica actualizada no constata la estabilidad del sistema político nacional como una intrínseca ‘virtud estructural’ que atraviesa toda la historia del país, sino más bien ciclos o momentos de estabilidad equilibrándose sobre una tensa inestabilidad fundamental de largo plazo”⁵⁵. Si bien históricamente Chile ha tenido un desarrollo sólido respecto a los aspectos formales de la democracia electoral, resulta importante un análisis que tome en cuenta la historicidad del conflicto.

La estabilidad ha consistido en que la frecuencia de las guerras civiles o de los golpes militares ha sido menor en comparación con otros países y que en las interfases de paz sociopolítica ha existido una alta gobernabilidad. Esta singularidad chilena es resultado de que la violencia política abierta ha estado regida por una mayor “economía de sangre”; quizá porque cuando la violencia se ha presentado, ha marcado profundamente a la sociedad, ya sea porque gasto de sangre y represión (1891), o por sus efectos políticos decisivos (1924-1932). Sin embargo, Moulián señala que pese a ese “ahorro” de sangre, la historia política registra importantes episodios de “violencia mayor”, algunos de larga duración y cruenta intensidad

⁵⁴ Javier Martínez y Eugenio Tironi, *Las clases sociales en Chile, cambio y estratificación, 1970-1980*, Santiago de Chile, Sur, 1985, pp. 52-53. Cursivas mías

⁵⁵ Gabriel Salazar, *Violencia política...*, *op cit.*, p. 72

como el triunfo conservador sobre los liberales en 1830; las guerras civiles de 1851 y 1859 durante el periodo de Manuel Montt en el que triunfan los conservadores sobre las oligarquías regionales; la guerra civil interoligárquica de 1891⁵⁶; los movimientos sociopolíticos y la intervención militar ocurridos entre 1924 y 1932 que culminaron con la caída de la república parlamentaria oligárquica y la creación de un nuevo constituyente; y finalmente la dictadura militar ocurrida entre 1973-1990⁵⁷

Así, Chile emergió en 1818 como una nación independiente tras una guerra que permitió transitar del régimen colonial a la República. Pero sería con la Constitución de 1833 cuando se inauguraría el periodo conocido como *autoritarismo portaliano* que dominó hasta 1891 y cuya dirección política y social perteneció a los herederos de los criollos vinculados al comercio, a los latifundios y a la minería. Fue entonces cuando el país comenzó a desarrollar un embrionario sistema de partidos en el que el poder Ejecutivo estaba por encima del Legislativo, además de ser muy excluyente. Las mujeres no tenían derecho a votar, mientras que para los hombres era obligatorio poseer propiedades comprobables y saber leer y escribir para poder asistir a las urnas.⁵⁸ No obstante, este sistema político basado en el presidencialismo generó movimientos de oposición importantes: en lo económico, provocó intentos de industrialización popular;⁵⁹ y en lo político, la formación de partidos democráticos y federalistas. Muchos de estos proyectos constituirían más tarde los fundamentos del sistema

⁵⁶ Maurice Zeitlin, *The civil wars in Chile (or the bourgeois revolutions that never were)*, New Jersey, Princeton University Press, 1984, pp. 27-31. Zeitlin señala que la diferencia entre las insurrecciones de 1851 y 1859, con respecto a la de 1891 en que el Congreso y el presidente Balmaceda se enfrentaron, consistió en que las primeras sí involucraron a sectores medios (artesanos, mineros y pequeños empresarios) en las luchas oligárquicas contra el estado central.

⁵⁷ Tomás Moulián, "Chile: las condiciones. .", *op. cit.*, p. 4.

⁵⁸ J. Samuel Valenzuela, *op. cit.*, p. 15.

⁵⁹ Gabriel Salazar, "Empresariado popular e industrialización: la guerrilla de los mercaderes (1830-1885)", *Proposiciones*, núm. 20, 1991, pp. 180-231.

político democrático nacional, en cambio el autoritarismo portaliano sería una de las fuentes ideológicas para el conservadurismo e incluso para el golpismo del siglo XX.⁶⁰

En 1891 se transitó de un régimen presidencialista a una *democracia parlamentaria* moderna cuyo eje de disputa y tensión entre los partidos ya no se definió a partir de las opciones laicicistas o clericales como en el periodo portaliano, sino en términos de clase social.⁶¹ Sin embargo, los conflictos comenzaron a debatirse sólo entre los grupos políticos que alcanzaban representación parlamentaria, lo cual satisfizo las necesidades de consenso político en la cúpula estatal, pero no se resolvió el conflicto económico-social que, por lo demás, se acentuó.⁶² Hasta ese momento, la característica principal del sistema de partidos chileno fue la sobrerrepresentación de la clase terrateniente a pesar de que el auge económico, especialmente después de 1880, se encontraba en el desarrollo de la minería cuyos enclaves se localizaban en los campamentos de las zonas desérticas y cuasi-urbanas del norte del país. Sin embargo, los partidos conservadores poseían el campo como su capital político electoral, controlándolo por medio de múltiples mecanismos. Así, los campesinos que no sabían leer y escribir eran enseñados por los terratenientes a escribir su nombre para asegurarse votos. También en 1874 recurrieron a la implementación de una medida que amplió el electorado: eliminaron la obligación de poseer propiedades comprobables.⁶³ El control político de los terratenientes y la nula penetración de los sectores más liberales en el campo, hizo que éste no constituyera un terreno de cuestionamiento del orden social sino hasta transcurrida la primera mitad del siglo XX, con la culminación de la reforma agraria en

⁶⁰ Gabriel Salazar, *Violencia política...*, *op. cit.*, p. 75

⁶¹ J. Samuel Valenzuela, *op. cit.*, p. 12.

⁶² Gabriel Salazar, *Violencia política...*, *op. cit.*, p. 78.

⁶³ J. Samuel Valenzuela, *op. cit.*, p. 15

1967, impulsada por el presidente demócrata-cristiano Eduardo Frei Montalva. Antes de ésta, siempre existió una política excluyente hacia el campo, así como una débil organización política.⁶⁴

Fue hasta 1939 cuando la coalición gobernante de centro-izquierda del Frente Popular (integrada por radicales, socialistas y comunistas), trató de abrir los candados legales impuestos por la derecha política en los años anteriores, mediante la negociación de un proyecto de sindicalización de los trabajadores rurales (los únicos sindicatos permitidos por la ley hasta ese momento eran los localizados en las zonas urbanas y mineras) y de otro denominado Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). El primero buscaba abrir las zonas rurales a fuerzas políticas de centro y de izquierda como espacio de lucha política, además de romper el control poseído aún por los terratenientes; mientras, el segundo perseguía modernizar la economía del país mediante la industrialización. La CORFO fue aprobada, pero no así el proyecto de sindicalización rural debido a la presión de la Sociedad Nacional de Agricultura (conformada por un influyente grupo de empresarios agrícolas), que argumentó incompatibilidad entre los planes de fomento de la producción y la alteración de las relaciones sociales prevalecientes, ya que esto podría provocar la pérdida de confianza en el sistema económico.⁶⁵

Sólo el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se interesó, aunque muy tardíamente, en trabajar para crearse una base política en el ámbito rural. Desde la década de los años cincuenta el PDC comenzó a organizar a los trabajadores agrícolas sin tierra en torno a la

⁶⁴ Mats Lundahl, 'El camino a la dictadura: desarrollo político y económico en Chile, 1952-1973', en Rigoberto García (comp.), *Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987*, México, FCE, 1989, p. 13.

⁶⁵ Óscar Muñoz Gomá, *Chile y su industrialización. Pasado, crisis y opciones*, Santiago de Chile, CIEPLAN, 1986, p. 83.

doctrina católica como alternativa a la visión socialista de confrontación social.⁶⁶ A esto contribuyó el hecho de que la izquierda no se interesó en la organización del campo porque consideraba que su base política debía ser únicamente el proletariado urbano. El PDC encabezó el movimiento más importante que ocurrió en el campo antes de la reforma agraria de 1967, cuando en 1953 apoyó legalmente los contratos de trabajo en Molina, una región rural del valle central de Chile, en la provincia de Talca. Allí, los terratenientes se rehusaron a negociar los contratos laborales con los campesinos por lo que éstos llevaron a cabo una huelga. Se desató una persecución contra los principales líderes, y la mayor federación sindical católica, Acción Sindical de Chile (Asich), realizó una marcha a la capital que consiguió la liberación de los detenidos y la negociación de los contratos. De este modo, el PDC logró una base que más tarde le serviría de apoyo para las elecciones presidenciales de 1964,⁶⁷ además de romper el reducto de los terratenientes vinculados a una derecha política que siempre intentó retrasar cualquier medida legal que hiciera perder su control político en el campo.

Así, en 1958 fue mal visto que el presidente Carlos Ibañez implementara el sistema electoral de cédula única, en el que aparecían los nombres de todos los candidatos, al contrario del sistema anterior en el que cada partido tenía una cédula propia con únicamente el nombre de su candidato. Estos cambios dificultaron la compra de votos rurales por los terratenientes, porque esta medida había anulado su certeza de que los candidatos de la derecha fueran favorecidos.⁶⁸

⁶⁶ Mats Lundahl, *op. cit.*, p. 23

⁶⁷ *Ibid.*, pp. 23-24 y 27.

⁶⁸ *Ibid.*, p. 16.

Sin embargo, es hasta 1964 con la llegada del PDC al poder, cuando se fracturó verdaderamente el poder de la derecha terrateniente en el campo. El Código del Trabajo prohibía hasta entonces la creación de sindicatos campesinos, por lo que el PDC no podía construir legalmente una base política en ningún sector del movimiento sindical, dominado casi en su totalidad por el Partido Comunista Chileno (PCCH). Cuando el PDC asumió el gobierno en 1964 inició la preparación de una ley que permitiría la creación de sindicatos campesinos. Esta ley fue aprobada en 1967 y contenía disposiciones que reglamentaban la afiliación tanto en el ámbito local (predios agrícolas) como en federaciones y confederaciones de carácter nacional. Sólo con la creación de los sindicatos campesinos el PDC logró tener presencia en el sindicalismo nacional.⁶⁹

Historicidad y conflicto: las rebeliones urbanas

El férreo control ejercido por la derecha política y el escaso desarrollo político en el campo, provocaron que los conflictos y rebeliones se localizaran principalmente en las zonas urbanas. El temprano desarrollo urbano, particularmente alrededor de la actividad minera,⁷⁰ dio lugar desde fines del siglo XIX a enconadas luchas obreras y sus consecuentes saldos altos de violencia política, tanto por parte del Estado como de los sectores populares. La organización obrera en Chile tiene su base en el surgimiento de las mutuales o sociedades de socorro mutuo. Hacia fines del siglo XIX existían 240 asociaciones mutualistas. En 1900

⁶⁹ *Ibid.*, p. 30

⁷⁰ De acuerdo con Maurice Zeitlin, a principios de 1850 sucedió una gran migración a las ciudades y a los distritos mineros, mejorándose al mismo tiempo los caminos para dirigirse a ciudades como Copiapó, Santiago y Valparaíso. Véase *The civil wars...*, *op cit.*, p 26, especialmente el capítulo "The abortive bourgeois revolution".

sesionó el Congreso Social Obrero declarando agrupar, en ese entonces, a 169 asociaciones con aproximadamente 10 mil miembros. Las condiciones de trabajo a principio de siglo eran difíciles ya que no existía ninguna legislación social que protegiera a los trabajadores de los abusos de los patrones; los dueños de las minas especulaban con los salarios a través del sistema de fichas; eran frecuentemente el atraso en los pagos y los despidos arbitrarios. Esto dio lugar al surgimiento de las Sociedades de Resistencia y las Mancomunales, nuevas organizaciones obreras localizadas en las minas del salitre en el norte, del carbón en el sur y en ciudades como Santiago y Valparaíso. A diferencia del mutualismo, estas nuevas organizaciones combinaron la autodefensa y la ayuda mutua con el enfrentamiento y la lucha contra sus patrones ⁷¹

En este contexto se desarrolló entre 1890 y 1907 una escalada de violencia política popular cuando cientos de mineros de la industria del nitrato lucharon por mejoras en las condiciones laborales. Entre 1902 y 1907 el movimiento laboral realizó 200 huelgas y tomas de ciudades, cuyos episodios violentos más importantes fueron una huelga de trabajadores marítimos en el puerto de Valparaíso (1903); la “semana roja” en Santiago (1905), durante la que estuvo tomada la ciudad; y la huelga de Antofagasta en 1906. La ola de huelgas terminó en 1907 cuando los propietarios de las minas del nitrato llamaron al Estado para aplastar la rebelión en Iquique que mostraba cada vez más el “peligro rojo”. Fueron asesinadas de 1000 a 3000 personas por la represión del ejército y la marina. ⁷²

⁷¹ Mario Garcés y Pedro Milos, *Las centrales unitarias en la historia del sindicalismo chileno*, Santiago de Chile, Eco, 1988, pp. 15-16 y Gabriel Salazar, *Coyunturas políticas importantes en la historia de Chile*, Santiago de Chile, Sur, 1989. s/p, Documento de Trabajo.

⁷² Cathy Lisa Schneider, *Shantytown Protest in Pinochet's Chile*, Philadelphia, Temple University Press, 1995, y Gabriel Salazar, *Violencia política*., *op cit*.

La represión provocó que las fuerzas políticas y sociales ligadas a esta base social urbana abandonaran su radicalidad y dieran un viraje hacia posiciones de menor confrontación. Así, por ejemplo, los líderes del Partido Demócrata (PD) —fundado en 1886—, cuya base se encontraba en el ámbito urbano, decidieron reorientar sus planteamientos en busca de otra base social eliminando de su programa las reivindicaciones de la clase trabajadora. No obstante, el senador Luis Emilio Recabarren abandonó el PD para formar en 1912 el Partido Obrero Socialista (POS) reivindicando la necesidad de crear un partido con una base social de los trabajadores. El POS formó una alianza con la Federación Obrera de Chile (FOCH), anteriormente conservadora, con la que logró presencia nacional. Ambas organizaciones conformarían el fundamento para la reactivación del movimiento laboral organizado que resurgiría entre 1917 y 1919. A este movimiento se uniría el anarcosindicalismo.⁷³

En medio de esta efervescencia social se llevaron a cabo elecciones presidenciales en 1920. Los principales contendientes en esta disputa fueron Luis Barros Borgoño por la conservadora Coalición Unión Nacional (CUN), quien pugnaba por defender los valores tradicionales; y Arturo Alessandri por la coalición Alianza Liberal. Por el POS se postuló simbólicamente desde la cárcel Luis Emilio Recabarren, defendiendo un programa favorable a los trabajadores. Las coaliciones conservadora y liberal buscaban restaurar la armonía y la estabilidad del orden social, la primera mediante la coerción, la segunda por medio de reformas. Los liberales triunfaron abrumadoramente en la elección, consiguiendo incluso una base electoral sindical, anarquista y socialista. Sin embargo, la ilusión alessandrista terminó pronto debido a que las reformas demoraron (el presidente culpaba al Congreso de escaso

⁷³ Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, p. 23-25.

avance) y la represión reapareció en 1921 contra un movimiento de protesta organizado por los obreros del salitre Alessandri apoyó las acciones represoras del ejército.⁷⁴ Ante la violenta respuesta del Estado, la FOCH se radicalizó y el POS se transformó en Partido Comunista (PCCH) en 1922.

Incluso, producto de esta radicalidad y como un ejercicio de autonomía social, entre el 7 y 11 de mayo de 1924 se convocó, por primera vez en la historia chilena, a una Asamblea Constituyente de tipo popular, reuniendo a 1 200 representantes de todo el país en el teatro municipal de Santiago. Los representantes declararon un Estado federal, parlamentario, que desarrollara la producción y creara empleos, así como la disolución del ejército y la búsqueda de un sistema democrático para cuidar la defensa nacional. Proclamaron un estado instalado en y a partir de los movimientos sociales y no autoprotegiéndose de ellos. La asamblea no tuvo éxito ya que no fue tomada en cuenta para la conformación del nuevo constituyente que surgiría en 1925⁷⁵

En septiembre de 1924 la crisis nacional alcanzó uno de sus puntos más álgidos cuando jóvenes oficiales de la milicia protestaron ante el Congreso por el retardo de las reformas Alessandri se exilió y en el país se formó una "Junta de Gobierno" conformada por estos oficiales. La presión militar obligó al Congreso a promulgar algunas iniciativas de ley relacionadas con problemáticas sociales, así como convocar a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 1833. Los militares buscaron captar las simpatías de los sectores políticos y sociales organizados, pero terminaron por gobernar con la vieja oligarquía, lo que produjo un nuevo movimiento militar en enero de 1925. Este último golpe

⁷⁴ Mario Garcés y Pedro Milos, *op cit.*, pp. 27-30

⁷⁵ Gabriel Salazar. *Coyunturas políticas ... op. cit* , s/p.

de Estado instaló de nueva cuenta en el poder a Alessandri, quien se comprometió a impulsar las reformas que dieron lugar a la Constitución de 1925.⁷⁶ La nueva Constitución modernizó el sistema político en la medida que contribuyó al proceso de ampliación de los espacios de participación política, pero no se preocupó por impulsar una transición paralela hacia capitalismo industrial desarrollado. Así, los nuevos espacios de participación estuvieron sujetos a una forma política que eludía los conflictos dados por la falta de una democracia que diera mayor centralidad a los sectores populares y, en consecuencia, los problemas generados en las luchas violentas de principios de siglo permanecieron latentes.⁷⁷ Era un proyecto que concebía a la “gubernabilidad” y a la “integración” como fundamentos principales.

Durante el primer cuarto del siglo xx las élites respondían de dos maneras: recurrían a la represión y proponían la integración a la ciudadanía nacional. De 1903 a 1907 se aplicó la primera, que constituía una fase inicial. La segunda táctica fue aplicada después de 1910 para consolidarse en 1925. Desde entonces y hasta 1973, las “agitaciones sociales” asumieron, predominantemente, una forma “reivindicativa”. Es decir, de petición por conducto regular a los directores de la Empresa y del Estado, con respecto a la Constitución y al Código del Trabajo; y de integración, con responsabilidad cívica, al sistema democrático instaurado en 1925.⁷⁸

La Constitución de 1925, que sustituyó a la de 1833, fue un intento formal por acabar con el poder oligárquico terrateniente y marcar una ruptura definitiva entre la Iglesia y el Estado para enfatizar la primordialidad en los aspectos socioeconómicos de los programas

⁷⁶ *Ibid.*, pp. 33-36

⁷⁷ Gabriel Salazar, *Violencia política...*, *op. cit.*, p. 99.

⁷⁸ *Ibid.*, pp. 54, 80 y 81

políticos. Además, se incorporaron avances en los procesos de elección, como el método de representación proporcional, y el colegio electoral, antes bajo el mando del presidente, pasó a manos del electorado.⁷⁹

Desde los años treinta el modelo económico entonces existente se reorientó de una economía primario-exportadora a otra de sustitución de importaciones, en la que el principal socio comercial de Chile fueron los Estados Unidos. El apoyo estatal a los sectores productivos aumentó con la finalidad de incrementar la redistribución del ingreso e incorporar a nuevos grupos sociales en la vida colectiva. El nuevo modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), impulsado para contrarrestar los duros efectos económicos producidos por la depresión de 1929, encontró obstáculos en el difícil crecimiento económico, así como en la gran rigidez del sistema político para construir un amplio consenso e incorporar las demandas de aquellos sectores beneficiados por la redistribución del ingreso, y que presionaban cada vez más por la vía electoral. Esto fue acrecentando poco a poco la polarización y la tensión social.

En 1936 surgió el Frente Popular (FP), heredero de las luchas de la izquierda de los años veinte. Fue formado por demócratas, socialistas, comunistas y radicales, que en 1938 lograrían que su candidato Pedro Aguirre Cerda resultara electo presidente de Chile, caso único en América Latina en el que la izquierda ganó las elecciones presidenciales de forma contundente y con una participación masiva. Para los años cuarenta, según lo expone Eduardo Ruiz Contardo, había ‘visión popular de poder’⁸⁰. Por una parte se pueden observar a los grupos dominantes incapaces de conciliar sus necesidades de ganancias con la

⁷⁹ J. Samuel Valenzuela, *op. cit.*, p. 36 y 37

⁸⁰ Eduardo Ruiz Contardo, “Chile: ¿un camino ‘democrático’ antipopular?”, en Pablo González Casanova y Marcos Roitman, *op. cit.*, p. 106

percepción y ejecución de una dimensión histórica de los sectores populares que, en pleno ascenso político y participando en todas las formas posibles, tratan de acuñar su visión de poder. Por ejemplo el PCCH, integrante de la coalición gobernante, acrecentó su influencia en los sindicatos de Santiago y renunció a participar directamente en el gobierno del FP para evitar que la derecha política y los Estados Unidos intentaran desestabilizar al país con el falso argumento de que cualquier comunista o socialista en altos puestos del gobierno implicaba de forma implícita la “toma del poder” obrero.⁸¹

En 1941, sin poder terminar su mandato, murió Aguirre Cerda y con él el FP. Sin embargo, la izquierda continuó su lucha con mayor fuerza. El PCCH creó un gran número de sindicatos; incluso desafiando a la derecha política en 1946, ocupó puestos en el gabinete durante el gobierno de González Videla. A los Estados Unidos les incomodó este avance y presionaron fuertemente a Videla para que expulsara del gobierno a los comunistas.⁸²

La efervescencia social creció en 1948. Ante las medidas draconianas de González Videla —quien decidió cancelar el registro a 26 mil afiliados del PCCH, enviar a muchos más al exilio y encarcelar a otros tantos— algunos comunistas pensaron y discutieron la posibilidad de emprender acciones armadas. Pertenecían a un pequeño grupo que se había escindido del PCCH, que no tuvo mayor importancia al no encontrar apoyo social y político. La represión llevó al PCCH a modificar su estrategia al considerar que no podían mantener el apoyo de sus simpatizantes ganando sólo concesiones económicas en el lugar de trabajo, sino que también era necesario fincar una base social en los barrios. En las décadas de los cuarenta y los cincuenta la izquierda política abandonó su posición obrerista y comenzó a

⁸¹ Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, p. 32.

⁸² *Ibid*, p. 36.

impulsar una estrategia poblacional en las zonas periféricas de la ciudad. A pesar de sus rivalidades, el PS y el PCCH se unieron contra el gobierno de Videla y en 1952 postularon al doctor socialista Salvador Allende como candidato a la presidencia, quien perdió la elección.⁸³

Para 1952 aproximadamente 60% de la población total del país vivía en zonas urbanas, y la demanda de vivienda se incrementó para cerca del 45%. Debido a esto, a finales de 1950 las poblaciones llegaron a ser un campo de batalla político para los diferentes partidos. Los residentes de las poblaciones aprendieron a manipular las rivalidades políticas para su propia ventaja, desarrollando entre los pobres un alto nivel de sofisticación política. Comprendieron también que no podían conseguir nada sin organización política⁸⁴

En 1956 el PCCH se volvió a unir con el PS para formar el Frente de Acción Popular (Frap) En las elecciones de 1958, el FRAP consiguió aproximadamente 35 a 40% de los votos en las zonas pobres, mientras que en las zonas más acomodadas sólo alcanzó 18%⁸⁵

En 1957 los comités comunistas que estaban establecidos en asentamientos irregulares en la ciudad comenzaron a planear y organizar las tomas ilegales de tierras. Por medio de sus representantes en el Congreso, los socialistas y los comunistas pugnaron para que el gobierno apoyara programas de vivienda en beneficio de los pobladores. La inhabilidad del Estado para ofrecer soluciones provocó que el 30 de octubre de 1957, 3000 familias localizadas en la comuna de San Miguel y organizadas por el comité del Partido Comunista de los "sin casa" tomaran un terreno en donde se erigiría la población "La Victoria", en

⁸³ *Ibid*, p. 37.

⁸⁴ *Ibid*., p. 41

⁸⁵ *Ibid*, p. 45

Santiago.⁸⁶ Esto constituyó un primer ejemplo de acción política directa frente a la incapacidad del gobierno para satisfacer las demandas. Mediante estas experiencias los pobladores aprendieron a valorar el poder de la acción colectiva. Pero la batalla no terminó cuando los pobladores alcanzaron sus derechos de vivienda, sino que continuaron organizándose para evitar el constante hostigamiento de la policía, así como para conseguir alimentación y servicios de salud. Además crearon un gobierno democrático al interior del barrio llamado ‘Comando Poblacional’, con la finalidad de que todos pudieran participar. El primer presidente elegido fue un comunista. En los siguientes años hubo varias tomas de tierras que ahora se pueden caracterizar para 40% de la población urbana. En aquellos tiempos era un signo muy común que los trabajadores identificados con la izquierda estuvieran inclinados a ver el mundo en términos de antagonismo de clase.⁸⁷

Esta visión de confrontación, de ‘lucha de clases’ entre los grupos de izquierda, fue un elemento importante para que el PDC fuera percibido por varios sectores sociales como un partido que podía imponer orden y estabilidad. El PDC atrajo a las clases medias bajas y rechazó los principios individualistas y de competencia librecambista que enarbolaba la derecha; así como también manifestó su rechazo a los principios socialistas del conflicto de clase y de la propiedad de los medios de producción por parte del Estado. Eduardo Frei Montalva, quien se postuló en 1963 como candidato de este partido a la presidencia de la República, exhortó a la sociedad chilena a regresar a los principios del cristianismo, y a reconciliar la necesidad de crecimiento económico con la justicia social.⁸⁸

⁸⁶ Ben Richards, ‘Proprietors not proletarians: the politics of housing subsidies under military rule’, en Will Fowler (ed.), *Authoritarianism in Latin America since independence*, London, Greenwood Press, 1996, p. 135; y Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, pp. 42-43.

⁸⁷ Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, pp. 41-44.

⁸⁸ *Ibid.*, pp. 46-47.

En 1964 el PDC subió al poder y su proyecto económico se adscribió a los lineamientos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), lo que se tradujo en cambios estructurales vía la reforma, cuya principal línea sería impulsarla en el campo. Esto también como respuesta a las expectativas alentadas por la Revolución Cubana de 1959 y siguiendo el convenio de Punta del Este de 1961 que encarnaba la visión del gobierno de Kennedy acerca de que eran necesarias reformas progresivas para conjurar nuevas revoluciones en América Latina al mismo tiempo que promover la modernización en la agricultura, incrementando las ganancias de exportación y la producción para los centros urbanos.⁸⁹ Entre 1965 y 1967, la reforma agraria, que favoreció tan sólo a una pequeña fracción de la población rural, sería el punto culminante de estos cambios, rompiendo finalmente con el control de la derecha política al permitir la sindicalización campesina en 1967 y con ello la entrada de otros partidos a la lucha política. Este acontecimiento pondría alertas a las fuerzas conservadoras para imponerse cada vez más ante lo que consideraban el avance popular en el terreno electoral. Pocos años después sucedería el golpe de Estado.

Bajo este panorama, las tomas de tierra por los sectores populares de la ciudad se incrementaron con el apoyo de organizaciones políticas, particularmente con el respaldo del PCCH. La reacción de las autoridades democristianas no siempre fue tolerante y en 1969 fueron reprimidos un grupo de invasores de tierras en la ciudad de Puerto Montt con un saldo de diez muertos.⁹⁰

⁸⁹ Francisco Vio Grossi, *Resistencia campesina en Chile y en México*, Santiago de Chile, Consejo de Educación de Adultos de América Latina, 1990, p. 156. Norman Long y Bryan Roberts, "Las estructuras agrarias de América Latina, 1930-1990", en Leslie Bethell (Ed.) *Historia de América Latina*, vol. 11, España, Cambridge University Press, 1997, p. 309 y 310

⁹⁰ Ben Richards, *op. cit.*, p. 135

A finales de los sesenta el régimen del PDC mostraba dificultades para satisfacer las demandas de las masas populares y de los sectores sociales organizados que ejercían presión por medio del sistema político. Esto condujo a la crisis de confianza en el modelo de desarrollo capitalista. Además, cabe agregar la creciente aceptación por parte de la sociedad de ideologías de cambio como el socialismo y la unificación de las organizaciones de izquierda alrededor de la Unidad Popular (UP) que emergió ante el desgaste del centro político encabezado por el PDC. La democracia cristiana, a diferencia del Partido Radical (PR) —al que sustituyó en el gobierno—, fue incapaz de establecer alianzas con cualquier otro partido del espectro político. Los sectores dominantes tacharon a las medidas reformistas del PDC como caóticas y demagógicas, sugiriendo la necesidad de un mayor autoritarismo en el sistema político. Por otro lado, los sectores identificados con la izquierda cuestionaron el modelo de desarrollo impulsado por el PDC a medida que las reformas promulgadas por ese gobierno fueron perdiendo vigor. De ahí que para la elección presidencial de 1970 las organizaciones de izquierda se unificaran alrededor de la opción socialista en la coalición de la UP, la cual participaría con Allende como candidato a la presidencia, mientras que por el PN el derechista Jorge Alessandri y por la PDC, Radomiro Tomic. El 4 de septiembre de 1970 se anunció el triunfo de Allende con 36.2% de la votación total frente a 34.7% de Alessandri y 27.8% de Tomic.⁹¹

El programa de la UP planteaba una verdadera revolución social, impulsada desde el Estado y usando la institucionalidad entonces vigente. Con Allende, las ocupaciones de tierra se incrementaron rápidamente debido a la actividad benigna de las autoridades quienes no

⁹¹ Mary Helen Spooner, *Soldiers in a narrow land: The Pinochet's regime in Chile*, California, University of California Press, 1994, p. 24.

reprimieron a su base popular. La expansión de campamentos (áreas provisionales de vivienda) causaron alarma en los círculos de derecha; el periódico conservador *El Mercurio* difundió que cada vez más extremistas tomaban el control de los barrios. El temor de la derecha creció más cuando los pobladores no sólo se limitaron a invadir tierras en los barrios pobres, sino que se extendieron en sus acciones a las zonas residenciales de Santiago, en un intento por romper la segregación espacial en la que habían permanecido bajo las anteriores políticas de vivienda. Las tomas cambiaron el panorama urbano de Santiago: las poblaciones más grandes como La Victoria, La Bandera, Santa Elena, La Pincoya y San Rafael fueron creadas a través de invasiones ilegales las cuales fueron parte de un ciclo de movilización social que alcanzó su punto máximo bajo la UP.⁹²

El periodo entre 1970 y 1973 es analizado por el sociólogo Manuel Antonio Garretón en el contexto de un doble proceso histórico: la creciente democratización de Chile combinada con la crisis surgida en 1970. En efecto, este periodo fue visto como pasaje de una crisis controlada a otra generalizada en la sociedad, a causa de la creciente polarización política y la desinstitucionalización de las formas de confrontación política.⁹³ La legitimidad del régimen empezó a desgastarse por varios factores

1) Por la estrategia insurreccional adoptada por las organizaciones de derecha que después pasarían a formar parte de los aparatos de seguridad del régimen (son los casos de Tacna y de Patria y Libertad, éste encabezó el 29 de junio de 1973 el primer intento de golpe militar); así como las de izquierda (el Movimiento de Izquierda Revolucionaria -MIR, grupo guerrillero urbano fundado en 1967, surgido de la experiencia de la DC, el Movimiento de Acción

⁹² Ben Richards, *op. cit.*, pp. 135-136

⁹³ Manuel Antonio Garretón, *The Chilean ...*, *op. cit.*, pp. 14-15.

Popular Unitaria-MAPU; algunos sectores del PS y la Izquierda Cristiana)⁹⁴, y la estrategia de transformación al socialismo por la vía pacífica elegida por la UP (PC, MAPU obrero campesino, la mayoría del PR, una fracción del PS y el propio Allende). La sociedad llegó a tal grado de polarización que ninguno estaba dispuesto a negociar y estimaban preferible el enfrentamiento armado⁹⁵

2) A causa de una acelerada desintegración del capitalismo sin una construcción coherente de sistema alternativo

3) Por la polarización política en el plano social. En el contexto de la guerra fría y de la Revolución Cubana, el triunfo de la UP fue visto como una derrota de los Estados Unidos, de ahí la política de este país para desestabilizar Chile⁹⁶ La movilización política y el poder alcanzados por los sectores populares y el innegable avance de la sustantiva democratización fueron percibidos negativamente por los sectores económicos hegemónicos y por amplios sectores de las clases medias.

En este contexto, la intervención castrense del 11 de septiembre de 1973 fue justificada por los militares como una medida necesaria para evitar que la polarización social escindiera a las FFAA, además de constituir la oportunidad para los sectores capitalistas de reafirmar su dominación mediante la reorganización de la sociedad.⁹⁷

⁹⁴ Spooner relata cómo un integrante de Patria y Libertad más tarde se convertiría en un miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) También rescata una entrevista de quien fuera ministro del interior, José Tohá, quien señalaba que muchos jóvenes continuaban uniéndose al MIR porque Allende no encajaba en su idea de socialismo M. H. Spooner, *ibid.*, pp. 27-29 y 125.

⁹⁵ Comisión Chilena de Derechos Humanos-Centro Ideas, *op. cit.*, pp. 22-23.

⁹⁶ Mary Helen Spooner, *op. cit.*, pp. 25-26. La autora señala que la CIA gastó ocho millones de dólares para crear las condiciones para un golpe de Estado, al mismo tiempo que suspendieron toda ayuda financiera al país con excepción a las Fuerzas Armadas (FFAA), y promovieron el corte de cualquier apoyo a Chile proveniente de organismos financieros supranacionales.

⁹⁷ Manuel Antonio Garretón, "Popular Mobilization and the military regime in Chile. The complexities of the invisible transition", en Susan Eckstein (ed.), *op. cit.*, pp. 14 y 15.

De la represión a la acción colectiva, 1973-1983

La atomización social y la represión estatal, 1973-1974

El régimen represivo inaugurado el 11 de septiembre de 1973 por Pinochet eliminó los esfuerzos de la coalición de izquierda que promovían el “camino al socialismo y décadas de estabilidad democrática”⁹⁸ Desde el día del golpe el régimen encubrió legalmente todos sus actos. De esta manera, el 11 de septiembre se decretó el estado de sitio que debía ser comprendido como tiempo de guerra “a los efectos de aplicación de las penalidades del tiempo de guerra establecidas por el Código de Justicia Militar”. Se advirtió que las fuerzas militares estaban autorizadas a “fusilar en el acto a quienes fueran hechos prisioneros formando parte de la resistencia armada”. El estado de sitio y el toque de queda fueron herramientas fundamentales que permitieron a las FFAA actuar con arbitrariedad y eficacia. La represión se dirigió en primer lugar contra las autoridades del gobierno anterior, sus partidos y organizaciones.⁹⁹

Las instituciones armadas y del orden, por medio de la Junta Militar de Gobierno, asumieron los poderes Ejecutivo y Legislativo. El poder Judicial mantuvo una autonomía aparente pues la mayoría de sus integrantes coincidían políticamente con el régimen golpista. Lo mismo ocurrió con otras instancias gubernamentales como la Contraloría. En tanto, los medios de comunicación fueron disueltos y los que permanecieron estuvieron bajo la

⁹⁸ Manuel Antonio Garretón, “Popular Mobilization...”, *op. cit.*, p. 259; Comisión Chilena de Derechos Humanos-Centro Ideas, *op. cit.*, p. 24.

⁹⁹ Rodrigo de Arteagabeitia, “1973 el año que empezó la guerra sucia”, en *APSI*, año xv, núm. 377, febrero, 1991, p. 6

vigilancia de la Junta Militar de Gobierno y expuestos constantemente a la censura. Si bien en un principio las FFAA no tenían claro qué tipo de régimen iban a construir, adoptando inicialmente el programa económico de Alessandri, en poco tiempo fueron consolidando un proyecto económico liberal y un régimen político-militar autoritario con características muy propias.¹⁰⁰

La radicalidad de la coacción por parte de los militares hizo desaparecer la movilización social el mismo día del golpe. La junta militar prohibió mediante la ley de seguridad interior del Estado las asambleas, los actos públicos en la calle o en las plazas que comprometieran la “seguridad nacional” Cualquier acto público requirió la autorización de la policía. También se prohibió la participación de cualquiera que hubiera formado parte de los partidos u organizaciones que conformaban la UP, y quienes lo hicieron estuvieron sujetos a los tribunales militares.¹⁰¹

Las poblaciones asociadas con los partidos de izquierda fueron sitiadas y se arrestaba o asesinaba a residentes de éstas, en algunos casos casi indiscriminadamente. Los cadáveres fueron esparcidos en las poblaciones como símbolo de advertencia para estos sectores. Hubo pocos casos de resistencia armada por el temor prevaeciente, incluso en las poblaciones más combativas.¹⁰² En los ocho años siguientes no existió en las poblaciones un movimiento de oposición activo importante y los que surgieron fueron locales, efimeros y fácilmente reprimibles¹⁰³, ya que se promovió la delación como elemento ideológico básico de la doctrina de seguridad nacional (la concepción de una sociedad dividida entre amigos y

¹⁰⁰ Comisión Chilena de Derechos Humanos-Centro Ideas, *op. cit.*, p. 24, y Manuel Antonio Garretón, “Popular Mobilization...”, *op. cit.*, pp. 22-23.

¹⁰¹ Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, p. 79-81.

¹⁰² *Ibid.*, p. 74.

¹⁰³ *Ibid.*, pp. 1-3.

enemigos) para disuadir cualquier intento insurreccional.¹⁰⁴ Sólo surgieron escasos actos de protesta que se limitaban a exponer testimonios o expresiones defensivas con la protección de la Iglesia católica. Las organizaciones de derechos humanos, de familiares de los desaparecidos, de los presos y de los asesinados por motivos políticos fueron los grupos que en cierta forma encabezaron la resistencia. Sin embargo, sus acciones sólo se desarrollaron de manera tímida y subrepticia a medida que se iban convirtiendo en el blanco de la represión, aunque también lograron respaldo económico y político de algunos organismos internacionales¹⁰⁵

Desde el comienzo de su régimen, a los militares no les interesó crearse una base social de apoyo a pesar de contar, por lo menos al principio, con el de las clases medias y los grandes empresarios. La actitud de la dictadura hacia las manifestaciones populares siempre fue hostil debido a la idea de que era necesario despolitizar a la sociedad para de esta manera disuadir cualquier movilización y eliminar el surgimiento de nuevos actores. Esto representó un hecho significativo en la cultura política nacional porque Chile se convirtió en una sociedad desmovilizada, no obstante su alta participación política en las décadas precedentes al golpe.¹⁰⁶

El régimen dismanteló las redes organizacionales de los pobladores, tomó el control de los consejos del barrio, encarceló a los líderes populares y los reemplazó por seguidores incondicionales de la dictadura militar. También cambió los nombres de las poblaciones buscando destruir progresivamente los símbolos culturales. Estas políticas fueron diseñadas

¹⁰⁴ Genaro Arriagada y Manuel Antonio Garretón, "América Latina a la hora de las doctrinas de la seguridad nacional", en María Ágelica Pérez (ed.), *Las fuerzas armadas en la sociedad civil*, Santiago de Chile, Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Compañía de Jesús, 1978.

¹⁰⁵ Guillermo O'Donnell y Philippe C. Schmitter, *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, vol. 4, Buenos Aires, Paidós, 1989, pp 84-85.

¹⁰⁶ Manuel Antonio Garretón, "Popular Mobilization...", *op. cit*, p. 261.

para provocar temor no sólo entre los activistas de izquierda, sino también entre los pobres y la clase trabajadora. En el largo plazo, además de intentar destruir a la izquierda como alternativa política e ideológica, el régimen se abocó en restringir cualquier pensamiento político que pudiera amenazarlo.¹⁰⁷

En septiembre y octubre de 1973 sucedieron grandes masacres. En septiembre se inició un proceso de cierre de los centros de detención urbanos, remplazándolos por otros rurales. El 31 de diciembre de 1973 fue creada la Secretaría Nacional de Detenidos (Sendet), que tenía como fin regular la integridad de los prisioneros y normar los procedimientos de los interrogatorios. Esto era resultado de la presión ejercida por la Cruz Roja Internacional para que se ejerciera un trato más humanitario. Sin embargo, de forma velada se sabía que esta secretaría también cumplía el papel de administrar y regular los campos de detenidos ante la falta de estructuras formales que desempeñaran esta labor.¹⁰⁸

La represión también alcanzó a un grupo de oficiales de la fuerza aérea acusados de defender al gobierno de Allende. Los acusadores argumentaron que antes del golpe había existido *de facto* un estado de guerra en el país, lo cual permitió a la corte marcial investigar “crímenes” antes de que el estado de guerra fuera formalmente declarado.¹⁰⁹

La represión, 1974-agosto de 1977

Un cambio significativo ocurriría a partir de 1974, cuando la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), —integrada por mayores y coroneles del ejército y que comenzara a

¹⁰⁷ Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, pp 74-81.

¹⁰⁸ Rodrigo de Arteagabeitia, *op. cit.*, p. 6.

¹⁰⁹ Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, p. 79-81.

actuar desde el mismo 11 de septiembre de 1973— se convirtió en una institución formal ¹¹⁰

Con la institucionalización de la Dina se abrió otro periodo en la historia de la represión pinochetista. Los militares necesitaron de un nuevo método para luchar contra los “enemigos” del régimen que habían decidido pasar a la clandestinidad. La dirigencia de la Dina pasó a manos del amigo personal de Pinochet, el coronel Manuel Contreras, para de esta manera centralizar la inteligencia y ejecutar las políticas represivas disminuyendo los costos políticos, así como para distinguir más claramente a los disidentes considerados “peligrosos” ¹¹¹ Los principales blancos de la Dina fueron el MIR y los socialistas. ¹¹²

A su vez, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) operó paralelamente a la Dina pero, a diferencia de ésta, era controlado por la Fuerza Aérea, pero posteriormente reemplazada por la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) Ésta llegó a constituir el núcleo llamado “Comando Conjunto”, cuyo propósito principal fue desaparecer al PCCH en la zona sur de Santiago, donde se localizan las poblaciones que formaban parte de su base social ¹¹³ (Ver mapa en anexo).

Junto a estas agencias de inteligencia coexistieron otras más pequeñas dirigidas por la policía (como el Sicar, Servicio de Inteligencia de Carabineros) y por la marina (SIN, Servicio de Inteligencia Naval). El Sicar estuvo prácticamente supeditado a la Dina, en tanto que el SIN actuó principalmente en las zonas navales de Valparaíso y Concepción. ¹¹⁴

¹¹⁰ Comisión Chilena de Derechos Humanos-Centro Ideas, *op cit.*, p 25

¹¹¹ Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, p. 83

¹¹² Mary Helen Spooner, *op. cit.*, p. 120.

¹¹³ Cathy Lisa Schneider, *op. cit.* p 83; y Mary Helen Spooner, *op. cit.*, p. 120

¹¹⁴ Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, p 84.

La represión, agosto de 1977-1990

Este periodo está marcado por el asesinato en 1976 en Washington del ex ministro de relaciones exteriores del gobierno de la UP, Orlando Letelier y de su secretaria Ronnie Moffitt. Pinochet temía que Letelier formara un gobierno paralelo en el exilio, ya que éste estaba creando redes de apoyo entre algunos sectores del gobierno norteamericano. Tras los asesinatos de Letelier y su secretaria, la labor de la Dina fue cuestionada a nivel internacional porque se evidenció hasta qué punto el régimen militar controlaba el poder y la barbarie con que lo ejercía.¹¹⁵

Por esta razón la Dina fue disuelta por la Junta de Gobierno, con lo que se inauguró otra fase de la represión dictatorial, ahora encabezada por la Central Nacional de Informaciones (CNI), creada el 13 de agosto de 1977 y dirigida en un principio por el general Manuel Contreras, quien sería removido tres meses después.¹¹⁶ Esta Central sería el organismo principal del Estado desde 1977 hasta febrero de 1990, cuando desapareció. La CNI, entonces integrante del Ministerio de Defensa y vinculada al gobierno por medio del Ministerio de Interior, cumpliría el papel de “velar por el normal desenvolvimiento de las actividades nacionales y el mantenimiento de la institucionalidad establecida”. La oposición consideró que estos cambios eran sólo aparentes y que la represión continuaría funcionando de la misma manera. Por su parte, el régimen creía que con la disolución de la Dina la

¹¹⁵ Mary Helen Spooner, *op. cit.*, p. 125, y Comisión Chilena de Derechos Humanos-Centro Ideas, *op. cit.*, p. 26.

¹¹⁶ Mary Helen Spooner, *op. cit.*, pp. 132-133 y 259.

situación del conflicto interno ya estaba superada ¹¹⁷

La CNI mantuvo las mismas facultades de la Dina, sólo con la variante de actuar de acuerdo a las nuevas exigencias de la realidad política. Sus accionares se concentraron en la represión directa contra las agrupaciones que habían optado por la vía armada, por lo que organizaron equipos de seguimiento, represión e infiltración de grupos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).¹¹⁸

Durante ese periodo y a principios de los ochenta, en el contexto de la institucionalización del régimen, se reconoció a un número muy reducido de actores políticos, especialmente los grupos relacionados con la Alianza Democrática-AD (grupo de oposición autodenominado de centro izquierda del que más adelante se explicará su surgimiento). En tanto, la represión se focalizó principalmente contra los sectores populares de la poblaciones con la finalidad de disuadir y desactivar las bases que permitían articular las expresiones sociales y políticas bajo la forma de una acción unitaria de la oposición. Las víctimas de asesinato en este periodo, según registró la Comisión Retting, fueron seleccionadas de manera más depurada y en su mayoría pertenecían al PCCH, al FPMR y al MIR.¹¹⁹

La acción colectiva antes de las protestas

En su obra *La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión*, Barrington Moore señalaba que el sentimiento de injusticia no siempre provoca una acción colectiva que se

¹¹⁷ Comisión Chilena de Derechos Humanos-Centro Ideas, *op. cit.*, p. 31 y 78; Mary Helen Spooner, *op. cit.*, p. 133.

¹¹⁸ Comisión Chilena de Derechos Humanos-Centro Ideas, *op. cit.*, pp. 78-79.

¹¹⁹ *Ibid.*, pp. 80.

oponga al orden y a la autoridad establecida.¹²⁰ En Chile, muchos sectores que se caracterizaban por tener una alta participación optaron por la obediencia y el disciplinamiento social impuesto por el régimen militar. Algunos argüían estar plenamente convencidos de que el gobierno de la UP había generado caos, y por esto reclamaban se impusiera mayor autoritarismo para garantizar la estabilidad política y económica. Otros decidieron no impulsar acción política alguna con el fin de no provocar que cualquier acción heroica de carácter subversivo o de resistencia se les revirtiera en su contra o bien desatara una mayor represión, sacrificando el bienestar individual y colectivo.

¿ En qué sectores el sentimiento de injusticia provocó resistencia frente al régimen militar? Los primeros grupos en organizarse contra la dictadura tenían una herencia política de décadas en el trabajo de cultura popular y en la formación de militantes de base. La politización, la organización y la solidaridad eran la consecuencia directa de sus lazos históricos con diversos partidos y organizaciones pero fundamentalmente con el PCCH y el interés de éste en la creación de organizaciones comunitarias con líderes de base. Por esta razón, crearon organizaciones cuasi legales que ofrecían a sus miembros un sentido de comunidad e identidad, con las que reforzaron su confianza en el poder de la acción colectiva ¹²¹

Durante este periodo se reconstruyeron varias organizaciones sectoriales con una importancia variable. En julio de 1978 los mineros del Chuquicamata se atrevieron con prudencia a desafiar el régimen organizando una protesta sin afectar la producción. Sin embargo, fueron duramente reprimidos y disueltas siete de sus confederaciones que

¹²⁰ Barrington Moore, *La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión*, México, UNAM, 1989, pp. 59-87.

¹²¹ Cathy Lisa Schneider, *op cit.*, pp. 10-11 y 44.

agrupaban a más de quinientos sindicatos. Un año más tarde el sector sindical se rearticuló después de que el gobierno militar sustituyera el Código del Trabajo de 1931 e impusiera el Plan Laboral en 1979, el cual establecía las bases para la implementación de un modelo económico neoliberal en materia laboral, imponiendo normas definitivas sobre la negociación colectiva, la conformación de agrupaciones sindicales y el régimen de pensiones de seguridad social.¹²² En las poblaciones surgieron varias organizaciones carentes de marco legal que funcionaron bajo el cobijo de la Iglesia católica. Se dividieron en tres tipos: las de subsistencia (asistenciales, solidarias y de autoayuda), las que reivindicaban cuestiones inmediatas y las orientadas a actividades político-culturales (juveniles, comunidades cristianas y de derechos humanos). En todas estas acciones colectivas antirégimen estaba presente un trabajo implícito de carácter educativo y popular.¹²³

También, en 1980 se observó una mayor participación en las movilizaciones del Día de la Mujer y del Día del Trabajo si bien no pudieron penetrar hasta los estratos donde se ejercía el poder real.¹²⁴

El sector estudiantil universitario también se rearticuló paulatinamente de forma autónoma frente a las organizaciones creadas mediante la intervención gubernamental. En general, sólo algunas organizaciones poblacionales y otros tantos comités de vivienda lograron periodos importantes de participación. El temor y la despolitización fue lo que predominó durante este lapso.¹²⁵

¹²² Guillermo Campero, 'El sindicalismo chileno en el régimen militar, 1973-1987', en Rigoberto García (comp.), *Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987*, México, FCE, 1989, p. 276; Tomás Moulián, *Chile actual* ..op cit., pp. 238 y 239.

¹²³ Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, *op. cit.*, p. 14.

¹²⁴ Guillermo O'Donnell y Philippe C. Schmitter, *op. cit.*, pp. 81-82.

¹²⁵ Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, *op. cit.*, p. 15.

Algunos grupos radicalizaron su acción política al pasar a la clandestinidad y decidieron tomar la vía armada: en 1979 el MIR comenzó a rearticularse; en 1980 se fundó la línea armada del PCCH, el FPMR; y más tarde surgiría una derivación del MAPU Lautaro, el Grupo Lautaro.¹²⁶ Cathy Lisa Schneider relata cómo muchos dirigentes de las poblaciones y en menor medida gente de base de las organizaciones decidieron optar por la vía armada, ante la imposibilidad de actuar en el plano político abierto. La repercusión de esta decisión fue marginal a nivel de las bases, debido a los estragos que la represión ya había cobrado. Las acciones del MIR y del FPMR no tuvieron respaldo popular masivo y, en cambio, atrajeron la represión a las poblaciones. No deja de ser importante mencionar las acciones del FPMR en 1986. una, cuando intentaron introducir al país un cargamento de armamentos que más tarde resultaría el más grande decomisado en toda la historia de América Latina de acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA); y otra, el fallido atentado de muerte contra Pinochet.¹²⁷

El proceso de institucionalización del régimen mediante la Constitución de 1980 favoreció el contexto para la aparición *de facto*, si bien no legal, de los partidos políticos. Esto coincidió con la crisis económica de 1982, con la que se evidenció la vulnerabilidad de la propuesta económica del régimen. Tanto el proceso de institucionalización como la crisis económica fueron elementos que facilitaron el crecimiento de la acción opositora. Hasta ese momento, la dictadura militar había destruido la mayor parte del segmento burocrático estatal de la clase media, así como reducido la organización sindical y los alcances de los obreros industriales con el objetivo de “transformar las clases sociales que habían alcanzado niveles de desarrollo para sí, en masas con identidad social pero sin proyecto histórico, es decir, en

¹²⁶ Comisión Chilena de Derechos Humanos-Centro Ideas, *op. cit.*, p. 78.

¹²⁷ Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, pp. 55-57 y Mary Helen Spooner, *op. cit.*, pp. 218-221.

masas amorfas, esencialmente anómicas, en estado de disponibilidad para una condición política modernizante”.¹²⁸

Las movilizaciones de resistencia se realizaron sin la expectativa de conseguir logros o conquistas reivindicativas en el corto plazo; metas que, por el contrario, sí se habían tipificado en la historia de las movilizaciones populares del periodo 1932-1973. Sin duda, derribar la dictadura era también una reivindicación, pero no respondía a un interés particular, para beneficio directo de un grupo determinado, sino uno de tipo general y por lo tanto político.¹²⁹

Los hechos de violencia política se presentaron dentro de un contexto en el que la izquierda no sólo se encontraba “sin Allende”, además estaba desarticulada y exiliada, mientras la crisis alcanzaba también a los partidos políticos populares. La dictadura militar estaba ocupada en destruir, como se ha descrito, las formas protagónicas del movimiento popular: los partidos de izquierda; los grupos armados, las cúpulas gremiales; y las organizaciones barriales, de derechos humanos, de mujeres, juveniles, etcétera. En cambio, al cimentar un sistema económico social de tipo neoliberal y al dejar fortalecido el poder militar frente al civil, la dictadura no destruyó las principales fuentes de inestabilidad social que hicieron emerger la violencia política de las protestas de 1983.¹³⁰

Sin embargo, la reactivación económica de 1984 favoreció a la dictadura y debilitó al movimiento popular, pero igualmente obligó al régimen militar a negociar el respeto a la Constitución de 1980, que señalaba la retirada de Pinochet si éste perdía la elección del plebiscito en 1989 y la convocatoria para llamar a elecciones presidenciales.

¹²⁸ Gabriel Salazar, *Violencia política ... op. cit.*, p. 353.

¹²⁹ *Ibid.*, p. 354.

¹³⁰ *Ibid.*, p. 355.

Esto hace comprensible el por qué la clase política civil chilena, tanto de oposición como la integrada al régimen, haya tenido que asumir la "transición a la democracia" en los términos del modelo liberal que de nueva cuenta se legitimaba, a pesar de que la solución a las grandes inestabilidades de tipo social quedaban pendientes una vez más.

Capítulo III

Las protestas populares: “la explosión de las mayorías”, 1983-1987

La violencia política durante las protestas, 1983-1987

En la literatura chilena el análisis de la violencia durante el periodo de las protestas (1983-1987) se estructura a partir de dos interpretaciones predominantes:

1) La primera está representada por Eugenio Tironi y Eduardo Valenzuela,¹³¹ quienes retoman el concepto de *anomia* de Durkheim para caracterizar los estados de desintegración de la vida social. Para estos autores, los habitantes urbanos pobres no comparten suficientemente las normas del resto de la sociedad, además de que su conexión marginal respecto a la política y a las instituciones los predispone a la violencia y a la actividad criminal.

Tironi identifica a los pobladores como los protagonistas de los hechos de violencia en las protestas, y los conceptualiza como marginales de las zonas periféricas, representantes de un sector que no tiene una ‘inserción estable en la vida económica’, por lo que tienden a ser violentos. Caracteriza las formas violentas como un problema e *desintegración social*

¹³¹ La perspectiva de Eugenio Tironi está expuesta en su obra “Pobladores e integración social”, *op. cit.*, y la de Eduardo Valenzuela en *La rebelión de los jóvenes*, *op. cit.* Respecto a la posición de ambos autores, véase Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, p. 17.

producido por la inexistencia de “bases materiales, institucionales y morales que cohesionen a la nación”.¹³² Para Tironi, el problema de la estabilidad social se sitúa en la capacidad que tenga el sistema político para integrar a los habitantes pobres de las ciudades. El autor hace una acertada apreciación al destacar que la crisis económica de 1982 generó —como en el resto de América Latina— una situación de exclusión económica y social de miles de trabajadores asalariados cuando éstos se encontraron desempleados de un día para otro a causa de la crisis. Sin embargo, su idea de que el origen de la violencia se debe a una determinada situación económica, por lo que su surgimiento carece de horizonte político, resulta inexacta a partir de un estudio de campo realizado por Cathy Lisa Schneider. Esta autora comparó poblaciones de Santiago con características socioeconómicas y geográficas similares pero fundadas a partir de la década de los cuarenta por diferentes partidos políticos u organizaciones, ya sea de tendencias demócrata-cristiana, comunista, socialista o mirista. Investigó el impacto de los partidos políticos en la cultura y la estructura de los barrios populares de Santiago, las diferentes relaciones sostenidas entre éstos y los partidos políticos, así como la forma en que estos últimos afectaron los niveles de movilización durante el régimen autoritario, particularmente en el periodo de las protestas. Schneider concluye que no existió una relación directa entre la crisis económica y la orientación a la violencia de los pobres de la ciudad. Comprobó que las poblaciones fuertemente golpeadas por la crisis económica respondieron débilmente al llamado de las protestas, mientras aquellas ligadas a los partidos y organizaciones de centro e izquierda, particularmente las vinculadas al PCCH, tuvieron una mayor participación en las protestas por lo que también protagonizaron los hechos de violencia. Estas poblaciones impactadas por la crisis preferían no involucrarse en

¹³² Eugenio Tironi, *op cit.*, pp. 63-64.

ningún acto de rebelión por temor a las represalias del Estado; además —de acuerdo con Schneider— carecían de una historia de lucha popular o estaban vinculadas a partidos u organizaciones que no promovían la acción colectiva como forma de cambio social. De ahí que durante las protestas en realidad no existiera una correspondencia directa entre la crisis económica de 1982 y la orientación a la violencia de los habitantes urbanos pobres.¹³³ Incluso, Salazar señala que, en los hechos de violencia no sólo estuvieron involucrados los pobres, sino también un variado espectro de protagonistas de distintos sectores y clases de la estructura social

2) El segundo enfoque —y en el que se enmarca esta tesis— está representado por Gabriel Salazar, Cathy Lisa Schneider y Tomás Moulián.¹³⁴ Estos autores consideran que la violencia política popular no es sólo una respuesta de fuerza contra personas y/o propiedad, ni está directamente relacionada con el estatus socioeconómico de quienes toman parte en estos hechos, sino con los lazos entre los partidos políticos y la cultura política desarrollada por ciertos sectores a lo largo de la historia política y social de Chile. En las protestas el uso de la violencia estuvo asociado a opciones político-ideológicas resultantes de una histórica participación político-partidaria y social. Los protagonistas de los actos de violencia ocurridos en las protestas pertenecían a grupos y redes de identidades colectivas construidos históricamente por diferentes partidos políticos. El uso de la violencia en sus múltiples formas está relacionada con la adscripción organizacional de la masa (ver cuadro 1 y mapa en el anexo)¹³⁵

¹³³ Cathy Lisa Schneider, *op cit.*, p. 8.

¹³⁴ Veáanse Gabriel Salazar, *Violencia política...*, *op cit.*; Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*; y Tomás Moulián, *Chile actual...*, *op cit.*

¹³⁵ Tomás Moulián, *Chile actual. ., op. cit.*, pp. 296-299.

Cuadro

Asociación organizacional y partidista de las poblaciones

Poblaciones con alta participación en las protestas	
Poblaciones	Características
Influencia del PCCH: Granadilla, Pablo Neruda, La Pincoya, Herminda de la Victoria, La Victoria, Yungay, 20 de mayo, Angela Davis, Violeta Parra, La Legua, San Miguel, La Pintana.	Poseían un sentido de la capacidad de la acción colectiva. Los comunistas tendieron a crear un sentido de solidaridad y una tendencia percibir algún grado e interdependencia en la resolución de sus problemas. Demostraron su alto nivel de conciencia de clase, cohesión social y solidaridad.
Poblaciones con débil participación en las protestas	
Influencia del MIR: La Nueva Habana, Lo Hermida, Villa O'Higgins, Villa Francia	Fueron radicales y explosivos. Los líderes frecuentemente fueron estudiantes universitarios más que pobladores. Aunque el MIR intentó involucrar a los residentes de las poblaciones en la creación de miniestados socialistas, las necesidades de la población permanecieron subordinadas al partido.
Influencia de la DC: Las parcelas, Joao Goulart, Lo Hermida.	Los asentamientos controlados por la DC fueron individualistas y carentes de fuertes redes de base social. Fueron dependientes de los recursos del Estado e incluso, aquellas poblaciones que fueron creadas por medio de ocupaciones ilegales abandonaron la actividad política una vez satisfechas sus necesidades de vivienda. Se trataba de relaciones clientelares y verticales que socavaban la organización horizontal y la solidaridad.
Influencia del PS: Las parcelas, Sara Gajardo	Las luchas internas entre las distintas facciones del PS debilitaron su accionar en las poblaciones y, por tanto nunca desarrollaron fuertes lazos de unión para la acción política colectiva.

Cathy Lisa Schneider, *Shantytown protest in Pinochet's Chile...op. cit.*, pp 51, 57, 68, 113 y 134.

La institucionalización de régimen militar chileno en 1980

Una de las explicaciones que se ofrecen para entender el surgimiento de las protestas populares y su radicalización hacia formas violentas fue el proceso de institucionalización y la consiguiente “apertura política” del régimen militar en 1980.

Desde el inicio de su gestión, al régimen militar le interesó crear un marco legal que legitimara el monopolio de su poder y los cambios que estaba introduciendo en la sociedad. Varios proyectos surgieron con este fin (ver cuadro 2). La agenda del proceso de institucionalización dependía de lograr mejores condiciones políticas, y con esto ganar tiempo para ampliar el espacio de maniobra, instrumentar el modelo neoliberal iniciado en 1975, y finalmente asegurar la reproducción del proyecto de modernización impulsado por el régimen.¹³⁶

¹³⁶ *Ibid.*, p. 226.

Cuadro 2
Fases del proceso de institucionalización del régimen militar
1973-1977

<i>Fecha</i>	<i>Acuerdo</i>	<i>Sinopsis</i>
11 de septiembre (1973)	Acta de Constitución de la Junta de Gobierno	Decretaba la acumulación de todos los poderes en la Junta de Gobierno menos el judicial. Establecía el compromiso de 'restaurar la chilenidad y la justicia y la institucionalidad quebrantadas' ¹³⁷
11 de marzo (1974)	Declaración de Principios elaborada por el Comité Asesor de la Junta	Reorganizar y crear una nueva y purificada democracia (permaneció sólo con vagas formulaciones). Primera aproximación seria a un programa de gobierno y la advertencia de que el régimen se proyectaba a futuro ¹³⁸
enero-septiembre (1976)	Actas Constitucionales elaboradas por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución	Un intento de la junta militar de gobierno para conceder estatus constitucional y también a las fórmulas legales que permitían las operaciones represivas ¹³⁹
julio (1977)	Plan de Chacarillas	Plan que fija los plazos para el fin del régimen militar que culminaría con la transferencia del poder a los civiles en 1985 mediante mecanismos democráticos extremadamente restringidos y excluyentes, además de combinar un sistema representativo con varios nombramientos de militares ¹⁴⁰

¹³⁷ Tomás Moulián, *Chile actual...*, op. cit., p. 214; y Ascanio Cavallo Castro, Manuel Salazar Salvo y Óscar Sepúlveda Pacheco, *La historia oculta del régimen militar*, México, Diana, 1990, p. 9.

¹³⁸ Manuel Antonio Garretón, *The Chilean...*, op. cit., p. 136-137.

¹³⁹ *Ibid.*, p. 137.

¹⁴⁰ Manuel Antonio Garretón, *The Chilean...*, op. cit., p. 138 y Tomás Moulián, *Chile actual...*, op. cit., pp. 227-230

La culminación del proceso de institucionalización estuvo favorecida si se considera el análisis de tres factores principales:

1) La necesidad de recomponer las fuentes de apoyo político del régimen militar. La instauración del modelo económico neoliberal afectó a ciertos sectores que inicialmente habían apoyado el golpe. Éstos, al advertir que no habían sido incorporados en la toma de decisiones respecto del modelo, comenzaron a cuestionar el poder hegemónico. Durante los años posteriores al golpe, la aplicación de este sistema económico suponía un régimen autoritario y represivo en el que las drásticas medidas tanto de índole política como económica eran incompatibles con la existencia de sindicatos libres, partidos políticos de oposición, parlamentos, libertad de expresión y de medios de comunicación democráticos.¹⁴¹

2) La presión ejercida por diversos organismos internacionales, y la Iglesia católica chilena a consecuencia de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, especialmente a raíz del asesinato del ministro Orlando Letelier en Washington.

3) Transformaciones introducidas en la sociedad que consistían en nuevas normas capaces de asegurar en el futuro la reproducción del proyecto impuesto, incluso si los militares abandonaban el poder.¹⁴²

En 1976 la Junta de Gobierno comenzó a dictar Actas Constitucionales cuyo objetivo era poner en vigencia, por capítulos, una futura Carta Fundamental. Con ésta se crearía una imagen de progreso al interior del país, difundiendo en el extranjero la creencia de que en Chile el gobierno militar se imponía frenos a sí mismo.¹⁴³

¹⁴¹ Stefan de Vylder, "Chile 1973-1987: Los vaivenes de un modelo", en Rigoberto García (comp.), *Economía y política durante el gobierno militar en Chile 1973-1987*, México, FCE, 1989, p. 71.

¹⁴² Manuel Antonio Garretón, *The Chilean...*, op. cit., p. 132.

¹⁴³ Comisión Chilena de Derechos Humanos-Centro Ideas, op. cit., p. 31.

Un primer avance de este proceso de institucionalización se anunció el 18 de octubre de 1978 con el Anteproyecto de Nueva Constitución, pero es hasta el 1 de julio de 1980 cuando el régimen presentó el texto final. El 11 de agosto la Junta aprobó el Proyecto de Constitución definitivo, el cual sería plebiscitado el 11 de septiembre de 1980¹⁴⁴ Este texto constituyó el proyecto más acabado de institucionalización del régimen. Los puntos principales se basaban en mecanismos para devolver el poder a un gobierno civil mediante el plebiscito que se realizaría en 1988, al que le seguirían elecciones libres si Pinochet no era favorecido.¹⁴⁵

El resultado del plebiscito de 1980 fue: 68% de los votos a favor de la nueva Constitución, 30% en contra y 2% anulados.¹⁴⁶ El plebiscito se realizó en condiciones poco favorables a causa de que la mayor parte de la población desconocía los aspectos esenciales del proyecto de Constitución, además de la inexistencia de registros electorales. La consulta estuvo plagada de irregularidades que pusieron en duda la confiabilidad del referéndum.

No obstante las malas circunstancias para celebrar un plebiscito confiable, el éxito de éste también se debió al apoyo del centro político, representado por el PDC, para llevarlo a cabo. El centro político consideró al golpe y a la caída de Allende como una liberación, y su participación en la caída del gobierno de la UP había sido decisiva.¹⁴⁷ Además, el plebiscito estuvo ubicado en un momento excepcional desde el punto de vista de los resultados macroeconómicos, con excepción de la tasa de desocupación y la balanza comercial¹⁴⁸

Con la aprobación de la nueva Constitución se inauguró otra fase en que el régimen

¹⁴⁴ Tomás Moulián, *Chile actual*, op. cit., p. 232.

¹⁴⁵ *Ibid.*, p. 103

¹⁴⁶ Cathy Lisa Schneider, op. cit., p. 104.

¹⁴⁷ *Ibid.*, p.

¹⁴⁸ Tomás Moulián, *Chile actual...*, op. cit., pp. 232-233.

pinochetista transitó de un régimen militar a uno de carácter autoritario bajo la presidencia del mismo Pinochet. En el largo plazo este proyecto de refundación del sistema político buscaba crear sus propios mecanismos de reproducción aun cuando el régimen militar finalizara.¹⁴⁹ En el corto plazo, la nueva institucionalidad serviría para eliminar o diluir la crítica internacional referente a los derechos humanos, y crear las condiciones para una participación pública limitada que sólo incluyera en el juego político al centro y la derecha, mientras se reprimía focalmente a la izquierda.

Respecto al modelo de desarrollo, la institucionalización tuvo como fin justificar el énfasis de la economía en los sectores productivos; la fuerte expansión del sector terciario (servicios), la reducción del papel del Estado como agente económico, la búsqueda del crecimiento económico con una consecuente concentración de la riqueza en un pequeño número de grandes conglomerados; la penetración capitalista en las áreas rurales, y la preponderancia del sector financiero, que dependía del capital financiero internacional.¹⁵⁰

Los cambios institucionales tendieron a reforzar este proceso lo que repercutió en las organizaciones sociales, especialmente en los sectores populares, los cuales debían enfrentar procesos de fragmentación que disminuyeron su tamaño, afiliación y capacidad para coordinar y ejercer presión. Además, el retorno *de facto*, si bien no legal, de los partidos a la vida política y sus intentos por ganar el control del movimiento surgido bajo la dictadura y fuera de los canales partidarios debilitaron las redes informales de solidaridad. Debido a que las confrontaciones con el régimen llegaron a ser más violentas y costosas, los líderes políticos moderados adoptaron una estrategia conciliatoria, ganando significativas

¹⁴⁹ Manuel Antonio Garretón, *The Chilean...*, *op cit.*, pp. 134-135

¹⁵⁰ *Ibid.*, p. 135.

concesiones provenientes del gobierno militar. El movimiento popular declinó tan pronto las élites de los partidos cortaron el flujo de los recursos políticos a los activistas de base.¹⁵¹

La crisis económica de 1982

Después de que Chile experimentó entre 1973 y 1976 una marcada combinación de inflación y estancamiento, en el lapso de 1977 y 1981 logró estabilizar el ritmo inflacionario y hacer crecer la economía de forma rápida y sostenida. Este periodo es caracterizado por De Vylder como de “recuperación”, porque coincidió con la consolidación política del régimen militar y la fase más coherente en la aplicación del modelo neoliberal.¹⁵² Sin embargo, durante el segundo semestre de 1981, la economía entró en una crisis que continuaría hasta 1985. Ésta tuvo como prelude la bancarrota de la CRAV (Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar) en 1980, uno de los grupos financieros más importantes del país. La crisis económica de 1982 ha sido frecuentemente utilizada para explicar el surgimiento de las protestas y su consecuente radicalización hacia formas violentas, pero como ya se expuso, ésta formó parte del contexto que favoreció el desarrollo de las protestas contra el régimen, aunque no fue un elemento decisivo para su surgimiento. La crisis tuvo su más devastador impacto en el occidente de Santiago, particularmente en los suburbios de Pudahuel y Quilicura, donde los ingresos mensuales cayeron de 32 000 pesos en 1980 a 16 000 en 1983. También afectó la zona sur de la capital, en San Miguel, donde los salarios promedio cayeron de 36 000 pesos a 26 000, mientras que en La Granja disminuyeron de 23 000 a 16,000. Igualmente, amplios

¹⁵¹ Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, pp 15-16.

¹⁵² Stefan de Vylder, *op. cit.*, pp. 68-72

sectores de las clases medias fueron afectados a causa de la multiplicación de sus deudas en algunos casos y por la reducción de sus depósitos y ahorros en el banco en otros. Esta tendencia hizo que estos sectores se alejaran del régimen militar. El relativo desajuste al interior del gobierno propició que los sectores de oposición pudieran publicitar sus protestas y descontento sin riesgo de ser reprimidos,¹⁵³ aunque posteriormente la coa¹⁵⁴cción se presentaría ante el carácter masivo y la radicalización de las protestas. La crisis mostró que los distintos sectores anteriormente pertenecientes a la base de apoyo del régimen trasladaban su lealtad al proyecto económico dominante en favor de sus propios intereses.

El colapso financiero combinado con el dogmatismo y la incompetencia del equipo económico en el gobierno puso en entredicho la imagen triunfante del modelo chileno, lo que condujo a un debate en el cual no surgió una propuesta alternativa por parte de los protagonistas de las protestas populares.¹⁵⁵

A partir de esta coyuntura el régimen redefinió su proyecto económico original. La crisis logró lo que las fuerzas de oposición no habían logrado, es decir, el reajuste del modelo neoliberal y la reestructuración de las alianzas a nivel hegemónico.¹⁵⁶

La oposición mostró incapacidad para transformar su fuerza social en una estrategia que pudiera convertir la crisis administrativa en otra de carácter político en la que el régimen estuviera envuelto y conseguir negociar un proceso de transición con las condiciones de las distintas fuerzas de oposición. Hasta antes del colapso económico, la implementación del modelo se basó fundamentalmente en la coerción. En medio de la crisis y ante la inminente

¹⁵³ Manuel Antomo Garretón, *The chilean...*, *op. cit.*, pp 151-152

¹⁵⁴ *Ibid*, p. 150

¹⁵⁶ *Idem*.

amenaza de dispersión de las bases de apoyo, el régimen se vio en la necesidad de reformular la política económica porque los empresarios y asociaciones de profesionales que habían permanecido de algún modo identificados con el núcleo dominante comenzaron a actuar autónomamente mediante la confrontación con el régimen. La emergencia de un grupo disidente dentro de las clases dominante y media rompió con la imagen de unidad proyectada por el grupo gobernante. Esta ruptura momentánea de la unidad intraclase se produjo a partir de anteriores y variadas divisiones. La primera estaba representada por las grandes asociaciones empresariales que incluían a la Confederación de la Producción y el Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura y la Sociedad de Fomento Fabril, entre otras. También se les unieron algunos sectores empresariales medios que pugnaban porque se les respetaran los privilegios corporativos que tenían antes de ser afectados por la crisis. Un segundo sector fue el que formaron asociaciones de medianos y pequeños empresarios, comerciantes, transportistas y empleados con cargos medios. Un tercero fue conformado por asociaciones profesionales susceptibles a la influencia partidista, por lo que en el transcurso del conflicto tendieron a identificarse con la oposición.¹⁵⁷

El modelo no se modificó en su esencia, sólo se abandonó la ortodoxia de los *Chicago Boys*¹⁵⁸ mediante la implementación de medidas defensivas orientadas hacia la estabilización económica, la modificación de la política externa de débitos o hacia las presiones de ciertos sectores sociales.¹⁵⁹ Para 1985 la economía y la recuperación de la coherencia del modelo ya se habían reactivado y estabilizado.¹⁶⁰

¹⁵⁷ *Ibid.*, pp. 158-159

¹⁵⁸ Los *Chicago Boys* fueron un grupo de jóvenes economistas chilenos que estudiaron en la Universidad de Chicago, donde prevaleció la visión de Milton Friedman y otros teóricos del libre mercado. Véase Mary Helen Sponner, *op cit.*, p. 109.

¹⁵⁹ Manuel Antonio Garretón, *The Chilean...*, *op cit.*, p. 161

¹⁶⁰ Stefan de Vylder, *op. cit.*, p. 63

Trayectoria, evolución y modos de violencia durante las protestas

Para la descripción de los hechos de violencia durante las protestas populares tomaremos la división que el sociólogo Tomás Moulián desarrolló para interpretarlas. La primera fase la denominó de “ebullición”, y abarca las once primeras protestas ocurridas entre mayo de 1983 y octubre de 1984. La segunda fase la caracterizó como de “repetición” o “rutinización”, y abarca el resto de las protestas realizadas entre el de 5 del septiembre de 1985 al 3 de julio de 1986.¹⁶¹

1) Fase de ebullición

a) La irrupción

La *primera protesta* fue realizada el 11 de mayo de 1983 y provocó una primera impresión de que se perdía el temor al régimen con la ruptura del pánico escénico y el desbloqueo inicial. El llamado, hecho por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), fue dirigido a un amplio espectro de sectores como los universitarios, los pobladores y las clases medias.

Las organizaciones y grupos participantes en las protestas solamente operacionalizaron el consenso político logrado por los partidos, ya que existía un control político por parte de éstos en las cúpulas de las organizaciones sindicales. De esta manera, la primera convocatoria fue decidida primero en el ámbito partidario y posteriormente

¹⁶¹ Tomás Moulián, *Chile actual..*, op. cit., pp. 277 y 288

implementada en el sindicato ¹⁶² Rodolfo Seguel, miembro del PDC y presidente de la CTC, lanzó la primera iniciativa en nombre de esta confederación para con esto romper diez años de aparente letargo social. En particular, esta protesta requirió de una integración vertical de los liderazgos en los rangos medio y de base, para que cumplieran su papel de movilizadores.

La primera protesta tuvo un enorme éxito al congregarse a miles de personas en apoyo de la movilización. El sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón notó que el éxito de las protestas se debió a tres factores 1) al carácter multclasista de la protesta;

2) al involucramiento del sindicato del cobre, el más poderoso del país y perteneciente a un sector clave de la economía nacional (que si bien no paralizó ningún proceso productivo si apoyó las manifestaciones con su gran contingente de afiliados), y 3) al énfasis con que se permeó el desafío al régimen. ¹⁶³

Otro elemento que atrajo la participación de diversos sectores fue, paradójicamente, que los métodos de lucha propuestos no implicaban una confrontación directa con los aparatos represivos: no enviar a los niños a la escuela, no hacer compras, no hacer trámites burocráticos, y formas activas como el “caceroleo” durante la noche, que aludía a una acción realizada anteriormente por la derecha contra el gobierno de la UP. En efecto, durante el transcurso del día en que se realizara la protesta no se suscitaron hechos de violencia: la protesta fracasó en la paralización del trabajo; al mediodía se realizaron manifestaciones estudiantiles en mayor número que otras ocasiones, pero seguían siendo los sectores más activos por tradición. Fue hasta en la noche cuando sucedió un cambio cualitativo al desbordarse la masa y aparecer los primeros hechos de violencia masiva, particularmente en

¹⁶² *Ibid.*, p. 289.

¹⁶³ Manuel Antonio Garretón, “Popular Mobilization..”, *op. cit.*, p. 261 y 268.

las poblaciones, donde junto a las formas pacíficas de manifestación se desataron enfrentamientos con la policía y se colocaron barricadas. La represión no se hizo esperar en las principales poblaciones con un saldo de dos muertos y 600 detenidos. En los siguientes días se catearon las casas en cinco de las poblaciones más grandes de Santiago consideradas como “subversivas”¹⁶⁴ Poblaciones tradicionalmente comunistas como Yungay, La Victoria y Herminda de la Victoria, fueron las más afectadas por la represión durante la primera protesta. Pero la respuesta represiva más que intimidar a los pobladores participantes en las protestas, los fortaleció para organizarse mejor y desarrollar nuevos métodos de autodefensa. Las fuertes redes de base del PCCH, la confianza entre los vecinos, y una historia de acción colectiva concentraron a los residentes de las poblaciones para enfrentar al régimen

Durante la *segunda protesta*, que se realizó el 14 de junio de 1983, se produjo una mayor respuesta de las ciudades y pueblos de la provincia, alcanzando un carácter nacional.¹⁶⁵ La convocatoria de esta protesta la efectuó la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNT) La dinámica se desarrolló de forma similar a la primera protesta. en la fase matinal se realizaron desfiles de manifestantes “duros”, de estudiantes cerca de sus campus académicos, y en el centro de la ciudad de sectores políticos activos encabezados por personalidades políticas; mientras que por la noche aparecieron fogatas, barricadas, quemas de transporte público, así como ataques a locales comerciales y sedes del gobierno.¹⁶⁶ Las manifestaciones más fuertes se realizaron en el sur de Santiago, donde jóvenes residentes enfrentaron con piedras y armas caseras a soldados bien armados. Los niveles de violencia crecieron respecto a la primera protesta, particularmente en Herminda de la Victoria y

¹⁶⁴ Mary Helen Spooner, *op. cit.*, p. 188.

¹⁶⁵ *Ibid.*, p. 189

¹⁶⁶ Tomás Moulián, *Chile actual...*, *op. cit.*, p. 294.

Violeta Parra. En ese momento los diarios comenzaron a identificar las protestas como vandalismo.

Además de la represión durante la protesta, que tuvo un saldo de 4 muertos, 75 heridos y más de 1 300 detenidos, las represalias fueron aplicadas según los sectores a que estaban dirigidas. Persecución y hostigamiento judicial para algunos, reprimendas administrativa para otros, y la aplicación de medidas económicas desfavorables para los sectores medios.¹⁶⁷ Así, se decidió en lo subsiguiente ya no llamar al paro laboral, a causa de las represalias patronales que habían recibido los participantes después de la primera protesta.¹⁶⁸

b) Aparición de los partidos políticos y fragmentación del movimiento de protesta

La *tercera protesta* se realizó el 12 de julio de 1983 y en ella fue notable la presencia de los partidos que desde el comienzo del movimiento habían tenido un gran protagonismo por medio de sus organizaciones sindicales y/o poblacionales. A diferencia de las anteriores protestas fueron los partidos políticos los convocantes a esta tercera movilización, durante la cual se manifestaron las mismas formas de lucha que en las protestas anteriores, alcanzando mayor amplitud las marchas al interior de las poblaciones así como los enfrentamientos con las fuerzas policiales. El movimiento de protesta no sólo intentaba expresar el descontento ante el régimen, sino convencer a la población de la viabilidad y la necesidad de manifestar su inconformidad. Además, la marcha buscaba exponer mayores grados de dirección política,

¹⁶⁷ Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, *op. cit.*, p. 30.

¹⁶⁸ Tomás Moulián, *Chile actual...*, *op. cit.*, p. 285 y Mary Helen Spooner, *op. cit.*, p. 189.

venciendo la simple expresión individual de descontento. El resultado de la violencia durante esta tercera jornada fue de dos jóvenes muertos y miles de detenidos por la policía.¹⁶⁹

A partir de la *cuarta protesta*, desarrollada entre el 11 y 12 de agosto de 1983, la unidad de los sectores para la acción que se había conseguido en las tres primeras protestas se destruyó parcialmente al no lograrse una convocatoria consensuada.¹⁷⁰ De ahí que surgiera la Alianza Democrática (AD), conformada por el PDC, una fracción del PS, el PR, el MAPU y otros partidos pequeños, los cuales convocaron para el 11 de agosto a la cuarta jornada de protesta. A su vez, los partidos ilegales de izquierda, el PCCH, el ala radical del PS y el MIR, constituyeron el Movimiento Democrático Popular (MDP), el cual organizó una protesta de dos días para que se efectuara el 11 y 12 de agosto. En esta cuarta manifestación la coalición de izquierda comenzó a poner en práctica una estrategia de escalamiento, que consistía en ir aumentando la duración de las protestas e intensificando los niveles de violencia. Hubo seis actos separados en memoria del presidente derrocado Salvador Allende, se desarrollaron marchas en las universidades, se realizó una manifestación en el centro de Santiago y en las minas del cobre se llevaron a cabo huelgas de hambre, mientras en las poblaciones se desataron enfrentamientos armados con la policía. Para la izquierda, el incremento de la violencia provocó problemas a la hora de decidir estrategias de acción política con otras fuerzas participantes en las protestas, así como al momento de la formación de concertaciones opositoras.¹⁷¹ Estas diferencias existían desde antes y tenían que ver, fundamentalmente, con el papel que cada uno de los partidos y grupos de oposición habían asignado históricamente a la violencia en sus múltiples formas. Así, desde 1973 hasta 1990 la

¹⁶⁹ Tomás Moulián, *Chile actual...*, op. cit., p. 295 y Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, op. cit., p. 30 y 81.

¹⁷⁰ Tomás Moulián, *Chile actual...*, op. cit., p. 295.

¹⁷¹ Gabriel Salazar, *Violencia política...*, op. cit., p. 79

resistencia asociada a formas violentas había tenido más influencia en las poblaciones ligadas al PCCH, mientras que las relacionadas al PDC tendieron al individualismo, a la competencia y al fatalismo, con esporádicos intentos de resistencia. En las poblaciones tradicionalmente vinculadas al PS, las luchas al interior de éste provocaron que las energías de los militantes se desgastaran, mientras en los lugares donde el MIR había dominado los pobladores tuvieron poca experiencia para organizarse entre sí mismos ante la ausencia de su dirigencia que había sido desaparecida por el régimen militar y que había proporcionado poca experiencia en la autoorganización

Estas caracterizaciones advierten sobre la división política existente entre los convocantes, y que ocurrió antes de que Sergio Onofre Jarpa (ex parlamentario de derecha y duro dirigente contrario al gobierno de Allende) fuera nombrado ministro del interior y, por tanto, antes de que invitara a la Alianza Democrática a negociar con el régimen. De esta manera se puede apreciar que las diferencias de las fuerzas opositoras no eran coyunturales y que tampoco fueron el resultado de la “carnada” lanzada por Onofre Jarpa y mordida por la AD.¹⁷²

A partir de la cuarta protesta, que tuvo un saldo de 29 muertos y 1 000 detenidos, comenzaron los diálogos entre Onofre Jarpa y la oposición de la AD, excluyendo al MDP. A fines de agosto y principios de octubre de 1983 las protestas estuvieron interferidas a causa de la negociación, la cual ya había fracasado para octubre.¹⁷³

Para este momento, la AD vislumbraba claramente las protestas como un medio para forzar al régimen a negociar una transición política con la renuncia de Pinochet. A su vez, el

¹⁷² Tomás Moulián, *Chile actual. ., op. cit.*, p 296.

¹⁷³ *Ibid.*, p. 297

MDP rechazaba el diálogo y convocaba a la población para llevar a cabo todas las formas de lucha, incluida la violencia, con el fin de derrocar al régimen militar. Existían dos variantes dentro de esta última tendencia respecto a la definición de la estrategia a seguir. a) quienes insistían en efectuar la movilización rupturista recurriendo a todas las formas de lucha, y por supuesto el uso de la “violencia aguda”, para provocar una insurrección popular y el colapso del régimen; y b) quienes preferían una movilización concebida como “desobediencia civil”, capaz de provocar una crisis de gobernabilidad para posteriormente negociar una salida con las FFAA, de ahí que plantearan la necesidad de reconstrucción del movimiento popular.

Con la división de las fuerzas de oposición, Pinochet intentaría debilitar las protestas populares profundizando su fragmentación mediante una estrategia de negociación con la AD, mientras aislaba y reprimía a los sectores vinculados al MDP. También se anunció una apertura política, se levantó el estado de sitio y se legalizaron los partidos no marxistas.

En este escenario se llevó a cabo la *quinta protesta*. Por un lado la AD llamó a protestar el 8 de septiembre de 1983; por otro, el MDP convocó a una jornada de cuatro días, del 8 al 11 de septiembre (aniversario del golpe). En ésta, se realizaron manifestaciones en el centro de la capital (una de ellas contra el acto oficial de celebración del golpe, otras en memoria de Allende, y los funerales masivos de las primeras víctimas de la jornada del movimiento de protesta), y surgieron barricadas, fogatas y enfrentamientos con las fuerzas represivas en las zonas poblacionales. También se intentó realizar un acto al mediodía en una plaza central de Santiago, pero fracasó debido a la represión policial y a un decreto vacacional emergente que tenía como objetivo impedir la extensión de la protesta entre los estudiantes de secundaria.¹⁷⁴ La severidad de la represión alcanzada hasta ese momento

¹⁷⁴ Mary Helen Spooner, *op cit.*, p. 194, Tomás Moulián, *Chile actual...op cit.*, p. 297 y Eduardo

provocó serios debates entre los sectores del MDP: al interior del PCCH se decía que había llegado el tiempo de

desarrollar una estrategia militar, como la adoptada en 1980. La fracción del PS-Almeyda, que había sido moderada durante el gobierno de la UP, experimentó una reconversión parecida a la del PCCH, que anteriormente había hecho énfasis en la democratización del país por medios políticos. Si los socialistas moderados del PS-Altamirano¹⁷⁵ habían llegado a creer que la coalición con el PDC en el proceso de transición a la democracia era la clave del éxito para evitar polarizaciones, la fracción del PS-Almeyda¹⁷⁶ consideraba que la principal falla cometida por la UP había sido la falta de una “vanguardia revolucionaria” que defendiera el gobierno socialista de Allende. Este enfoque se exacerbó aún más cuando el gobierno invitó a negociar únicamente a la AD.

Nuevamente, sólo el MDP convocó a la *sexta jornada* de protesta a realizarse el 11 y 13 de octubre del 1983 para medir fuerzas con la AD, que había fracasado en la negociación con Onofre Jarpa. Se llamó a una concentración encabezada por las juventudes políticas, además de las convocadas por el MDP y el Proyecto Democrático Nacional (Proden) para octubre.

c) Negociación con el régimen militar y luchas sectoriales: fin de la unidad de oposición

La *séptima protesta* convocada por la AD para noviembre de 1983 llamaba a una concentración multitudinaria.¹⁷⁷ La diferencia de ésta con relación a las anteriores protestas

Valenzuela, p. 82

¹⁷⁵ Llamamos PS-Altamirano a la fracción del PS encabezada por el ex secretario general de ese partido, Carlos Altamirano. Véase Mary Helen Spooner, *op. cit.*, p. 125.

¹⁷⁶ Llamamos PS-Almeyda a la fracción del PS encabezada por Clodomiro Almeyda, ministro de relaciones exteriores durante el gobierno de Allende. Véase Mary Helen Spooner, *op. cit.*, p. 36

¹⁷⁷ Tomás Mouhán, *Chile actual*, *op. cit.*, p. 297.

fue la aparición de formas de lucha reivindicativas entre los estudiantes, trabajadores y pobladores. Además de que la participación de las clases medias fue menor respecto a las ocasiones anteriores ¹⁷⁸

En el contexto de la apertura restringida impulsada por Sergio Onofre Jarpa y del diálogo con la AD (agosto-septiembre), la protesta declinó como estrategia principal para expresar el descontento y se adoptaron formas más tradicionales de la cultura política nacional (por ejemplo, la concentración), así como aquéllas vinculadas a la lucha reivindicativa sectorial (el paro, la toma de tierras). En el ámbito de la militancia política, también se impusieron formas tradicionales como la realización de actos públicos partidarios. Es a partir de ese momento que las protestas comenzaron a ser discontinuas, y cuando las diferencias en la decisión de estrategias y objetivos entre el MDP y la AD se hicieron más evidentes ¹⁷⁹ Para De la Maza y Garcés la declinación de la protesta en el plano nacional tendió a aislarse, haciéndose más visible el protagonismo de los jóvenes pobladores. ¹⁸⁰ El resultado de esta violenta jornada fue de seis muertos dentro de las poblaciones (incluyendo a un policía de Carabineros) ¹⁸¹

Entre la séptima protesta y la *octava jornada* realizada el 27 de marzo de 1984, transcurrieron cuatro meses. En ésta, los sectores medios se manifestaron por medio del cierre parcial del comercio y con el retiro a horas tempranas del transporte colectivo, además de auspiciar un alto ausentismo escolar. En las poblaciones militantes del PCCH y en ciertos sectores del PS se produjeron barricadas, marchas, fogatas y enfrentamientos con la policía.

¹⁷⁸ De la Maza y Mario Garcés, *op cit.*, pp. 82-83.

¹⁷⁹ Tomás Moulián, *Chile actual.*, *op cit.*, p. 297.

¹⁸⁰ Eugenio Tironi, *op. cit.*, p. 83.

¹⁸¹ Mary Helen Spooner. *op cit.*, p. 195 y Tomás Moulián, *Chile actual...*, *op cit.*, p. 297

El saldo fue de 600 detenidos y 7 personas muertas. También aparecieron abiertamente grupos de militantes del FPMR liderando hechos de violencia organizada como quema de camiones, sabotaje menor y apagones.¹⁸² En junio de 1984 estudiantes universitarios y pobladores, organizados principalmente por la izquierda, realizaron varios actos de protesta: una huelga en la mina de cobre ‘El Teniente’, una huelga general en las poblaciones del occidente de Santiago (Pudahuel), una marcha de periodistas en Valparaíso, huelgas de hambre en Santiago y Concepción, sabotajes al servicio eléctrico en varias provincias y 31 incidentes de bombas en 10 distintas ciudades. En julio, 8 000 familias participaron en la toma violenta de un asentamiento que llevó a la creación de los campamentos Monseñor Fresno y Silva Henríquez en el sur de la capital del país. De 24 ocupaciones de tierras por los pobladores entre 1980 y 1985, el de Silva Henríquez fue uno de los más activos en términos de movilización y participación

La DC criticó el crecimiento de la violencia impulsado por la izquierda y su desenvolvimiento fuera del marco legal, por lo que decidieron llamar a la *novena concentración* junto a la iglesia católica y la AD La denominaron Jornada por la Vida y sería efectuada el 9 de agosto de 1984.¹⁸³ Si bien esta jornada transcurrió de forma pacífica, simultáneamente se realizaron actos de violencia en otros lugares. Fueron detenidas 34 personas durante la Jornada por la Vida, diez pobladores fueron asesinados en confrontaciones con la policía y al siguiente día fueron detenidos 45. En ese momento, el régimen amenazó con llevar a cabo una masacre como la del 11 de septiembre de 1973.

¹⁸² De la Maza y Mario Garcés, *op. cit.*, p 83

¹⁸³ Tomás Moulán, *Chile actual.*, *op. cit.*, p 297.

A finales de este mes la iglesia y la AD formaron una agrupación llamada Acuerdo Nacional para el Retorno a la Democracia, a la que no fueron invitados ni el PCCH ni el MIR. Los principales representantes de la Alianza señalaban que las protestas habían sido muy costosas y que era necesario iniciar un diálogo con el gobierno para que posteriormente éste llamara a elecciones libres y directas de presidente y parlamento, a fin de eliminar paulatinamente las restricciones a la actividad política.¹⁸⁴ En tanto, el MDP anunciaba que continuaría movilizándose hasta que el régimen cayera. Los partidos del Acuerdo Nacional veían en las protestas una forma de forzar al régimen a negociar; en cambio, el MDP las consideraba como el primer paso hacia una huelga nacional prolongada y su posterior insurrección revolucionaria. Entre mayo y septiembre hubo varios intentos fallidos de convocar a otra protesta. También durante este lapso el PDC decidió tomar distancia de la izquierda y solicitar apoyo del derechista Partido Nacional (PN), además de reorientar su estrategia respecto a las clases medias que se alejaban cada vez más por la violencia resultante en las protestas. Pinochet tomó ventaja de las profundas divisiones entre las organizaciones y partidos opositores para aprobar una ley antiterrorista e inició una escalada de ataques contra sospechosos de pertenecer a grupos armados. Incluso algunos activistas del MDP señalaron que los partidos de vanguardia no funcionaban y que habría de redefinir la estrategia política porque consideraban que no era justo continuar arriesgando la vida de la gente sin obtener nada. Argumentaban que era necesario no perder la confianza de sus bases de apoyo y esto lo podían lograr enfocándose en las necesidades inmediatas de la gente

Para fines de agosto era claro que el PDC había fallado en su cuarto intento por negociar con el régimen y el PN no había aceptado unírseles para ejercer presión. Frustrada, la

¹⁸⁴ Mary Helen Spooner, *op. cit.*, p. 207.

DC se unió nuevamente al MDP en las movilizaciones

El 4 de septiembre de 1984, un mes después, se realizó la *décima protesta*. El saldo fue de 10 muertos, 900 detenidos y 150 heridos. Entre las personas asesinadas se encontraba el padre André Jarlan, quien recibió una bala disparada contra la multitud.¹⁸⁵

Un mes después se convocó a la *onceava protesta* con un llamado de paro nacional para el 30 de octubre de ese mismo año, que tuvo un gran éxito en la capital debido a la adhesión de los microbuseros. Sin embargo, este gremio no combatió para derrocar a la dictadura, lo que buscaba era renegociar su deuda en dólares.

La oposición sobrevaloró el éxito de esta última protesta al creer que se había recuperado el ritmo de las movilizaciones. Este diagnóstico erróneo marcó el inicio de la “elitización” de las movilizaciones al mismo tiempo que parecía escaparse a la oposición política el único momento en que podían haber forzado al régimen a negociar.

El gobierno anunció el establecimiento del estado de sitio el 6 de noviembre de 1984 y ordenó una persecución en las poblaciones Raúl Silva Henríquez y en La Victoria.¹⁸⁶

El estado de sitio como medida legal mostró y ensanchó las capacidades represivas de la dictadura, especialmente por los conflictos y ambivalencias existentes al interior de la dirección política económica. La masa se detuvo para entrar en una fase de repliegue, fue entonces cuando se pudo observar que las protestas no eran una expresión espontánea dotadas con una combatividad incontenible. No propiciaban —según el diagnóstico de la izquierda— “las condiciones [. . .] para la revolución”. El Estado de sitio mostró mano dura por un lado y, por otro, la incapacidad de la oposición de centro y de izquierda para definir

¹⁸⁵ *Ibid.*, p. 198.

¹⁸⁶ Mary Helen Spooner, *op. cit.*, p. 199 y Tomás Moulián, *Chile actual ... op. cit.*, p. 298.

líneas políticas eficaces que mantuvieran el auge participativo en el movimiento de protesta para así conseguir abrir las puertas hacia una negociación política que incluyera la renuncia de Pinochet al poder.¹⁸⁷

A pesar de que los comunistas fueron los más activos durante este periodo, la decisión en 1980 del PCCH de optar por una estrategia insurreccional aisló a los miembros militantes de sus bases poblacionales. Si antes de 1983 los objetivos del PCCH eran reconstruir las organizaciones sociales y acercar a la gente que compartía las mismas necesidades, después de ese año el partido comenzó a cambiar el papel de sus líderes en las organizaciones de masas y emplearlos en operaciones militares clandestinas. La consecuencia directa de esto fue la represión en las poblaciones donde era bien acogido.

2) Fase de rutinización de las protestas

A pesar del estado de sitio no ocurrió un repliegue definitivo ni total, sin embargo, a diferencia del ciclo anterior, las protestas se fueron convirtiendo en movilizaciones de militantes y combatientes, y sólo tenían sentido para los cuadros políticos de los distintos partidos, es decir, cada vez eran más elitistas y previsibles. La violencia protagonizada por grupos militantes buscaban radicalizar sus acciones y potenciar la protesta para preparar una ‘insurrección’¹⁸⁸. Pronto se advirtió una división entre quienes eran activistas en las poblaciones y disidentes, diferenciación que facilitó la acción de los cuerpos de seguridad del Estado para concentrar aún más la represión en ciertos grupos. El régimen buscaba aumentar

¹⁸⁷ Tomás Moulián, *Chile actual. , op. cit.*, pp. 299-304

¹⁸⁸ Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, *op. cit.*, p. 79.

el grado de violencia de las protestas para, de ese modo, hacer desertar a quienes no deseaban correr riesgos o sólo toleraban un riesgo muy bajo ¹⁸⁹ Con esto, pretendía aumentar las contradicciones entre moderados y radicales, así como deslegitimar las protestas entre los habitantes de las poblaciones ante la brutalidad de los métodos de represión. El régimen apostaba a desgastar y hacer pagar un alto costo a la gente que participara en las protestas o en cualquier otra manifestación de disidencia. ¹⁹⁰

Cuando se reactivó el movimiento, las crisis económica y de dirección política habían sido superadas, y para entonces se sabía que las protestas no eran decisivas en la salida de Pinochet. También surgió la opinión de que movilizarse no era importante. En esta fase, las protestas fueron afectadas por las negociaciones emprendidas nuevamente por la AD, además, la oposición estaba dividida. La solución que planteaba el MDP giraba en torno a un dilema erróneo: por un lado se sugería la alianza con la derecha con el fin de adquirir mayor fuerza para negociar con el régimen y, por otro, se proponía la rebelión. En este contexto se llevaron a cabo las *doceava* y *treceava protestas*, ocurridas en los meses de septiembre y noviembre de 1985.

Este clima de fatalismo y divisionismo pareció superarse con la *catorceava concentración* efectuada a fines de noviembre de 1985, y con la creación de la Asamblea de la Civilidad, inaugurada el 2 de julio de 1986 con la *quinceava movilización*. Esta protesta duró dos días y en ella el ejército quemó vivo al activista y dirigente comunista Rodrigo Rojas Denegri

Sin embargo, a principios de agosto de 1986 el descubrimiento de armas

¹⁸⁹ Tomás Moulián, *Chile actual...*, op. cit., pp 302 y 317 y Cathy Lisa Schneider, op. cit. p. 157

¹⁹⁰ Tomás Moulián, *Chile actual...*, op. cit. p. 303.

pertenecientes al FPMR hizo que la AD tomara una distancia definitiva del MDP, y ante la pérdida de fuerza de las protestas pactó la negociación con el régimen antes de que desaparecieran las posibilidades de hacerlo. Las siguientes movilizaciones convocadas por el MDP y realizadas en los primeros días de septiembre estuvieron limitadas a la sola participación de las poblaciones más combativas.¹⁹¹

Actores y movimientos de las protestas populares

Tomás Moulián considera que “la determinación de quiénes fueron los impulsores o las fuerzas dirigentes de las protestas requiere de un análisis complejo por niveles que no resiste un análisis general, que rescate a las organizaciones sociales por encima de los partidos o viceversa”.¹⁹² Sin embargo, Salazar, Gonzalo de la Maza y Mario Garcés desarrollan a *grosso modo* una definición de los principales protagonistas en los hechos de violencia, independientemente de los partidos políticos a los que éstos estuvieron asociados.

Salazar señala que el protagonista en los hechos de violencia popular emerge como sujeto anónimo de una masa en la cual se presentan identidades simultáneas. No se trata —como muy a menudo se ha querido caracterizar lo popular— únicamente de identidades estructurales como la del obrero, sino que también existieron empleados, profesionales, estudiantes y militantes de partidos participando activamente en estos hechos de violencia. La masa constituyó el modo predominante para ejercer la violencia política, porque el anonimato de los individuos entre la multitud, les permitía moverse en la acción directa sin temor a una

¹⁹¹ *Ibid.*, p. 335.

¹⁹² *Ibid.*, p. 288

represión posterior ¹⁹³

Salazar, así como Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, realizó un seguimiento de los protagonistas y su frecuencia de participación durante las protestas, y sobre sus modos de manifestación violenta (cuadro 3) En general, estos autores coinciden en cómo definen a los protagonistas, aunque en ocasiones parezcan distintos por el carácter tan amplio y complejo de la masa popular. Cabe aclarar que De la Maza y Garcés sólo analizan las primeras once protestas, mientras que Salazar abarca las 22 movilizaciones

Cuadro 3

Modos de violencia

Origen	Caracterización
<i>Espontáne</i>	Violencia ejercida por individuos, grupos, pobladores o masas sin la mediación de una conducción política o corporativa, sin correspondencia temática directa con la situación del entorno, pero en respuesta a tendencias social-populares que se hallaban sentimentalizadas al momento de estallar la acción por la ausencia de apropiados canales institucionales de desenvolvimiento.
<i>o</i>	
<i>Derivado</i>	Violencia que en cierto modo también es espontánea, pero su principal característica es que surge como respuesta a la represión (provocación) desproporcionada.
<i>Organizad</i>	Es la violencia que ha explicitado "en grado diverso, los objetivos, intenciones o propósitos que se habían perfilado en la conciencia social o política de los sujetos que las realizaban. Demuestran haber tenido un plan de acción y/o un esquema orgánico previamente discutidos y trazados. Tal planificación, sin embargo, no ha implicado obligatoriamente la existencia de grandes planes conspirativos, nacionales o extranjeros, salvo excepciones"
<i>o</i>	

Fuente: Gabriel Salazar, *Violencia política...*, *op. cit.*, pp. 145-146.

Según Salazar, los militantes de los distintos partidos políticos fueron los principales protagonistas de los hechos de violencia política. En esto coincide con Moulián, quien si bien

¹⁹³ Gabriel Salazar, *Violencia política...*, *op. cit.*, p. 124 y 181

no hace un análisis de los sujetos participantes en los hechos de violencia, menciona que los militantes —especialmente en el segundo ciclo de las protestas— fueron quienes los protagonizaron. El concepto de *militante* no existe en el análisis que realizan De la Maza y Garcés.¹⁹⁴

Después del papel principal de los militantes, Salazar resalta la participación constante de los pobladores en los hechos de violencia, mientras que De la Maza y Garcés los colocan como los protagonistas más importantes del periodo. No está de más decir que entre los pobladores, como anotan De la Maza y Garcés, se desenvuelven varias identidades: jóvenes, militantes, mujeres, lumpenes, obreros y desempleados.¹⁹⁵

Otro sector que participó de manera permanente y protagónica fue el de los estudiantes, en esto coinciden tanto Salazar como De la Maza y Garcés. Los sectores medios también participaron en las acciones de violencia, aunque de forma fluctuante e irregular. De la Maza y Garcés desglosan algunas de las identidades que se desenvuelven en este *sector medio*: 1) los gremios del transporte y el comercio; 2) colegios de profesionales; y 3) aquéllos que participaron en las protestas desde sus barrios en las zonas residenciales y dentro de sus automóviles. En tanto, los sectores obreros, quienes inauguraron las protestas al convocar a la primera de ellas, tuvieron una participación decreciente y débil.¹⁹⁶ De acuerdo con Salazar, entre los participantes en los hechos de violencia se encontró el público transeúnte que se integraba a la masa espontáneamente, y en menor cantidad, los campesinos

¹⁹⁴ *Ibid.*, p. 189.

¹⁹⁵ Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, *op. cit.*, pp. 86-89 y Gabriel Salazar, *Violencia política...*, *op. cit.*, p. 189.

¹⁹⁶ Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, *op. cit.*, pp. 89-96 y Gabriel Salazar, *Violencia política...*, *op. cit.*, pp. 189-190.

y los religiosos.¹⁹⁷

Se puede concluir que el hecho de que sean los militantes los principales protagonistas de los hechos de violencia, muestra las distintas adhesiones y definiciones políticas, eventualmente independientes de las existentes a nivel de las cúpulas partidarias; y que la dinámica de la militancia de base puede moverse en una dirección diferente a la marcada por las cúpulas dirigentes. Esto muestra que los partidos de izquierda, aparte de su identidad institucional, tuvieron otra asociada con el movimiento popular y su grado de acción.¹⁹⁸

En efecto, por una parte se manifiesta la heterogeneidad de los sectores involucrados: grupos naturales de jóvenes y adultos —desempleados, drogadictos, delincuentes, grupos organizados de carácter social y político comités de sin casa, grupos cristianos, partidos políticos, etcétera—, mientras que por otra parte es posible detectar la expresión de estos grupos en sus distintas direcciones: oposición al régimen como regla general, pero también afirmación de identidades parciales (los jóvenes), como sentidos o “usos” muy primarios (el grupo de delincuentes que aprovecha la protesta para sus propios negocios cobro de peaje, asalto a locales comerciales).

A pesar de que las protestas violentas incidieron en la acentuación de la crisis del régimen militar, los movimientos y organizaciones que confluyeron en éstas tuvieron alcances parciales debido a su imposibilidad para estructurar un proyecto alternativo de transición democrática. Sus alcances se circunscribieron a la creación de espacios para la participación política en los términos impuestos por el gobierno militar y los dirigentes de la Concertación

¹⁹⁷ Gabriel Salazar, *Violencia política...*, op. cit., p. 187

¹⁹⁸ *Ibid.*, p. 189.

Democrática. No obstante, el objetivo de este capítulo ha sido subrayar que las protestas con altos grados de violencia surgidas entre 1983 y 1987, constituyeron formas de violencia política y no un fenómeno de *anomia social*, ya que los grupos participantes estaban asociados a opciones políticas.

Capítulo IV

Las sombras del mañana: los resultados de la transición

La negociación política para la “transición a la democracia”, 1988-1990

¿Pudo la violencia política de los sectores populares alcanzar un punto de intolerancia que obligara a las Fuerzas Armadas chilenas a realizar un ajuste institucional como el que se emprendió entre 1989 y 1990 y que culminó con la “transición a la democracia”?

Durante la fase de ebullición de las protestas el surgimiento de la violencia provocó la preocupación del régimen militar porque ésta creaba condiciones de inestabilidad e ingobernabilidad en una coyuntura de crisis económica. En este ciclo la violencia política popular fue un elemento fundamental que puso en jaque a la dictadura por primera vez después de diez años, obligándola a plantear con los sectores de la oposición una negociación política momentánea que observara la salida de Pinochet. Durante el auge de las protestas existieron intersticios por los que era posible horadar el proyecto de modernización liberal impulsado por el régimen pinochetista por medio de la Constitución de 1980. Fue el único momento en que se pudo forzar a una negociación ¹⁹⁹

¹⁹⁹ Tomás Moulián, *Chile actual...*, *op cit.*, p 326.

Si embargo, es importante destacar que el régimen militar nunca enfrentó el peligro de la caída porque poseía el monopolio de la fuerza y nunca fue amenazado por un poderío militar superior.²⁰⁰ Esto hubiese ocurrido si la crisis económica sale de control transformándose en colapso o crisis terminal. El gobierno pulverizó esta posibilidad cuando logró con éxito convertir el escenario de crisis en uno de rearticulación,²⁰¹ especialmente a partir de 1984 con la redefinición del modelo neoliberal encabezada por el joven tecnócrata y ministro de Hacienda Hernán Buchi, y la salida de los *Chicago Boys* del equipo económico.²⁰²

Las violentas movilizaciones de masas ocurridas a mediados de 1984 durante la fase de rutinización de las protestas sólo generaron condiciones de desgobierno y aislamiento para el movimiento popular, particularmente el ligado al MDP; en cambio, estos acontecimientos violentos nunca provocaron divisiones internas dentro de las FFAA, ni el despliegue de una rebelión generalizada. Sólo en el caso de que se hubiesen producido paralizaciones muy prolongadas en sectores claves de la actividad laboral, el régimen habría sufrido rupturas en su interior.²⁰³

En agosto de 1983, durante la cuarta protesta, el régimen militar intentó negociar por vez primera la “transición a la democracia”. La parte gubernamental estaba representada por el ministro y dirigente del PN, Sergio Onofre Jarpa, mientras que por la oposición sólo se

²⁰⁰ *Ibid.*, p. 301

²⁰¹ Manuel Antonio Garretón, *The Chilean...*, *op. cit.*, pp. 149-155. Este autor explica que no debe confundirse “crisis en el régimen” con “crisis del régimen”; al mismo tiempo que analiza cómo la dictadura militar tuvo la capacidad de sortear la crisis.

²⁰² Desde el 19 de octubre de 1982, Pinochet comenzó a modificar su gabinete económico a fin de cambiar el rumbo de ciertas estrategias económicas, aunque reafirmó el compromiso de su gobierno con la política del libre mercado. Mary Helen Spooner, *op. cit.*, p. 177 y Patricio Meller, *Un siglo de economía política chilena (1890-1990)*, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 1996, p. 235.

²⁰³ Tomás Moulián, *Chile actual ...*, *op. cit.*, pp. 300-301

encontraba la AD. El MDP no fue invitado a la negociación, pero tampoco tenía interés por participar en ella.²⁰⁴

Detrás de la negociación con Jarpa existía un plan político que, sobrepuesto a la represión, se esperaba resolviera la situación surgida el 11 de mayo. El plan Jarpa perseguía tres objetivos: 1) reagrupar a las fuerzas políticas que apoyaban al régimen; 2) limitar el espacio de la participación política mediante una legislación que institucionalizara una apertura controlada de largo plazo; y 3) profundizar hasta límites inconciliables la división surgida entre las organizaciones y partidos de oposición.²⁰⁵

Frente a la petición de negociar, la AD y el MDP definieron sus estrategias políticas reviviendo una discusión que dentro del movimiento popular databa desde inicios de los años ochenta: por un lado, la AD buscaba alcanzar el fin de la dictadura mediante la movilización pacífica y el diálogo con el régimen; por otro, el MDP no consideraba necesario negociar con el régimen hasta que éste no abandonara el poder.

Estas dos lógicas abrieron un debate dentro de la izquierda en torno al movimiento popular y sus posibilidades para transformar la realidad política y social del país. ¿Cuál era entonces el grado de existencia de estas dos alternativas políticas?

Tanto la AD como el MDP creyeron que la negociación propuesta por Onofre Jarpa era una muestra del estado de debilidad generalizada del régimen,²⁰⁶ cuando en realidad se trataba del proyecto de un grupo emergente aglutinado alrededor del ministro de Hacienda, entonces apoyado por Andrés Allamand del derechista Movimiento de Unidad Nacional (MUN, fundado el 27 de noviembre de 1983), quien buscaba acercarse a los opositores de

²⁰⁴ *Ibid.*, p. 296.

²⁰⁵ Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, *op. cit.*, p. 100.

²⁰⁶ Tomás Mouhán, *Chile actual...*, *op. cit.*, pp. 300-301.

centro para de esta manera aparecer como un interlocutor liberal y democrático perteneciente al régimen. Este grupo había aprovechado la crisis de dirección del régimen, en especial la desconfianza de los empresarios hacia los economistas neoliberales, para desplazar al grupo de los gremialistas cercano al gobierno militar, que además era un movimiento de derecha surgido en la Universidad Católica apoyado por la Unión Democrática Independiente (UDI, creada en octubre de 1983) y encabezado, entre otros, por Jaime Guzmán y Sergio Fernández.²⁰⁷

La negociación Onofre Jarpa-AD fracasó y, en cambio, el régimen logró iniciar la redefinición de un espacio controlable de oposición política aprovechando la profundización de las divisiones. Esto ocurrió a mediados de 1984, cuando la crisis económica comenzaba a ceder, lo que coincidió con el desgaste y la “rutinización” de las protestas. En esa conyuntura, el “uso de la violencia aguda” propuesta por el PCCH se revirtió y trajo consigo la represión contra los sectores populares, particularmente en las poblaciones más participativas y radicalizadas de Santiago.²⁰⁸

El 25 de agosto de 1985 se firmó el Acuerdo Nacional, cuyo contenido observaba la formación de un bloque favorable al cambio gradual y moderado del régimen mediante una reforma que permitiera negociar, pero dentro del marco impuesto por el sistema. En el Acuerdo fueron incluidos, además del propio gobierno, algunos partidos moderados y de derecha, excepto la UDI. Por parte de la izquierda, el MIR, el PCCH y el MDP rechazaron el

²⁰⁷ La UDI fue un grupo que surgió desde el interior del régimen militar cuyo contenido ideológico era una mezcla del pensamiento católico social conservador pero con estricta orientación neoliberal en los planos económico y político. *Ibid*, pp. 306 y 307, Samuel J. Valenzuela, *The origins...op. cit.*, p. 71. Para una síntesis gráfica de los principales actores políticos existentes entre 1983 y 1984, véase Francisco Zapata, *op. cit.*, pp. 223 y 224.

²⁰⁸ Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, p. 175.

Acuerdo.²⁰⁹

Para entonces Jarpa había dejado su cargo en el gobierno, restándole al Acuerdo posibilidades de diálogo con el poder. El 4 de septiembre de 1985 la oposición había incrementado sus diferencias: era claro que la negociación política sólo se circunscribía a la AD y al marco del Acuerdo, mientras se impulsaba una política de aislamiento para la izquierda. Poco después Pinochet hizo caso omiso del Acuerdo al considerar superada la crisis financiera y observar una oposición dividida que pronto se desgastaría, perdiendo capacidad para movilizarse y acordar soluciones.²¹⁰ El MUN, partido de derecha partícipe del Acuerdo, creyó poder impulsar una reforma constitucional pactada, sin advertir que el régimen, siempre renuente a negociar en la crisis, tampoco lo haría en ese momento, cuando había conseguido rearmar su bloque de apoyo entre las clases hegemónicas y retomar la senda del crecimiento tras la crisis económica.²¹¹

En 1986, la AD cambió su actitud maximalista que proponía una negociación fuera de la norma constitucional de 1980 y la salida de los militares del poder, por otra minimalista que incluía reformas para convocar a una Asamblea Constituyente.²¹² Algunos de sus líderes políticos e intelectuales más prominentes, como Patricio Aylwin, Manuel A. Garretón y José Joaquín Brunner, consideraron importante establecer una alianza con los comunistas para intentar reactivar la movilización, pero al mismo tiempo creyeron que eso los estigmatizaría porque el PCCH cargaba con el estigma de la violencia, al definir como estrategia la “sublevación de masas”. Además, con el descubrimiento de un importante armamento

²⁰⁹ Tomás Moulián, *Chile actual...*, *op. cit.*, pp. 320-322. La UDI consideraba que aceptar el Acuerdo implicaba alterar la Constitución de 1980. Por su parte, el MDP se negó a suscribirlo porque consideraba que no exigía la salida inmediata de Pinochet.

²¹⁰ *Ibid.*, pp. 320-321.

²¹¹ *Ibid.*, p. 322.

²¹² *Ibid.*, pp. 324-325.

perteneciente al FPMR a principios de agosto de 1986, se reforzó aún más la idea de alejarse del PCCH y de aquellos grupos radicales. En tanto, el PCCH consideró que el agudizamiento de las medidas represivas a consecuencia de la radicalización de la lucha contra el régimen, crearía entre la población una mística de resistencia que desencadenaría más protestas.²¹³

Sin embargo, ante la falta de una adecuada correlación de fuerzas y frente al desgaste de las protestas, obligar al régimen a una negociación política se tornaba difícil. El sector de izquierda aliado a la AD y al Bloque Socialista (este último conformado por fracciones del MAPU, de la Izquierda Cristiana y de la Teología de la Liberación) hicieron circular un documento redactado por José Joaquín Brunner en el que se planteaba el fracaso de las protestas, por lo que era necesario tomar distancia del MDP y de la oposición armada, además de proponer al régimen militar una salida negociada dentro de los marcos de la Constitución de 1980. Este documento intentó débilmente proponer una negociación previa al plebiscito, pero para ese momento el régimen ya no consideraba la posibilidad de negociación alguna²¹⁴ El régimen cumpliría todos los dictados de la Constitución de 1980, la cual ordenaba un plebiscito en 1988. En realidad, lo único que logró la oposición fue el respeto a las propias reglas impuestas por el régimen en dicha Constitución. Paralelamente, la AD consideraba prioritario lograr un marco político idóneo que incluyera elecciones libres y democráticas, respeto por los derechos humanos, libertad de expresión y de asociación, además de otros aspectos para una democracia política, con el fin de mejorar en el futuro la “cuestión social” mediante elecciones.²¹⁵ Abandonaron su demanda de “democracia ahora”, por la de

²¹³ *Ibid.*, p. 335

²¹⁴ *Ibid.*, pp. 334-335

²¹⁵ Jorge G. Castañeda, *op cit*, pp. 195-200

“elecciones libres en 1988”.²¹⁶

La retractación en la principal demanda, así como la disposición para negociar de la centro-izquierda también tuvo eco en el sector empresarial, el cual a partir de la crisis económica y la explosión social permaneció alerta respecto a su papel en la conducción política y económica del país. Aunque este sector continuó prestando apoyo político al régimen militar, no estaba dispuesto a permanecer pasivo después de una crisis económica fuerte y tras haber ocurrido una situación de ingobernabilidad social. Tampoco se podía seguir alimentando con argumentos reales a los sectores radicales de la oposición. La posibilidad de un eventual fin del régimen militar y su futuro dentro de un nuevo escenario político, incluso con la llegada de la bonanza económica, hacía que los empresarios se interesaran cada vez más en un desenlace negociado.²¹⁷

El frente de negociación opositora quedó encabezado por la Concertación Política, coalición más amplia que la AD y fundada a partir de ésta el 2 de febrero de 1988, que incluía a sectores de distinta adscripción social pero mayoritariamente de las clases medias, e integrada por los partidos de centro-izquierda (PDC y PR), así como por los llamados sectores moderados del PS-Almeyda.²¹⁸ Para la Concertación Política la alternativa más viable era negociar la salida de los militares del poder sin sugerir medidas radicales que repitieran un desenlace como el sufrido por el gobierno de Allende, al proponer cambios estructurales y cancelar la negociación con el régimen.

En 1985 fue aprobada la ley sobre el Tribunal Calificador de Elecciones por la Junta

²¹⁶ Cathy Lisa Schneider, *op cit.*, p. 191.

²¹⁷ Patricio Silva, “Empresarios, neoliberalismo y transición democrática en Chile”, *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 57, núm. 4, octubre-diciembre, 1995, p. 12.

²¹⁸ Tomás Moulián, *Chile actual...*, *op. cit.*, pp. 342-343

militar como una medida previa al plebiscito, en octubre de 1986 fue promulgada la ley de inscripciones electorales y en marzo de 1987 se aprobó definitivamente la ley de partidos. En diciembre de 1987 se formó el Partido por la Democracia conformado por la izquierda que sí estaba incorporada al sistema político.²¹⁹ En julio de 1987, el grupo moderado Campaña por Elecciones Libres se transformó en la Concertación por el No, una coalición fundada para negociar los términos del plebiscito conforme lo estipulaba la Constitución de 1980.²²⁰ Una fracción del PS radical y cercana al MDP se unió al PDC para formar la Concertación por el No contra Pinochet. El PCCH, si bien no se unió a la Concertación, sí manifestó el 16 de junio de 1987 su llamado a votar por el *No* a Pinochet, abriendo paso a la convocatoria de la Izquierda Unida para sumarse al sufragio dotado de la negativa al régimen.²²¹

Grupos empresariales como la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) se propusieron defender el proyecto liberal cuyo futuro se encontraba incierto ante la posible derrota de Pinochet. Este sector pronto entró en contacto con sindicatos para discutir sobre futuros acuerdos sociales y laborales, al mismo tiempo que comenzó a entablar conversaciones con representantes de la Coalición de Partidos por el No. Tanto al interior de las fuerzas opositoras de centro-izquierda como en el seno del movimiento sindical existía un ánimo favorable para negociar con el régimen militar y las organizaciones empresariales. Esto —según explica Patricio Silva— fue producto de un largo proceso de reconversión ideológica experimentado por la democracia cristiana y, en particular, por el llamado “socialismo renovado” Así, la oposición ofreció su confianza como estrategia política a los empresarios temerosos de posibles repercusiones como las ocurridas en la experiencia

²¹⁹ *Ibid.*, pp. 337-343

²²⁰ Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, pp. 191-192.

²²¹ Tomás Moulián, *Chile actual...*, *op. cit.*, p. 343

Allendista Temían que el triunfo de la oposición en las elecciones de 1989 significara la anulación del vigente modelo económico liberal por una eventual readopción del modelo estatista y dirigista de la economía²²² Además, tenían temor del surgimiento en el país de un “clima de confrontación”, ya que el retorno a la democracia podría suponer el desborde de las demandas políticas y sociales de los sectores más radicalizados Este posible escenario no sólo hacía volver la sensación de amenaza entre los empresarios respecto de las seguridades obtenidas bajo el régimen militar, sobre todo en lo que se refiere al resguardo de la propiedad privada. Un posible clima de inestabilidad político-social también amenazaría la de tipo económico, aspecto primordial para funcionar adecuadamente como negociantes. Para eliminar estos temores, un grupo de intelectuales y académicos de sectores democristianos y de socialistas moderados vinculados con diversos institutos de estudios privados surgidos en Santiago a partir del golpe militar, se abocaron a la tarea de elaborar discursos y programas que adquirieran consenso entre los militares y los empresarios. También fue de esencial importancia el papel desempeñado por un grupo de economistas demócratacristianos bajo la dirección del prestigiado economista Alejandro Foxley, quien personalmente desplegaría esfuerzos políticos e intelectuales para eliminar la desconfianza de los empresarios ante el inminente cambio político. Durante todo 1989 y previo a las elecciones presidenciales, se realizaron pláticas entre la Concertación, los empresarios y las confederaciones de trabajadores para dejar claro que nadie estaba interesado en polarizar la situación política del país y que existía un ánimo de consenso y acuerdo tácito en torno a modelo económico.²²³

Pinochet, en alianza con la UDI y Renovación Nacional (partido surgido también en

²²² Patricio Silva, *op. cit.*, pp. 11-23.

²²³ Patricio Silva, *op. cit.*, pp. 12-15 y Cathy Lisa Schneider, *op. cit.*, p. 192.

1983 al calor de las protestas), perdió el plebiscito programado para el 5 de octubre de 1989 con el 43% de los votos (3,111, 875) frente al 54. 7% (3,959,495) de la Coalición por el No y con 2.2% de voto blanco o nulo ²²⁴

A pesar de los resultados, el proyecto de modernización liberal ya estaba asentado y asegurado. Para los estudiosos O'Donnell y Schmitter los procesos de “transición a la democracia” en los países del Cono Sur no sólo dependieron de los pactos establecidos entre las élites (civiles y militares) Consideran que éstas determinan en gran medida la apertura “y fijan importantes parámetros vinculados con la magnitud de una posible liberalización y una eventual democratización”, sin embargo, creen que los actores de la “sociedad civil” contribuyeron en la democratización de Chile.²²⁵ En cierta forma estos autores reconocen el escaso espacio de acción existente para poder incorporar las demandas de los sectores populares en los procesos de transición política, incluso de aquellos que eran más moderados

En lo fundamental, la negociación fue llevada a cabo bajo los lineamientos de la Constitución de 1980. Ésta sólo mejoró en algunos aspectos (particularmente se negoció eliminar la ley que permitía la prohibición de los partidos marxistas y la facultad presidencial para disolver la Cámara de Diputados), pero quedaron intactas las instituciones que aseguraban el veto minoritario y la imposibilidad de instaurar reformas no consensuadas en torno al sistema político y al modelo socioeconómico. La alianza de partidos reunidos en la Concertación Política no tuvo más remedio que sujetarse a la Constitución. Los líderes de ésta fueron los mediadores y amortiguadores entre el gobierno y los activistas más radicales.

²²⁴ Mary Hellen Spenner, *Soldiers*. *op. cit.*, p. 240.

²²⁵ Guillermo O'Donnell y Philippe C. Schmitter, *op. cit.*

Paradójicamente, fueron las concesiones a los moderados lo que permitió la retirada de Pinochet. Finalmente, el tipo de democracia resultante en 1989 tuvo como característica principal la continuidad del modelo económico neoliberal y el reforzamiento de prerrogativas legales que privilegian el poder de los militares sobre el de los civiles, lo cual limita los alcances de la democracia.²²⁶

Poder civil limitado, autonomía militar e inequidad social

El escaso margen de maniobra que tenía la oposición para la transición política a la democracia permitió al poder militar fortalecerse constitucionalmente gracias a una serie de prerrogativas que mantienen la total autonomía de las FFAA frente al poder civil, además de una clara injerencia en los órganos políticos del Estado. Así por ejemplo, la Constitución de 1980 creó la figura de senadores designados, nueve en total, de los cuales un lugar es para los expresidentes de la República en forma vitalicia y, por tanto, Pinochet ha tomado posesión como senador vitalicio desde el pasado 11 de marzo del actual año. El resto de los senadores, quienes permanecen en el cargo por ocho años, son también, aparte de algunos civiles, para otros miembros de las FFAA asignados de la siguiente manera: dos lugares para ex ministros de la Corte Suprema, uno para un ex Contralor General de la República, uno para un ex Comandante en Jefe del Ejército, uno para la Armada, otro para la Fuerza Aérea, uno para un ex-rector de una universidad estatal o reconocida por el Estado y el último lugar es para un ex-ministro de Estado. Estos puestos de senadores no electos, que han beneficiado especialmente a las FFAA, han asegurado la mayoría a la derecha en la cámara alta del

²²⁶ Tomás Moulián, *Chile actual...*, op. cit., pp 351 y 356, e IRELA, op. cit., p. 6.

Congreso y frustrado tres intentos de las autoridades democráticas por modernizar el sistema político²²⁷ Además, los militares poseen dos de los siete miembros del Tribunal Constitucional y los comandantes en jefe militares conforman la mitad de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional.²²⁸ Moulián, Óscar Muñoz, Carmen Celedón y el mismo O'Donnell coinciden en que el sistema de partidos chileno contiene grandes limitaciones institucionales porque las autoridades electas están sujetas a fuertes restricciones, vetos y/o formas de exclusión en ciertas esferas políticas, aplicadas por legisladores no elegidos como son los pertenecientes a las FFAA. Los militares establecieron prerrogativas, formales e informales, que les permiten ejercer un efectivo control sobre procedimientos internos de gestión militar, desempeñarse en áreas extramilitares del aparato del Estado, o incluso de estructurar las relaciones entre el Estado y la sociedad política o la civil²²⁹

Esto se traduce en un poder civil constantemente puesto en duda por los militares mostrando una latente situación de conflicto con el poder civil. Los poderes estructurales de los militares otorgados por las prerrogativas, sitúan a la democracia en una posición vulnerable. El gobierno de la Concertación no ha tenido serios problemas en este tema y daga con los militares.²³⁰ Sin embargo, Genaro Arriagada -asesor del presidente Eduardo Frei y dirigente del PDC- advirtió que para el ejecutivo “el perfeccionamiento de la Constitución es

²²⁷ En abril de 1996 Eduardo Frei presentó una iniciativa de reformas tendientes a eliminar los senadores designados, así como cambios al Consejo Nacional de Seguridad y al Tribunal Constitucional; sin embargo la mayoría de derecha triunfó debido a su sobrerrepresentación en la Cámara Alta Enrique Gutiérrez corresponsal de *La jornada*, “Chile: rechaza el Senado propuestas de reformas constitucionales”, 2 de abril de 1996, p. 53

²²⁸ *Constitución Política de la República de Chile*, México, UNAM-FCE-, 1994, p. 30 y Raymundo Riva Palacio, “La jaula de hierro” (entrevista a Tomás Mouhán), *Reforma*, 14 de octubre de 1996, p. 26A

²²⁹ Tomás Mouhán, *Chile actual*, op. cit., p. 362-364, Guillermo O'Donnell, “Ilusiones...”, op. cit., p. 72 y Óscar Muñoz Gomá y Carmen Celedón, “Chile en transición: estrategia económica y política”, *Colección de Estudios CIEPLAN*, núm. 37, junio, 1993, p. 122

²³⁰ Raymundo Riva Palacio, “La jaula .”, op. cit., p. 26A.

una lucha permanente”. Los militares, respaldados por aliados de la sociedad civil y política, apelan a todas sus prerrogativas para promover una serie de desenlaces políticos que los dirigentes de la Concertación han tenido que aceptar si quieren evitar, si no un golpe de Estado, si una crisis política que pudiera arriesgar la estabilidad de su gobierno. De ahí que la Concertación esté librando una lucha constante y prolongada con el fin de reducir las prerrogativas así como las posibilidades de conflicto.²³¹ En 1991, Arriagada reconocía que el sistema político chileno no era ni parlamentario ni presidencial porque tenía un presidente y un parlamento débiles.²³²

Chile posee un sistema de partidos binominal que favorece la constitución de alianzas entre partidos políticos y penaliza a los pequeños partidos incapaces de formar coaliciones con otros. En ese sentido, este sistema obliga a sacrificar los principios ideológicos y políticos en favor de la coalición, al mismo tiempo que es altamente excluyente y tiende a magnificar la presencia de la derecha en el Congreso. Debido a que las fuerzas dominantes de derecha en el Congreso se sabían electoralmente minoritarias, construyeron una institucionalidad favorable a ellas mismas en detrimento de una mayoría electoral. Esto es a causa del actual sistema electoral, el cual “permite que una fuerza que tenga en todos los distritos el 34% de los sufragios, obtenga el 50% de las curules. A esta modalidad se le llama ‘sistema binominal’, que obliga a construir dos partidos electorales, aunque los partidos reales son al menos ocho”²³³

²³¹ Alfred Stephan, “Las prerrogativas de los militares en los nuevos regímenes democráticos”, *Desarrollo Económico*, vol. 27, núm. 108, enero-marzo, 1988, p. 483

²³² Raymundo Riva Palacio, “La jaula...”, *op. cit.*, p. 26A.

²³³ Para una explicación amplia del sistema de partidos en Chile, veáanse Peter Siavelis y Arturo Valenzuela, “Electoral Engineering and Democratic Stability: The Legacy of Authoritarian Rule in Chile”, en Arend Lijphart y Carlos H. Waisman (eds.), *Institutional design in new democracies*, Westview Press, Colorado, 1996, pp. 77-99, e IRELA, *op. cit.*, p. 14.

Esto ha favorecido un sistema electoral que sobrerrepresenta a los militares y a la UDI en los resultados electorales, distorsionando de antemano la expresión de la voluntad popular en las urnas²³⁴

En el parlamento, los representantes incondicionales a Pinochet pueden bloquear o aprobar cualquier iniciativa de ley; si por algún motivo se aprobara alguna que fuera contraria al régimen, sería inmediatamente revocada en el Tribunal Constitucional, ya que éste tiene capacidad de veto. Por esta razón la democracia chilena se encuentra restringida, al existir un poder *de facto* que sigue encabezando, aunque no de manera directa pero sí infalible, el general Augusto Pinochet.²³⁵

Al mismo tiempo, se comienza a percibir una cierta “desafección ciudadana”, es decir, empiezan a aparecer hábitos abstencionistas entre los ciudadanos. Por esto, el voto nulo o blanco constituye de alguna forma una posición crítica que habría de explorarse más a profundidad, y no debe pasar inadvertido.²³⁶ Las manifestaciones de voto nulo o blanco cada vez se incrementan más (en Chile, el voto es obligatorio y quien no asista a sufragar se hace acreedor a una multa de cien dólares o a la cárcel) y demuestra, entre otras explicaciones, la falta de opciones políticas. Por ejemplo, en las elecciones municipales de octubre de 1996 este tipo de voto alcanzó entre 10 y 15%. Para las elecciones parlamentarias de diciembre de 1997, hubo un auge de votos nulos y blancos, que sumados a aproximadamente un millón de jóvenes no registrados para sufragar pero en edad de hacerlo arrojan un porcentaje cercano a la tercera parte del electorado que se mantuvo al margen del proceso²³⁷

²³⁴ Tomás Moulián, “Chile, las condiciones..”, *op. cit.*, Óscar Muñoz y Carmen Celedón, *op. cit.*, p. 122; y Guillermo O’Donnell, “Ilusiones..”, *op. cit.*, p. 72.

²³⁵ Tomás Moulián, “Chile: las condiciones..”, *op. cit.*, p. 8.

²³⁶ Norbert Lechner, *op. cit.*, pp. 69-70.

²³⁷ *Reforma*, “Votan chilenos en municipales”, domingo 27 de octubre, 1996, p. 37A, y *La jornada*, 27 de octubre, 1996, p. 52, *La nación line* (vía internet), “Frei hará cambios en el gabinete”, lunes 15 de diciembre,

La participación política, la social, y la desafección ciudadana

Con la reemergencia de los partidos políticos en 1980 muchas organizaciones sociales fueron reabsorbidas por aquéllos, consolidándose este proceso a mediados de esa década, justamente en el periodo de la negociación política entre quienes participaron en las protestas y el gobierno militar. Esto contribuyó a diluir o restarle protagonismo a la organización social por dos razones:

1) La participación política se redujo y alineó a las redes sociales y de masas en la política partidaria. Los partidos políticos comenzaron a recibir apoyo económico institucional para reorganizarse como tales y desarrollar sus actividades políticas.²³⁸ En tanto, las organizaciones sociales resultaron disminuidas ante el escaso apoyo económico con que contaban. Esto se agravaba aún más porque durante la dictadura diversas organizaciones tuvieron apoyo externo de organismos internacionales, pero después se los retiraron debido a que la “transición a la democracia” suponía innecesario el financiamiento

2) Desde el primer cuarto de siglo, Chile logró canalizar los conflictos por medio de las instituciones, con lo que se asentó en la cultura chilena la afirmación de Patricio Meller sobre que los chilenos “se reconocen entre sí públicamente a través de los partidos”.²³⁹ Así, como una continuación de la cultura política, el régimen militar creó las condiciones para la articulación y la canalización de los intereses de los distintos grupos sociales, mediante partidos supeditados a un sistema electoral con las propias reglas del gobierno. Los partidos

1997.

²³⁸ Cathy Lisa Schneider. *op. cit.*

²³⁹ Patricio Meller, *op. cit.*, p. 163

políticos se convirtieron en un medio de conducción, y al mismo tiempo, en otro de control del conflicto social. Esas cualidades de canalización y regulación del conflicto permitieron negociar un acuerdo con los militares para crear un clima favorable a la transición hacia la democracia liberal.²⁴⁰

La rehabilitación de todo el andamiaje electoral trajo como resultado un tipo de participación política que privilegia la acción ciudadana, particularmente la relacionada con lo electoral.²⁴¹ Esto podría parecer un elemento de “modernización” de la cultura política chilena y de consolidación del proceso democrático, mientras la vía electoral parece ser el medio idóneo por el cual los chilenos dirimen sus conflictos.

Sin embargo, el privilegio que hoy se le otorga al “ciudadano” en la democracia chilena “reviste un carácter integrador de intereses”, particularmente aquéllos ubicados en torno al modelo económico neoliberal. En cambio, cobran menor importancia las reivindicaciones de naturaleza sectorial o de grupos particulares.²⁴² Al respecto, el tema de los derechos humanos resulta un ejemplo aleccionador. Por ejemplo, diversos grupos defensores de los derechos humanos que surgieron durante la dictadura se ven disminuidos en sus reclamos de justicia (castigo a los culpables por violaciones a los derechos humanos) al no poder ejercer una fuerza contundente contra la impunidad y la injusticia porque, tanto los partidos políticos como el gobierno democrático liberal, en aras de la “reconciliación nacional” y sobre todo de la “estabilidad”, han tenido que someterse al designio de los militares.

²⁴⁰ Tomás Moulán, “Chile: las condiciones...”, *op. cit.*, p. 4.

²⁴¹ Hugo Zemelman Merino, “La democracia limitada y los excesos teóricos”, en Pablo González Casanova y Marcos Roitman Rosenmann (coords.), *La democracia en América Latina. Actualidad y perspectivas*, Madrid, Universidad Complutense-CIHH/UNAM, 1992, p. 95.

²⁴² *Ibid.*, p. 99-100

Es aquí donde los partidos desempeñan un papel como conductores del conflicto social. La clase política partidista —incluidos los partidos denominados obreros o populares—ha tenido que compartir los mismos intereses de conservación y de repartición del poder tal como lo diseñó el régimen militar en la Constitución de 1980.²⁴³ Esto limita las posibilidades de expresión social toda vez que están obligadas a mantenerse dentro del consenso, el cual podría, por una parte, contribuir a generar grandes colectivos sociales, y por otra, estrechar el ámbito donde es posible ejercer presiones para debilitar la capacidad de cuestionamiento al orden, y con ello fortalecer su estabilidad.²⁴⁴

Es posible advertir que los partidos sólo fomentan la participación de tipo “ciudadana” y concretamente la electoral, lo que ha contribuido a desplazar u opacar otras formas de organización social. En lugar de aprovechar las contribuciones que el amplio espectro de organizaciones sociales puede ofrecer, los partidos han optado por marginarlas al no recuperar sus demandas para la formulación de propuestas alternativas mayores o de largo plazo. Los partidos políticos, considerados históricamente canales tradicionales de participación política, se han convertido en instrumentos para negociar posiciones de poder de tipo institucional.

El éxito de la democracia chilena actual radica en su capacidad para sistemáticamente desinteresar al individuo de la participación social, restándole protagonismo en función de su participación en determinadas dinámicas colectivas. El régimen actual fustiga las movilizaciones como desórdenes y presenta la política como “parloteo intrascendente” y corrupción.²⁴⁵

²⁴³ Tomás Moulián, “Chile: las condiciones . . .”, *op cit.*, p. 4.

²⁴⁴ Hugo Zemelman Merino, *op cit.*, p. 101.

²⁴⁵ Hugo Zemelman Merino, *op cit.*, pp. 101-102; Tomás Moulián, “Chile las condiciones. . .”, *op cit.*, p. 101

La otra cara del jaguar: desigualdad social y crecimiento económico

“Chile, llamado el ‘jaguar’ por el símil de desarrollo con los ‘tigres’ asiáticos, es para muchos en América Latina, con su modelo liberal ortodoxo y su pujanza económica, un modelo a seguir”.²⁴⁶ Sin embargo, a pesar del contexto de éxito macroeconómico, los beneficios no se han difundido a toda la población. De acuerdo con el informe del Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA) en el que se recuperan cifras del Banco Mundial, en Chile se presenta uno de los patrones de distribución de ingresos más desiguales de América Latina, en 1995, el sector más pobre de la población, el cual abarca 20% de la totalidad de ésta, recibió 3.5% del ingreso nacional, mientras que el más acomodado (20% del total de la población) percibió 61%. De acuerdo con el IRELA, en Chile prevalece un modelo social de dos niveles: uno que disfruta de la economía de mercado y de la provisión privada de servicios sociales, y otro que permanece excluido. Pese al logro de un alto crecimiento con desempleo moderado, el ritmo de reducción de la pobreza ha venido disminuyendo paulatinamente y la distribución de ingresos es más desigual que en 1970.²⁴⁷ Aunque con salarios bajos, el aumento del empleo ha resultado un buen paliativo para los sectores medios de la población, así como su integración por la vía del consumo mediante la masificación de las posibilidades de crédito.²⁴⁸

A pesar de haber sido caracterizado por ser una sociedad mesocrática, en la

363.

²⁴⁶ Raymundo Riva Palacio, “La ilusión neoliberal”, *Reforma*, domingo 13 de octubre, 1996, p. 22A.

²⁴⁷ IRELA, *op. cit.*, p. 26-27.

²⁴⁸ Tomás Moulián, “Chile: las condiciones..”, *op. cit.* p. 9.

actualidad Chile parece tender más al adelgazamiento de su sector medio. Esta persistente desigualdad no sólo amenaza la estabilidad económica, sino también hace peligrar la estabilidad social, a causa de la frustración de expectativas de diversos sectores creadas a partir de la difusión hecha por los sectores oficiales del gobierno sobre el éxito del modelo económico.²⁴⁹ La distribución de la riqueza es un problema irresuelto que la democracia liberal chilena ha dejado en manos del mercado.

Si es cierto que la pobreza no es un factor que conduce automáticamente hacia fuertes descontentos de carácter político, de cualquier modo los sucesivos gobiernos en Chile tendrán que atender este problema, el cual se convierte en un contexto favorable para la ingobernabilidad social.

²⁴⁹ IRELA, *op cit*, p. 26.

Conclusiones

Comprender la violencia es una tarea compleja porque comúnmente se tiende a interpretarla desde una perspectiva ética o legal. Más allá de que la violencia resulte un acto deleznable visto desde cualquier conjunto de valores o que sea “ilegal” en cualquier Estado de Derecho, en este trabajo se ofrece una reflexión general sobre las causas históricas y sociales que dieron lugar a lo que se denominó violencia política de los sectores populares durante el periodo de las protestas nacionales ocurridas en la década de los ochenta en Chile. En el tercer capítulo se observó que el comportamiento histórico-político del movimiento popular de oposición durante la dictadura se presentó predominantemente en formas violentas de acción política localizadas en la capital de Santiago. En efecto, no hubo protesta en la que no surgiera la violencia política en algunos de sus diversos grados y modos, resultando de esto una fuerte represión estatal dirigida particularmente hacia las poblaciones.

¿En qué medida el afianzamiento de la democracia, a partir de la negociación política de 1989, ha logrado disminuir el grado de violencia política como forma de dirimir conflictos sociales? ¿Se está edificando un proyecto democrático de largo plazo que dé lugar a una paz social duradera con justicia y democracia? ¿Había detrás del movimiento de *vpp* una alternativa a la hegemonía dominante o sólo esta conformado por sujetos puramente anónimos?

Para Gabriel Salazar, los hechos de *vpp* ocurridos a lo largo de dieciséis años de la historia reciente de Chile son el equivalente a la sedimentación de una cultura o mentalidad de violencia política, no sólo del movimiento popular sino también de otros actores o movimientos —como se describe en el segundo capítulo— relacionados con la acción represiva del Estado. La capacidad de la democracia liberal constituida en 1980 y reffrendada en 1989-1990 para anular esa cultura instalada, dependerá de su eficiencia para satisfacer las aspiraciones políticas populares desarrolladas a la sombra de su historia. La cuestión concreta es hasta qué punto el eventual reequilibrio histórico se hará con o sin la utilización de los medios y métodos de violencia política incorporados al parecer orgánicamente en la cultura popular, encarnada bajo las duras lecciones de los últimos veinte años.²⁵⁰ Esto nos conduce a la siguiente pregunta ¿existen bases para el optimismo tan ampliamente difundido por los sectores oficiales del régimen sobre la democracia y la estabilidad en Chile?

A partir de la revisión histórica de la *vpp* desarrollada en esta tesis, se puede considerar que aunque el sistema político actual posee fuentes de inestabilidad política y económica latentes, no serán suficientes para que en el corto plazo surjan brotes de violencia política sistemática como la que caracterizó al periodo de las protestas. Esto a causa de la lección impuesta por la dictadura, aún muy cercana y presente en la memoria del país, y de la conciencia y subconciencia desarrollada por la generación que creció bajo esa hegemonía, y en la cual permanecen las consecuencias de la represión política como factor de desmovilización. Además, existen mecanismos políticos de control social dispuestos por el sistema para disuadir al máximo el surgimiento de un conflicto político capaz de vulnerar a la actual hegemonía. Las acciones de grupos armados como las efectuadas por el FPMR, o los

²⁵⁰ Gabriel Salazar, *Violencia política*, *op cit.*, p. 143.

enfrentamientos violentos de los sectores mineros para reivindicar demandas particulares seguirán apareciendo de forma aislada sin carácter masivo.

Un sistema de representación con altas prerrogativas para los militares; una estructura partidaria “binominal” que sobrerrepresenta a la derecha política en el Congreso; clases media y alta coincidentes con el proyecto político; una democracia que tiende generalmente a desinteresar al individuo por lo político y la acción colectiva, alentando tan sólo la participación electoral; así como la falta de alternativas políticas por parte de la oposición, son elementos que favorecen el consenso, la obediencia y la conformidad con el sistema político prevaleciente.

No obstante, los altos índices de violencia social de tipo criminal en el actual Chile constituyen la manifestación más clara de un modelo que no ha podido satisfacer plenamente las demandas sobre democracia y equidad social. La sistemática violencia urbana que asola a las ciudades chilenas pone en riesgo la gobernabilidad social pero no pone en peligro la gobernabilidad política, a menos que estos problemas alcancen altos grados de politización.²⁵¹

La disminución de la violencia política como forma de dirimir los conflictos plantea el análisis de las luchas sociales y políticas democráticas a lo largo de la historia chilena, con el objetivo de lograr una democracia que encarne los valores constitutivos de la coexistencia entre individuos y grupos; es decir, los conflictos se resuelven sin recurrir a la fuerza, de manera que el vencedor no es quien tiene más fortaleza física, sino quien posee una mayor

²⁵¹ Isaac Caro, “Seguridad ciudadana en Chile. Enfoques, causas y expresiones”, ponencia presentada en el Coloquio Componentes y Valor Social de la Seguridad Ciudadana, ciudad de México, 25, 26 y 27 de mayo, 1994

capacidad de persuasión mediante un proyecto político ²⁵²

A pesar de que el movimiento de violencia política de las protestas no pudo articular un proyecto alternativo a nivel macrosocial, su capacidad de crear opciones de proyectos políticos se sustentaba en las formas organizacionales desarrolladas en los ámbitos barrial, laboral (centros de trabajo) y religioso (iglesias), en los que la gente se movía autónomamente y partir de sus necesidades concretas creaban redes de poder para satisfacerlas. Es esta capacidad para desenvolverse política y socialmente lo que permite advertir que no se trata de actores o sujetos anónimos inmersos en una situación que por su situación marginal tienden a ser violentos, sino que el movimiento de *vpp* ocurrido durante las protestas —heredero de las más importantes tradiciones populares de lucha democrática— surgió ante la falta de un proyecto constitucional coincidente con los intereses de sus protagonistas, razón por la cual actuaron sobre el filo de la ley. Este movimiento no sólo significó violencia, sino que —como se observó en el tercer capítulo— está asociado a opciones político-ideológicas asentadas en la cultura política chilena a lo largo de su historia. La lucha por el federalismo en el siglo XIX; para conseguir mejores condiciones laborales a principios del mismo, y la demanda de vivienda a mediados del siglo XX, así como la reivindicación de los derechos humanos durante la dictadura militar pinochetista, constituyen algunos ejemplos de las causas por las que surge el movimiento de violencia popular y de su significado político.

También del análisis histórico de la violencia popular se desprende que recurrir a ésta no siempre ha conducido a cambios de renovación social, sino que tan sólo ha funcionado como una forma de autodefensa, acarreando derrotas parciales que son importantes revisar

²⁵² Hugo Zemelman Merino, *op. cit.*, pp 91-92.

para el análisis de las futuras alternativas políticas

La violencia ejercida por los sectores populares durante las protestas no condujo a un triunfo en la medida que el modelo de democracia chileno surgido durante el proceso de transición de 1989 permanece prisionero de la herencia autoritaria del régimen militar, manteniendo con ello un sistema que sólo permite la alternancia en la administración de poder y no cambios estructurales del mismo.²⁵³ La Concertación, ante el escaso margen de negociación, se limitó a pactar un programa “realista” y “viable” que aunque no abarcaba las causas de los problemas, modificaba por lo menos los efectos²⁵⁴, manteniendo intacto el proyecto del régimen militar

La democracia de corte liberal negociada en 1989 permitió que los militares abandonaran el poder pero resultó supeditada, en lo fundamental, al proyecto de modernización capitalista impulsado por las élites civiles y militares de derecha. En este modelo, el libre mercado y el individuo como formas de organización social son los fundamentos de la economía y la política.

La democracia requiere de un cierto orden para asegurar el juego entre las fuerzas políticas. Esto resulta relevante en la sociedad chilena, caracterizada por la búsqueda constante de la estabilidad y el orden. Sin embargo, en la actualidad uno de los problemas teóricos y políticos que se plantean es la concepción prevaleciente de una estabilidad impulsora del camino hacia el “proyecto dominante”, el cual no concibe el desarrollo de fuerzas autónomas que puedan influir en la dirección de las transformaciones de la democracia. Justamente lo que más se admira en el modelo chileno es la enorme y eficiente

²⁵³ *Ibid.*, pp. 92-95.

²⁵⁴ Jorge Castañeda, *op. cit.*, p. 509-510. De acuerdo con este autor, Chile es el mejor ejemplo en el que la centro-izquierda ha consolidado un proyecto “realista” en su transición democrática.

capacidad que han desarrollado las élites dirigentes en la conducción del proceso que reacomodó a la democracia y el capitalismo²⁵⁵.

Las posibilidades de desarrollo de otras alternativas políticas están prácticamente cerradas ya sea por limitaciones del movimiento popular, como por la estrechez de sistema político para el desarrollo de otras fuerzas distintas a las dominantes. Los movimientos sociales en Chile, a diferencia del periodo de las protestas en el cual convergieron en torno a un problema común como era la lucha contra la dictadura, actualmente presentan limitaciones en sus demandas y actúan sólo en función de reivindicaciones parciales lo que las hace perder fuerza y potencialidad. En la situación presente no existen actores sociales que ofrezcan una visión diferente del futuro. Existen, eso sí, fuerzas y/o movimientos que expresan el descontento y son depositarios de la memoria heredada de las grandes tradiciones de lucha y que también expresan la pluralidad de demandas inconsultas y no resueltas.

Una democracia que margina el papel político de los sectores populares y salvaguarda los intereses de las élites económicas y las políticas, podrá conservar la gobernabilidad y evitar la violencia por momentos, pero la solución a la inestabilidad seguirá aplazándose poniendo en riesgo la gobernabilidad. A los sectores populares se les ha tildado de fuerzas anómicas y desestabilizadoras, pero en realidad pueden constituir “procesos o proyectos sociales de estabilización fundamental”.²⁵⁶

La democracia no puede obedecer al pensamiento conservador que la señala como “protegida”, porque si así fuera ésta se alejaría de sus propias tensiones: “la democracia es el riesgo mismo de la transformación social, por cuanto sin ese riesgo solamente tendremos

²⁵⁵ Tomás Moulián, “Chile: las condiciones. ”, *op. cit.*, p. 11.

²⁵⁶ Gabriel Salazar, *Violencia Política.*, *op. cit.*, p. 73.

un orden democrático que se confunde con una sola voz sin existir una democracia plural”²⁵⁷

La paradoja que subyace detrás del éxito chileno es que la democracia deja irresueltos el problema de la equidad y pospone el desarrollo en el plano político-social de fuerzas autónomas diferentes del proyecto dominante.

El enfoque legalista con que a menudo se trata de explicar el problema de la *vpp* impide el desarrollo de las bases para la creación en el largo plazo de una verdadera estabilidad social con democracia. En este contexto se ha desenvuelto la violencia política ejercida tanto del Estado hacia los movimientos, como de éstos hacia aquél. Cuando la leyes tienen un bajo índice de legitimidad social, es decir, cuando son funcionales a ciertos sectores de la sociedad y carecen de sustento histórico-social, no son suficientes para salvaguardar el orden en el largo plazo.

Mientras tanto, aún queda pendiente la formulación de una propuesta alternativa que haga posible la reducción de la violencia: ¿cómo hacer viable en el desarrollo de la sociedad la libertad y la justicia?

²⁵⁷ Hugo Zemelman Merino, *op. cit.*, pp. 99-101.

ANEXO

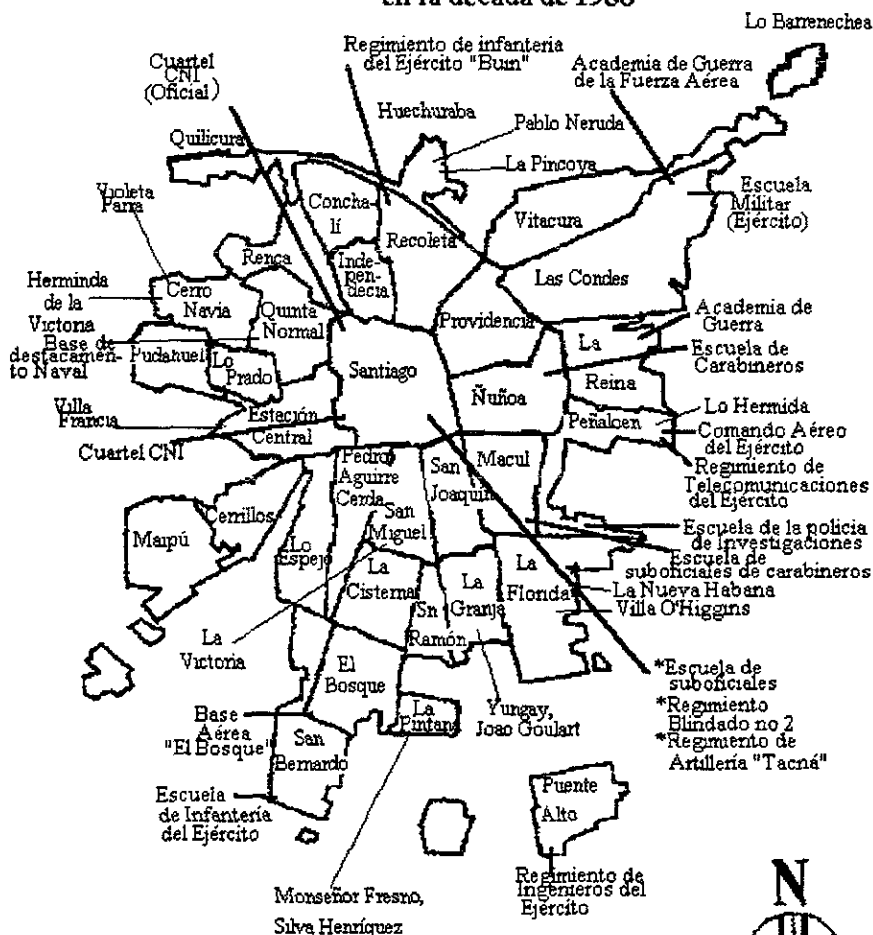
Hechos de violencia política popular (1947-1987).

Frecuencias anuales y por ciclo presidencial

	Ciclos						Promedio (ciclos)
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	
<i>Presidentes</i>							
G. González V. (1947-1952)	13	5	15	16	12	14	12.5
C. Ibañez del C. (1953-1958)	13	4	11	15	8	13	10.6
J. Alessandri R. (1959-1964)	6	14	25	19	30	18	18.6
E. Frei M. (1965-1970)	23	17	34	21	54	40	31.5
S. Allende G. (1971-1973)	63	41	85	-	-	-	63.0
A. Pinochet U. (1974-1979)	10	13	3	16	14	49	17.5
A. Pinochet U. (1980-1985)	32	49	13	61	36	55	41.0
A. Pinochet U. (1986-1987)	58	39	-	-	-	-	48.5

Fuente: Gabriel Salazar, *Violencia política...*, op. cit., p. 132

Comunas, poblaciones e instalaciones militares y de seguridad en Santiago, en la década de 1980



Fuente: Para el caso de las zonas militares, Compañía de Teléfonos de Chile (CTC) Guía de Teléfonos de la Región Metropolitana, 1989

Siglas y Abreviaturas

Asich	Acción Sindical de Chile
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
CNI	Central Nacional de Informaciones
Corfo	Corporación de Fomento de la Producción
CPC	Confederación de la Producción y el Comercio
CRAV	Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar
DIFA	Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea
Dina	Dirección de Inteligencia Nacional
FOCH	Federación Obrera de Chile
FP	Frente Popular
FPMR	Frente Patriótico Manuel Rodríguez
Frap	Frente de Acción Popular
MAPU	Movimiento de Acción Popular Unitaria
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionario
MUN	Movimiento de Unidad Nacional
PCCH	Partido Comunista Chileno
PD	Partido Demócrata
PDC	Partido Demócrata Cristiano
PN	Partido Nacional
POS	Partido Obrero Socialista
PR	Partido Radical

Proden	Proyecto Democrático Nacional
PS	Partido Socialista
PST	Partido Socialista de los Trabajadores
RN	Renovación Nacional
Sendet	Secretaría Nacional de Detenidos
Sicar	Servicio de Inteligencia de Carabineros
SIFA	Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea
SIN	Servicio de Inteligencia Naval
UDI	Unión Democrática Independiente
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UP	Unidad Popular

Bibliografía

- Arriagada, Genaro y Manuel Antonio Garretón (1978), “América Latina a la hora de las doctrinas de la seguridad nacional”, en María Angélica Pérez (ed.), *Las fuerzas armadas en la sociedad civil*, Santiago de Chile, Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Compañía de Jesús
- Bobbio, Norberto y Nicola Matteucci (1986), *Diccionario de política*, vol. 2, México, Siglo XXI.
- Campero, Guillermo (1989), “El sindicalismo chileno en el régimen militar, 1973-1987”, en Rigoberto García (comp), *Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Caro, Isaac (1994), “Seguridad ciudadana en Chile. Enfoques, causas y expresiones”, ponencia presentada en el coloquio Componentes y Valor Social de la Seguridad Ciudadana, ciudad de México, 25, 26 y 27 de mayo.
- Castañeda, Jorge G. (1993), *La utopía desarmada*, México, Joaquín Mortiz.
- Cavallo Castro, Ascanio, Manuel Salazar Salvo y Óscar Sepúlveda Pacheco (1990), *La historia oculta del régimen militar*, México, Diana.
- Comisión Chilena de Derechos Humanos-Centro Ideas (1991), *Síntesis del informe de la comisión de verdad y reconciliación en Chile*, Santiago de Chile, Comisión Chilena de Derechos Humanos-Centro Ideas.
- Comisión Sudamericana de Paz (1993), *El sentido de una tarea*, Santiago de Chile, Comisión Sudamericana de Paz.
- Constitución Política de la República de Chile*, México, FCE-UNAM, 1994.
- De Arteagabeitia, Rodrigo (1991), “1973: el año que empezó la guerra sucia”, *APSI*, año XV, núm. 377, febrero.
- De la Maza, Gonzalo y Mario Garcés (1985), *La explosión de las mayorías. Protesta Nacional, 1983-1984*, Santiago de Chile, ECO
- De Vylder, Stefan (1989), “Chile 1973-1987: los vaivenes de un modelo”, en Rigoberto García (comp), *Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987*, México, Fondo de Cultura Económica

- Eckstein, Susan (1989), "Power and Popular Protest in Latin American", en Susan Eckstein (ed.), *Power and Popular Protest in Latin American Social Movements*, Berkeley, University of California Press.
- Garcés, Mario y Pedro Milos (1988), *Las centrales unitarias en la historia del sindicalismo chileno*, Santiago de Chile, ECO.
- Garretón, Manuel Antonio (1989), "Popular Mobilization and the military regime in Chile: The complexities of the invisible transition", en Susan Eckstein (ed.), *Power and Popular Protest in Latin American Social Movements*, Berkeley, University of California Press.
- (1989), *The Chilean political process*, Cambridge, University of Cambridge Press, trad. de Sharon Kellum.
- Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (1997), *Chile: ¿una experiencia exitosa en América Latina?*, Madrid, IRELA, dossier núm. 60.
- Kowalewski, David (1991), "Periphery revolutions in world-system perspective, 1821-1985", *Comparative political studies*, vol. 24, no. 1, abril, pp. 76-99
- Lechner, Norbert (1993), "Las sombras del mañana", *Colección de Estudios CIEPLAN*, núm. 37, junio, pp. 69-75.
- Long Norman y Bryan Roberts, "Las estructuras agrarias de América Latina, 1930-1990", en Leslie Bethell (Ed.) *Historia de América Latina*, vol 11, España, Cambridge University Press, 1997.
- Lundahl, Mats (1989), "El camino a la dictadura: desarrollo político y económico en Chile, 1952-1973", en Rigoberto García (comp), *Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987*, México, Fondo de Cultura Económica
- Martínez, Javier y Eugenio Tironi (1985), *Las clases sociales en Chile, cambio y estratificación, 1970-1980*, Santiago de Chile, Sur.
- Meller, Patricio (1996), *Un siglo de economía política chilena (1890-1990)*, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello.
- Moore, Barrington (1989), *La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión*, México, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, trad. Sara Sefchovich.

- Moulián, Tomás (1997), *Chile actual: anatomía de un mito*, Santiago de Chile, Arcis Universidad.
- (1995), “Chile, las condiciones de la democracia”, *Nueva Sociedad*, núm. 140, noviembre-diciembre, pp 4-11.
- Muñoz Gomá, Óscar (1986), *Chile y su industrialización. Pasado, crisis y opciones*, Santiago de Chile, CIEPLAN
- y Carmen Celedón (1993), “Chile en transición: estrategia económica y política”, *Colección de Estudios CIEPLAN*, núm. 37, junio.
- O'Donnell, Guillermo (1996), “Ilusiones sobre la consolidación”, *Nueva Sociedad*, núm. 144, junio-agosto, pp. 71-89
- y Philippe C. Schmitter (1989), *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, vol. 4, Buenos Aires, Paidós.
- Palomares Palomares, Javier (1994), Presentación de la base de datos Teslat, México, Colegio de Estudios Latinoamericanos/Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
- Petras, James y Steve Vieux (1995), “El pragmatismo desarmado”, *Problemas del desarrollo*, vol 26, núm. 103, octubre-diciembre, pp. 167-185.
- Richards, Ben (1996) “Proprietors not proletarians: the politics of housing subsidies under military rule in Chile” en Will Fowler (ed.), *Authoritarianism in Latin America since independence*, London, Greenwood Press.
- Riva Palacio, Raymundo (1996), “La jaula de hierro”, *Reforma*, lunes 14 de octubre, p. 26A.
- (1996), “La ilusión neoliberal”, *Reforma*, domingo 13 de octubre, p. 22A.
- Ruiz Contardo, Eduardo (1992), “Chile: ¿un camino ‘democrático’ antipopular?”, en Pablo González Casanova y Marcos Roitman Rosenmann (coords.), *La democracia en América Latina. Actualidad y perspectivas*, Madrid, Universidad Complutense-CIIF/UNAM.

- , Gabriel (1994), "Construcción del Estado en Chile. la historia reversa de la legitimidad", *Proposiciones*, núm. 24, agosto, pp. 92-110.
- (1991), "Empresariado popular e industrialización. la guerrilla de los mercaderes (1830-1885)", *Proposiciones*, núm. 20, pp 180-231
- (1990), *Violencia política popular en las 'grandes alamedas' 1947-1987*, Santiago de Chile, Sur
- (1989), *Coyunturas políticas importantes en la historia de Chile*, Documento de Trabajo, Programa urbano, Santiago de Chile, Impresiones Faundes
- Ineider, Cathy Lisa (1995), *Shantytown protests in Pinochet's Chile*, Philadelphia, Temple University Press.
- Javelis, Peter y Arturo Valenzuela (1996), "Electoral engineering and democratic stability The legacy of authoritarian rule in Chile", en Arend Lijphart y Carlos H. Waisman (eds.), *Institutional design in new democracies*, Colorado, Westview Press
- Silva, Patricio (1995), "Empresarios, neoliberalismo y transición democrática en Chile", *Revista Mexicana de Sociología*, vol 57, núm. 4, octubre-diciembre, pp 11-23.
- Spooner, Mary Helen (1994), *Soldiers in a narrow land. The Pinochet regime in Chile*, California, University of California Press.
- Stephan, Alfred (1988), "Las prerrogativas de los militares en los nuevos regímenes democráticos", *Desarrollo Económico*, vol. 27, núm. 108, enero-marzo, pp 479-504.
- Tironi, Eugenio (1987), "Pobladores e integración social", en Eugenio Tironi, José Bengoa y Javier Martínez (eds.), *Proposiciones* núm. 14. *Marginalidad, movimientos sociales y democracia*, Santiago de Chile
- Valenzuela, Arturo y Samuel Valenzuela (1983), "Los orígenes de la democracia, reflexiones teóricas sobre el caso chileno", *Estudios Públicos*, núm. 12, primavera, pp. 5-39
- Valenzuela, Eduardo (1984), *La rebelión de los jóvenes. Un estudio sobre anomia social*, Santiago de Chile, Sur, col. Estudios Sociales.
- Valenzuela Samuel J. (1995), *The Origins and Transformations of the Chilean Party System*, Oxford, Kellogg Institute-Department of Sociology/University of Notre Dame, mimeo.
- Vilas, Carlos M. (1997), "De ambulancias, bomberos y policías: la política social del

- liberalismo”, *Desarrollo Económico*, vol. 36, núm. 144, enero-marzo, pp. 931-951.
- aca Z., Hernán (1994), “Democracia liberal en Chile: una perspectiva histórica”, *Proposiciones*, núm. 24, agosto, pp. 89-91.
- rossi, Francisco (1990), *Resistencia campesina en Chile y en México*, Santiago de Chile, Consejo de Educación de Adultos de América Latina
- a, Francisco (1985), “Crisis y movilización en Chile”, *Foro Internacional*, vol. XXVI, núm. 2, octubre-diciembre, pp. 214-228
- lin, Maurice (1984), *The civil wars in Chile (or the bourgeois revolutions that never were)*, New Jersey, Princenton University Press.
- melman Merino, Hugo (1992), “La democracia limitada y los excesos teóricos”, en Pablo González Casanova y Marcos Roitman Rosenmann (coords.), *La democracia en América Latina. Actualidad y perspectivas*, Madrid, Universidad Complutense-CIIH/UNAM.

Hemerografía/Periódicos

- Enrique Gutiérrez, (1996), “Chile: rechaza el senado propuestas de reformas constitucionales”, *La jornada*, 2 de abril de 1996, p. 53.
- Friedlan, Jonathan (1996), “El éxito chileno levanta ampollas en otros países de América Latina”, *Reforma*, 3 de octubre, p. 36-A.
- La época* (1998), “Muertos dos policías y un frentista en tiroteo”, viernes 9 de enero, y (1997), “Realizan operativos en comunidades mapuches”, lunes 8 de diciembre.
- La jornada* (1997), 5 de enero, y (1996), 6 de junio y 27 de octubre, p. 52.
- La nación line* (1997), “Frei hará cambios en el gabinete”, lunes 15 de diciembre (internet).
- Proceso* (1997), núm. 1054, 1 de enero.
- Reforma* (1997), 10 de enero; y (1996), “Votan chilenos en municipales”, domingo 27 de octubre, p. 37-A.